

A photograph of a woman in a field, likely a migrant worker, carrying a large basket of produce on her head. She is wearing a dark shirt with a logo that says "Cruz Marcha Agraria". The background shows a vast field of crops under a bright sky.

VIOLACIÓN DE DERECHOS DE LAS Y LOS JORNALEROS AGRÍCOLAS EN MÉXICO

PRIMER INFORME

**RED NACIONAL DE JORNALEROS
Y JORNALERAS AGRÍCOLAS**



VIOLACIÓN DE DERECHOS DE LAS Y LOS JORNALEROS AGRÍCOLAS EN MÉXICO

PRIMER INFORME



**RED NACIONAL DE JORNALEROS
Y JORNALERAS AGRÍCOLAS**



**RED NACIONAL DE JORNALEROS
Y JORNALERAS AGRÍCOLAS**

Cuadrante de San Francisco No. 25, Barrio Cuadrante
de San Francisco, Coyoacán, CP 04320, CDMX, México
Cel. +52 55 2267 9667

<http://cecig.org.mx/red-de-jornaleros/>

rednjjamex@gmail.com

contacto@cecig.org.mx



@RENACJJA



@RAgricolas

**VIOLACIÓN
DE DERECHOS
DE LAS Y LOS
JORNALEROS
AGRÍCOLAS
EN MÉXICO**

PRIMER INFORME

Primera edición, febrero de 2019

Ciudad de México, México, 2019

COORDINACIÓN EDITORIAL:

Isabel Margarita Nemecio Nemesio, María Mayela Blanco Ramírez y Susana Cruickshank Soria

INVESTIGACIÓN:

Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan; Centro de Desarrollo Indígena Loyola; Centro de Estudios en Cooperación Internacional y Gestión Pública; Enlace, Comunicación y Capacitación; Mixteco Yosonuvico de Sonora Cerro Nublado; Pastoral Social y Migrantes de la Diócesis de Matehuala; Respuesta Alternativa A.C. Servicio de Derechos Humanos y Desarrollo Comunitario; Voces Mesoamericanas Acción con Pueblos Migrantes; Red Solidaria de Derechos Humanos; Dra. Ma. Antonieta Barrón Pérez, y Dr. Celso Ortiz Marín

DISEÑO EDITORIAL Y PORTADA:

Patricia Gasca

FOTOGRAFÍA:

Centro de Desarrollo Indígena Loyola, Isabel Margarita Nemecio Nemesio y Voces Mesoamericanas Acción con Pueblos Migrantes

LUSH FRESH
HANDMADE
COSMETICS

HIP

**HISPANICS
IN PHILANTHROPY**
The power of giving and connecting

Este Informe está financiado por Lush Fresh Handmade Cosmetics en México, y para su impresión por Hispanics in Philanthropy The Power of Giving and Connecting, sin embargo, su contenido es responsabilidad exclusiva de la Red Nacional de Jornaleros y Jornaleras Agrícolas, por lo que únicamente refleja la posición de la Red.

*La información de esta publicación puede reproducirse libremente.
Por favor cite la fuente, Red Nacional de Jornaleros y Jornaleras Agrícolas*

PRESENTACIÓN	5
CAPÍTULO I	9
CAUSAS DE LA MIGRACIÓN INTERNA AGRÍCOLA Y PERFIL DE LAS Y LOS JORNALEROS AGRÍCOLAS EN MÉXICO	
1.1 ¿Por qué migran?	11
1.2 Perfil de las y los jornaleros agrícolas. Hablan los números	14
CAPÍTULO II	17
LA AGROINDUSTRIA Y LA PRODUCCIÓN DE HORTALIZAS EN MÉXICO	
2.1 Perfil de los estados expulsores y de atracción de mano de obra jornalera en México	24
2.2 El perfil de las entidades de mayor expulsión de mano de obra, y entidades mixtas que expulsan y atraen población jornalera	27
<i>Chiapas</i>	28
<i>Guerrero</i>	30
<i>Oaxaca</i>	32
<i>San Luis Potosí</i>	33
<i>Guanajuato</i>	36
CAPÍTULO III	39
CONTRATACIÓN, RECLUTAMIENTO Y ENGANCHE: PRINCIPALES PROBLEMÁTICAS DETECTADAS QUE ENFRENTAN LAS PERSONAS JORNALERAS MIGRANTES EN SU MOVILIDAD LABORAL AGRÍCOLA INTERNA EN MÉXICO	
3.1 Ofertas de empleo, mecanismos de contratación y/o enganche	43
3.2 Problemáticas que enfrentan durante el tránsito las personas jornaleras agrícolas	46

CAPÍTULO IV	53
VIOLACIONES A DERECHOS DE LAS PERSONAS JORNALERAS EN LOS LUGARES DE DESTINO	
4.1 Mujeres jornaleras vs Violencia de género	55
4.2 Acceso de las niñas, niños y adolescentes jornaleros al derecho a la Educación	56
4.3 Salud. Sin acceso a la Seguridad Social	59
4.4 Los testimonios hablan	60
4.5 Sobre las condiciones de vida de las y los jornaleros agrícolas y sus familias en los albergues subrogados por la Secretaría de Desarrollo Social	68
<i>Sinaloa</i>	69
<i>San Luis Potosí</i>	70
<i>Guanajuato</i>	71
<i>Michoacán</i>	71
4.6 Sobre las condiciones de vida de los/as jornaleros/as migrantes y sus familias en las comunidades en las que se hospedan (particulares o que rentan)	75
<i>San Luis Potosí</i>	75
<i>Guanajuato</i>	75
CAPÍTULO V	77
POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA ATENCIÓN DE LAS PERSONAS JORNALERAS Y SUS FAMILIAS EN MÉXICO: REESTRUCTURACIÓN DE LOS PROGRAMAS, REDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO, LIMITADA COBERTURA DE LA POBLACIÓN OBJETIVO Y AUSENCIA DE DERECHOS	
5.1 Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas	79
5.2 Programas para las personas jornaleras en el Sector Agrícola instrumentados por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social	81
<i>Movilidad laboral para el Sector Agrícola</i>	82
<i>Certificación de Competencias Laborales</i>	82
<i>Eradicación del Trabajo Infantil Agrícola</i>	82
<i>Vinculación interinstitucional</i>	83
<i>Inspecciones en campos agrícolas</i>	83
<i>Talleres de capacitación sobre derechos laborales de las mujeres jornaleras agrícolas</i>	83
CONCLUSIONES	87
RECOMENDACIONES DE POLÍTICA PÚBLICA CON ENFOQUE DE DERECHOS	88
BIBLIOGRAFÍA	92

En México, las y los jornaleros agrícolas migrantes suelen estar en una situación de mayor vulnerabilidad debido a los diferentes factores que están relacionados directa o indirectamente con su decisión de migrar a otros estados, para emplearse en las actividades agrícolas. Sin embargo, durante los procesos migratorios enfrentan diferentes situaciones que evidencian la falta de respeto y garantía de sus derechos humanos y laborales.

Las y los jornaleros junto con sus familias están expuestos en los campos agrícolas a que sean víctimas de abusos que van desde irregularidades en el pago de sus salarios, jornadas laborales superiores a las ocho horas, condiciones de explotación que conllevan a que en el contexto de la población jornalera exista una normalización del abuso y de la explotación. Si bien el principio de no discriminación e igualdad ante la ley obliga a que el Estado mexicano garantice el respeto de los derechos laborales de los/as trabajadores/as agrícolas migrantes, en la práctica el hecho de ser *trabajadores/as migrantes internos/as* y sobre todo *indígenas*, conlleva a que estas personas no sean consideradas como sujetos y sujetas de derechos.

Frente a esta problemática, algunas organizaciones no gubernamentales comenzaron a atender diversas situaciones que daban cuenta de la sistemática violación de los derechos humanos y laborales de las y los jornaleros agrícolas y sus familias. Es así, como en 2014 se coordinaron diversas acciones de seguimiento y acompañamiento de casos emblemáticos sobre violaciones graves a los derechos humanos de grupos de jornaleros/as agrícolas, que evidenciaban las condiciones de vida y de trabajo en los campos agrícolas, así como los riesgos eminentes respecto a la contratación de mano de obra de niños y niñas menores de 12 años y adolescentes en campos agrícolas de México.

El acompañamiento del proceso de documentación y visibilidad se dio primeramente entre el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan A.C. (Guerrero), Respuesta Alternativa A.C. (San Luis Potosí), Pastoral Social y Migrantes de la Diócesis de Matehuala (San Luis Potosí) y el Centro de Desarrollo Indígena Loyola A.C. (Guanajuato). Luego de estas acciones conjuntas, surgió el interés, la necesidad y la urgencia de establecer un espacio común donde se construyeran propuestas a partir del trabajo de actores estratégicos, desde académicos/as hasta organizaciones civiles y sociales.

En ese mismo año se sostuvo una primera reunión en la Ciudad de México, gracias al apoyo de *Catholic Relief Services* (CRS), donde organizaciones y académicos con larga trayectoria en el tema de la migración interna, particularmente de jornaleros y jornaleras agrícolas, hicieron un análisis sobre la problemática, construyeron una primera propuesta para visibilizar y posicionar el tema en la opinión pública y, fundamentalmente, acordaron la construcción de un espacio común, de diálogo, aprendizaje e intercambio de experiencias.

Así nació la Red Nacional de Jornaleros y Jornaleras Agrícolas (REJJA). Durante el 2015, la Red siguió posicionando el tema y se sumó a su visibilidad frente a la coyuntura política de San Quintín, Baja California, por la huelga de cientos de jornaleros/as agrícolas en demanda de la mejora de sus condiciones laborales. En 2016 el Centro de Estudios en Cooperación Internacional y Gestión Pública, A.C., asumió la coordinación técnica de la Red.

La Red tiene por objetivo general el de contribuir con las personas jornaleras agrícolas y sus familias a mejorar sus condiciones de vida, entendidas éstas como condiciones de salud, vivienda y educación; así como sus condiciones laborales, entendidas como acceso a un salario justo y con prestaciones de ley, desde un enfoque de género, interculturalidad y de derechos humanos.

La Red se conformó a partir del 2014 por el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan A.C.; el Centro de Desarrollo Indígena Loyola A.C.; el Centro de Estudios en Cooperación Internacional y Gestión Pública A.C.; Mixteco Yosonuvico de Sonora Cerro Nublado A.C.; Enlace, Comunicación y Capacitación A.C.; Pastoral Social y Migrantes de la Diócesis de Matehuala; Respuesta Alternativa A.C. Servicio de Derechos Humanos y Desarrollo Comunitario; Voces Mesoamericanas Acción con Pueblos Migrantes A.C.; Dra. Ma. Antonieta Barrón Pérez, académica de la Facultad de Economía, Universidad Nacional Autónoma de México; Dr. Celso Ortiz Marín, académico de la Universidad Autónoma Intercultural de Sinaloa; y Mariano Yarza, defensor independiente. En los primeros años también participó el Frente Indígena de Organizaciones Binacionales. En octubre de 2018 se incorporaron el Centro de Acompañamiento a Migrantes A.C.; la Coalición Indígena de Migrantes de Chiapas; el Proyecto de Derechos Económicos Sociales y Culturales A.C.; y el Soc. José Eduardo Calvario Parra, académico de El Colegio de Sonora y de la Universidad de Sonora.

La Red, a partir de la labor que realizan sus integrantes, del acompañamiento que brindan a la población jornalera y del trabajo de investigación que han realizado, ha recabado diversos testimonios que fueron sistematizados en fichas de documentación que se aplicaron en algunos estados expulsores y receptores de mano de obra jornalera donde tiene presencia la Red.

Algunos testimonios se retomaron garantizando el anonimato de las personas. Este proceso de documentación se realizó en Sonora, Sinaloa, San Luis Potosí, Guanajuato, Veracruz, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, entre 2016 y julio de 2018. A partir de estos tes-

timonios, la Red inició un proceso de análisis para identificar las violaciones de derechos humanos más recurrentes, así como los vacíos existentes en las políticas públicas vigentes en México, para la atención de la población jornalera. Finalmente, el diagnóstico concluye con una serie de recomendaciones para el Gobierno mexicano y las principales instituciones encargadas de la atención de las personas jornaleras y sus familias, partiendo de un enfoque de derechos humanos.

Este esfuerzo no hubiera sido posible sin el generoso apoyo de Lush Fresh Handmade Cosmetics (LUSH), a quien agradecemos por su confianza, oportunidad y otorgamiento de una subvención económica para la elaboración de este Primer Informe de la Red Nacional de Jornaleros y Jornaleras Agrícolas en México; de Hispanics in Philanthropy The Power of Giving and Connecting (HIP) por su sensibilidad con la problemática que enfrentan las personas jornaleras en México, por su confianza en la labor que realiza la Red, así como por su valioso apoyo para la impresión del informe; finalmente agradecemos a Catholic Relief Services (CRS) por su invaluable compromiso que han forjado desde el 2014 con la Red, por su cercanía, colaboración y financiamiento que ha impulsado desde un inicio el trabajo de este colectivo frente a un contexto de movilidad humana que, a nivel nacional, evidencia la complejidad, la invisibilidad y rezago de la migración interna agrícola en la agenda política de nuestro país.

Pero principalmente agradecemos a las y los jornaleros agrícolas que nos compartieron sus testimonios para que sean parte de este informe, lo que nos ha permitido dar voz y humanizar a los hombres, mujeres, jóvenes, adolescentes, niñas y niños, que son actores claves, pero también son el eslabón más débil dentro de estas cadenas de producción y de los procesos de abuso y explotación laboral agrícola vigentes en México.



CAPÍTULO I

CAUSAS DE LA MIGRACIÓN INTERNA AGRÍCOLA Y PERFIL DE LAS Y LOS JORNALEROS AGRÍCOLAS EN MÉXICO

CAPÍTULO I

1.1 ¿POR QUÉ MIGRAN?

En México, de acuerdo con el Índice de Marginación 2015 del Consejo Nacional de Población (CONAPO)¹, alrededor de mil 55 municipios viven 16.3 millones de personas con alta y muy alta marginación, es decir, el 13.7 por ciento de las y los mexicanos. En estos municipios la población es más vulnerable a nueve formas de exclusión que son: la discriminación, la inequidad de género, el analfabetismo, la primaria incompleta, el hacinamiento, los bajos ingresos, viviendas con piso de tierra, no cuentan con drenaje ni agua potable, ni con energía eléctrica.²

Estas formas de exclusión, en conjunto con las condiciones sociales y económicas, y la marginación histórica influyen en los movimientos migratorios de los pueblos de México. En el caso de la población jornalera agrícola, rural, campesina e indígena, la precarización de sus condiciones de vida profundiza el conjunto de desigualdades de género, clase y etnia, y contribuye a normalizar las violencias y violaciones a sus derechos humanos, destacando las ocurridas en el plano social y laboral.

El telón de fondo de la brecha creciente entre la reducción del empleo agrícola y el correlativo aumento de la migración para ganar ingresos lejos del hogar es la ausencia de una política agrícola que

fortalezca con dignidad la economía campesina y el acceso a derechos humanos en las comunidades de origen; y, por otro lado, la creciente demanda de mano de obra para satisfacer la producción agroindustrial del mundo³.

La comprensión de las problemáticas que enfrentan las y los jornaleros como campesinos empobrecidos o sin tierra, rebasa el enfoque dual de regiones de expulsión-regiones de atracción de mano de obra, o la conformación de mercados de trabajo. Es preciso abordar las dimensiones demográficas, económicas, sociales, políticas y etno-culturales en el plano local, nacional y global para comprender la vida y las dinámicas de la población jornalera, incluyendo la indígena, centrándonos en sus propias expectativas de transformación.

La vulnerabilidad de las y los jornaleros agrícolas está dada, en principio, por las condiciones de marginación y exclusión prevalecientes en los lugares de origen de quienes migran, pues más de la mitad de

¹ Consejo Nacional de Población, 2016.

² Se puede consultar: <https://www.sdpnoticias.com/nacional/2016/03/26/viven-en-alta-marginacion-163-millones-de-mexicanos> o https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/159051/00_Preliminares.pdf

³ Clériga, Deyanira y Aldo Ledón, "Caminando en la cuerda floja: jornaleras y jornaleros indígenas migrantes en México, entre la explotación laboral y la trata de personas", en *Trata de personas. Un acercamiento a la realidad nacional*. CNDH, 2018, (en imprenta).

esta población procede de zonas rurales, usualmente aisladas, de los estados más pobres del país. Es decir, que de acuerdo con el tamaño de la localidad en la que residen, 90.3% (5.4 millones de personas) de la población objetivo jornalera se ubica en localidades con menos de 15,000 habitantes⁴, y 12.1% (719 mil personas) hablan alguna lengua indígena⁵. De la población rural (5 millones 955 mil 889), se encuentran en situación de pobreza 4 millones 493 mil 366 y el 12.2% habla una lengua indígena.⁶

En el ámbito nacional, en el 2012, 75.4% de la población potencial se encontraba en condición de pobreza, y el 23.6% en pobreza extrema. Es decir, la incidencia de pobreza extrema entre la población potencial es mayor al doble de la media nacional (9.5%)⁷. Prácticamente la totalidad de la población potencial, es decir, el 97.2% presenta al menos una carencia social, mientras que el 55.6% presenta al menos tres carencias sociales. Se destaca que las carencias sociales son mayores entre los/as jornaleros/as en comparación con las observadas en la población total del país: 72.4% con al menos una carencia social y 22.1% con tres o más carencias.

Entre la población potencial, la carencia social con mayor incidencia es la relacionada con el acceso a la seguridad social (89.1%), seguida de la carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda (57.1%), por acceso a la alimentación (40.0%), por rezago

educativo (35.7%), calidad y espacios en la vivienda (29.5%), y acceso a los servicios de salud (21.2%); la más dolorosa es la carencia por acceso a la alimentación. De la población potencial con al menos una carencia, un alto porcentaje es indígena (46.3%)⁸.

También se observa un proceso de pauperización: 99% de los y las jornaleros sufre pobreza por insuficiencia de ingresos o por carencias sociales. Esto explica de cierta manera por qué entre la población jornalera ingresa un mayor número de miembros de la familia al trabajo remunerado.

Es frecuente que las y los jornaleros viajen acompañados de sus familias en condiciones de adversidad que incrementan su vulnerabilidad y pobreza, y los expone como familia a diversos riesgos que se traducen en accidentes y enfermedades que empeoran su endeble situación de bienestar. Existe una creciente incorporación de las mujeres en estas actividades, sea que vayan con sus esposos, o por sí mismas en compañía de sus hijas e hijos. Viajan también muchas mujeres jóvenes con hermanos/as menores de edad, o en compañía de algún familiar como abuelos, tíos, padrinos o vecinos.

Para este sector de la población, la migración rural-rural y el mercado de trabajo agrícola ha representado ser la única oportunidad para acceder a un empleo (en la

⁴ Si bien el INEGI señala que población rural es aquella que vive en localidades de menos de 2,500 habitantes, es aceptado que por las formas de vida de la población en localidades de 10,000 o de 15,000 habitantes, tienden a ser mucho más rurales que urbanas, en Gómez Oliver, "Evolución del empleo y de la productividad en el sector agropecuario en México", E. Naciones Unidas, 2016, CEPAL, FIDA.

⁵ Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), Informe de Pobreza en México 2014.

⁶ Nota de actualización de la población potencial del Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas (PAJA) de marzo del 2016, consultada en línea en: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/128228/Nota_de_actualizacion_de_las_poblaciones_potencial_y_objetivo_del_PAJA_2016.pdf

⁷ CONEVAL, Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social en México 2012.

⁸ De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), considera las "carencias sociales" a partir de la definición, identificación y medición de la pobreza en México, tomando en consideración al menos los siguientes indicadores: el ingreso corriente per cápita, el rezago educativo promedio en el hogar, acceso a los servicios de salud y a la seguridad social, calidad y espacios de la vivienda, acceso a los servicios básicos en la vivienda, acceso a la alimentación y grado de cohesión social.

mayoría de los casos temporal), y adquirir ingresos – precarios– para el sostén familiar, ante el agotamiento también creciente, de los medios de producción y las alternativas para su reproducción económica, social y cultural. Es un sector de la población nacional para quienes, en la mayoría de los casos, la migración y la incorporación al mercado de trabajo agrícola significan –a veces junto con la siembra de sus pequeñas y exiguas parcelas– las únicas estrategias de supervivencia⁹.

La migración como una de las estrategias a la que más recurren estas familias del medio rural depende de las ofertas de empleo del mercado de trabajo rural en nuestro país. En este rubro, la mayor demanda proviene de las actividades agrícolas asociadas a la siembra y cosecha de cultivos intensivos, principalmente hortalizas orientadas a la exportación. Ante el auge de esta actividad económica, la posibilidad de contratarse hasta por seis meses ha incrementado el interés y la necesidad de insertarse en estos mercados de trabajo entre los campesinos pobres, la población rural sin tierra y la población indígena, aumentando la migración temporal y permanente en algunas regiones¹⁰ de estados productores como Sinaloa, Baja California, Baja California Sur, Guanajuato, San Luis Potosí, entre los más importantes.

La falta de empleo en sus lugares de origen y la reducción del gasto social para población vulnerable, han sido algunos de los principales factores desde hace más de dos décadas de expulsión de la población jornalera, como lo muestran los datos recabados en la Encuesta Nacional de Jornaleros Agrícolas 2003-2004

(ENJO), que señalaba que de 2,712 personas¹¹, el 51.4% migró por falta de trabajo en su lugar de origen, (Ver Cuadro 1).

CUADRO 1	
CAUSAS DE LA MIGRACIÓN DE LOS/AS JORNALEROS/AS	
CAUSA	%
No tiene tierras	5.9
Tiene poca tierra	1.7
Siniestro en parcela	0.8
Otro	8.5
Necesita efectivo	30.7
Compromisos	1.0
No tiene trabajo	51.4
	100.0
Total	2,712

Fuente: ENJO 2003 – 2004

La persistencia de esta condición hace que los/as migrantes temporales diversifiquen sus rutas migratorias. La Encuesta Nacional de Jornaleros Agrícolas 2009 (ENJO) arrojó que, de 2 mil 908 jornaleros (as) de la muestra, 855 jornaleros (as) migraron¹², 57.4% migró a un solo destino, 25.5% a dos entidades, 12.0% a tres y el resto a más de tres. La encuesta no registró las localidades de destino, pero al desagregar por entidad la cantidad de jornaleros/as migrantes, se encontró que 40% va a Sinaloa, 15% a Baja California Sur y 15% a Chihuahua.

⁹ Rojas Rangel, Teresa J., “Migración rural jornalera en México: la circularidad de la pobreza”, Iberofórum. Revista de Ciencias Sociales de la Universidad Iberoamericana, vol. XII, núm. 23, enero-junio, Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, México, 2017, págs. 4-5.

¹⁰ Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, “La Montaña de Guerrero: Tierra de Mujeres Migrantes”, Fundación Ford, Tlapa, Guerrero, México, 2016, pág. 20.

¹¹ Se tomó la muestra de 2004 pues la encuesta de 2009 no pregunta ¿por qué prefiere ir a X lugar? y no ¿porque migró? Y la respuesta no pudo haber cambiado radicalmente en 2009 pues las condiciones económicas se han agudizado.

¹² Se usa el dato de la muestra de la ENJO 2009, sin el factor de expansión.

Por ello, cobra especial relevancia analizar la migración interna rural-rural vinculada al mercado de trabajo agrícola debido a: 1) la relevancia que tiene esta fuerza de trabajo para la sustentabilidad alimentaria y la riqueza que genera, particularmente para las empresas agroexportadoras conectadas al capital global; 2) por la flexibilidad laboral que enfrentan y la precariedad extrema en sus condiciones de vida, tanto en las regiones de origen como de destino; 3) por las asimetrías sociales, étnicas, de género y etarias que sufren, dadas las características del mercado laboral en el que se insertan; y 4) por la recurrente violación a los derechos humanos que padece la población incorporada a estos flujos migratorios.

1.2 PERFIL DE LAS Y LOS JORNALEROS AGRÍCOLAS. HABLAN LOS NÚMEROS

Es importante precisar algunas diferencias entre la migración jornalera. En México encontramos tres tipos de jornaleros y jornaleras: a) quienes viven y trabajan en su lugar de origen, b) las y los migrantes temporales que trabajan en la agricultura intensiva, (en cultivos de exportación) y salen de su lugar de origen a los campos de los estados productores y, finalmente, c) las y los migrantes asentados en las regiones de atracción de agricultura intensiva.

Según el Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas (PAJA), la población potencial¹³ en marzo del 2016, y con base en la clasificación de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2014 (ENIGH)¹⁴, ascendió a 5 millones 955 mil 889 personas, de los cuales 1 millón 543 mil 400 son jornaleros y jornaleras agrícolas y 4 millones 412 mil 489 son integrantes de su familia.

El 56.5% de esta población se concentra en ocho estados: Veracruz, Michoacán, Puebla, Jalisco, Estado de México, Sinaloa, Guanajuato y Sonora. Los principales estados expulsos netos son Oaxaca, Guerrero y Chiapas¹⁵, las entidades expulsoras y receptoras de jornaleros/as son Michoacán, Puebla, Nayarit, Morelos, San Luis Potosí y Veracruz, las entidades receptoras netas de jornaleros/as son Sinaloa, Baja California, Baja California Sur, Durango, Chihuahua y Sonora.

Entidades como Hidalgo, Guanajuato y Zacatecas concentran porcentajes de población jornalera mucho menor en relación con el total de la entidad. En el caso de Chiapas, si bien es un importante estado expulsor de fuerza de trabajo, también es receptor de jornaleras y jornaleros migrantes centroamericanos, principalmente guatemaltecos. Como puede verse en el Cuadro 2, según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) para 2017, en 15 entidades se concentra el 81% de la población jornalera. Por sexo, la población es de 20% mujeres y el 80% son hombres jornaleros¹⁶. Dentro de este grupo la participación de las mujeres en los campos agrícolas ha crecido, de acuerdo con la ENJO 2009, registran 116 mil 269 mujeres, lo que representa 7% del total de jornaleros y jornaleras agrícolas, de las cuales 25 mil 918 son mujeres jefas de familia. Sin embargo, si tomamos los datos de la ENOE segundo trimestre, en 2017 registra 2 millones 990 mil 049 jornaleros, de los cuales el

¹³ Mujeres y hombres de 16 años o más que laboran como jornaleros/as agrícolas, así como los integrantes de su hogar.

¹⁴ Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2014. Se puede consultar en: <http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/enchogares/regulares/enigh/tradicional/2014/>

¹⁵ Con el movimiento zapatista, abrieron caminos por toda la entidad para que entrara el ejército, pero junto con ello, salió la población.

¹⁶ Reglas de Operación del Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas 2018, con base en ENOE-II-2017.

10% son mujeres. Las diferencias entre las dos fuentes sugieren que la ENOE registra de mejor forma un fenómeno.

CUADRO 2				
JORNALEROS/AS POR ENTIDAD FEDERATIVA Y SEXO. 2017				
ENTIDAD	MUJERES	HOMBRES	TOTAL	% MUJERES
Veracruz	19,639	378,460	398,099	4.93
Michoacán	27,317	232,721	260,037	10.51
Puebla	31,009	206,395	237,405	13.06
Jalisco	29,574	207,077	236,651	12.50
México	13,968	155,831	169,799	8.23
Sinaloa	27,771	127,941	155,712	17.83
Guanajuato	25,098	126,365	151,463	16.57
Chiapas	2,694	131,490	134,184	2.01
Sonora	26,467	98,691	125,158	21.15
Hidalgo	9,590	101,787	111,376	8.61
Oaxaca	5,818	101,408	107,226	5.43
San Luis Potosí	5,822	89,004	94,826	6.14
Tabasco	201	84,466	84,667	0.24
Chihuahua	11,934	68,323	80,257	14.87
Baja California	20,330	50,357	70,687	28.76
Otras Entidades	50,142	524,366	574,508	8.73
Nacional	307,373	2,684,680	2,992,053	10.27

Fuente: INEGI. ENOE. 2017, segundo trimestre.

En este sentido, el cuadro muestra cómo los mercados de trabajo de hortalizas favorecen la participación femenina en Baja California, Sonora, Sinaloa, Guanajuato, donde supera con creces el promedio nacional. Lo anterior lo corrobora la composición por sexo de Veracruz, en donde predominan cultivos intensivos en mano de obra perennes (caña de azúcar, cítricos, mango, piña) en el que predominan los jornaleros hombres. Según las reglas de operación del PAJA en la población potencial -que incluye a la familia jornalera- las mujeres representan 47.5% (2.8

millones), mientras que los hombres constituyen el restante 52.5% (3.1 millones)¹⁷.

Por otro lado, la población de 3 a 15 años que forma parte de la población potencial es de alrededor de 1.7 millones de personas, es decir, el 27.8%¹⁸. La información

¹⁷ Se puede consultar en: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/265243/FMyE_20_S065.pdf

¹⁸ Módulo de Trabajo Infantil (MTI) de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del INEGI 2013.

sobre el trabajo infantil revela que 711 mil 688 niñas, niños y adolescentes en hogares jornaleros tienen como actividad principal el trabajo remunerado como jornaleros y jornaleras agrícolas, oficios diversos y trabajo doméstico; 60% tienen una educación inferior a la básica; una tercera parte ha cursado entre 1 y 5 años de educación primaria, el 9% terminó la primaria y el 15.8% terminó la secundaria; y siete de cada diez no recibe ningún apoyo gubernamental. Las cifras son muy inferiores a los promedios nacionales que señala el censo de población, sin embargo, a pesar de ello, más de la mitad de las y los niños jornaleros asiste a la escuela.

A pesar de las restricciones que existen en materia laboral respecto a la desincentivación del trabajo infantil agrícola y la presencia de programas de asistencia social, el trabajo infantil persiste. Éste se debe enfrentar de manera integral, intercultural y en un marco de derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes.

En 2015 se encontraban trabajando en el sector agropecuario 5 mil 359 niñas, 25 mil 054 niños (de 5 a 15 años) y 660 mil 135 adolescentes (entre 16 y 17 años), lo que representa el 30% del total de infantes (3% niñas y 27% niños) en ese rango de edad que trabajan en el país.

Bajo este panorama, uno de los principales problemas con las estadísticas existentes es que no dan cuenta del total de población jornalera, ni tampoco los datos se actualizan de manera periódica. Las personas jornaleras migrantes son las más castigadas, pues el dato censal se levanta en hogares, y los albergues no lo son. Hay además un subregistro de mujeres jornaleras, pues si bien representan cerca del 10% en promedio nacional, en entidades de atracción como Sinaloa, Sonora, Baja California y Guanajuato esta proporción aumenta significativamente. Según la ENOE 2017, las mujeres jornaleras representan 29% en Baja California, 21% en Sonora, 18% en Sinaloa, 17% en Guanajuato y 15% en Chihuahua.



CAPÍTULO II



LA AGROINDUSTRIA Y LA PRODUCCIÓN DE HORTALIZAS EN MÉXICO

CAPÍTULO II

La conformación de mercados de trabajo agrícola en los que se concentran los/as jornaleros/as está asociada a cultivos intensivos en mano de obra para la exportación, como son las hortalizas, pues estos registran tales características que garantizan la contratación de mano de obra hasta por nueve meses; en lugares en donde operan viveros es posible que el periodo de contrato se prolongue durante los doce meses del año.

Aunado a lo anterior, existen tres elementos que vuelven muy rentable la agricultura intensiva de exportación. En primer lugar, el avance tecnológico que permite crecimientos acelerados de la productividad de la tierra. En segundo lugar, su relación con el mercado interno e internacional, pues aún en condiciones de crisis o recesión económica la demanda se mantiene: en el mercado interno, la población más desprotegida cubre sus necesidades alimentarias con hortalizas a bajo precio, la población con mejores ingresos consume además de alimentos frescos, alimentos congelados. El mercado internacional demanda permanentemente frutas y hortalizas en diferentes presentaciones: congelados, semicongelados, picados, envasados, entre otros. Habrá que agregar que la tendencia de las exportaciones mundiales de productos agrícolas en los países desarrollados es la exportación de granos alimentarios, y en los países en desarrollo, frutas y hortalizas.

Un tercer elemento que aumenta la rentabilidad de la agricultura intensiva es la explotación de la fuerza de trabajo. Las y los jornaleros agrícolas internos, particularmente los/as jornaleros/as migrantes son

los/as más explotados/as entre los/as trabajadores/as. En la agricultura intensiva y de exportación en México se forman verdaderos mercados de trabajo donde se oferta y demanda mano de obra, principalmente en los cultivos industriales como el café, caña de azúcar, tabaco; en las hortalizas destacan el jitomate (tomate rojo), la cebolla, calabacita, chile verde, chile morrón, papa, espárrago, cebollín y zanahoria; y en los frutales, limón, naranja, mango, durazno, plátano, uva, nuez, manzana, aguacate, pepino y, recientemente, las flores.

Una característica de los cultivos intensivos es el predominio de grandes extensiones de tierra para su explotación. Las llamadas *berries* han cobrado importancia en la última década: la fresa en 2004 ocupó 3 mil 002 hectáreas concentradas en Michoacán, para diciembre de 2017 ya se cosechaban casi 10 mil. La zarzamora, que no figuraba en el año 2000, en 2010 registró 6 mil 392 hectáreas de superficie cosechada y para 2016 llegaba a 12 mil 963 hectáreas¹⁹. El énfasis en estos productos es que requieren más de 750 jornadas de trabajo por hectárea²⁰ y se exporta casi el 40% de la produc-

¹⁹ Sistema de Información Agroalimentaria de Consulta (SIACON) 2016.

²⁰ Barrón, Antonieta, "Empleo en la agricultura de exportación en México", México, Facultad de Economía, unam, Juan Pablos Editor S.A., 1997.

ción. Esto no sólo significa un aumento de la demanda de fuerza de trabajo por la producción misma, el mercado exterior exige una cuota adicional de fuerza de trabajo para las distintas presentaciones de la venta a granel.

La agricultura intensiva se concentra en unas cuantas entidades: Veracruz, primer productor de caña de azúcar, absorbe el 37% de la superficie cosechada y junto con San Luis Potosí y Jalisco generan casi el 60% de la producción nacional; en el caso del café, Chiapas absorbe el 36% de la superficie cosechada; en hortalizas, Chihuahua es el principal productor de chile verde, que junto con Sinaloa absorben el 50% de la superficie cosechada total; Sinaloa es el primer productor de tomate rojo y verde, Guanajuato es el primer productor de brócoli del país y el segundo productor de espárrago después de Sonora²¹.

En las dos entidades emblemáticas productoras de hortalizas²², el minifundio es menor, aproximadamente el 20% de los predios son de 5 hectáreas y menos, explicable pues la explotación de hortalizas requiere de capital que no tienen los pequeños productores. En Baja California, el 12% de los predios son de 100 y más hectáreas y absorben el 55% de la superficie de labor, y en Sinaloa el 8.5% de los predios absorben el 50.2% de la superficie²³.

Además de la producción de materias primas, los grandes productores se relacionan con procesos posteriores a la cosecha, como la congelación de frutas y hortalizas y en menor medida para frutas deshidratadas, procesos que continúan la cadena de explotación en los/as trabajadores/as. En México hay 98 empresas de congelación de frutas y hortalizas²⁴, principalmente en Guanajuato y Michoacán, y 224 deshidratadoras de frutas y hortalizas (Véase Cuadro 3).

CUADRO 3 CONGELACIÓN DE FRUTAS Y VERDURAS			
	ESTABLECIMIENTOS	REMUNERACIONES MEDIAS MENSUALES	PRODUCTIVIDAD MEDIA ANUAL
Guanajuato	30	4,372.25	575,308.82
Michoacán	34	4,439.59	543,451.83
Baja California	3	4,322.34	266,143.57
Sinaloa	3	2,778.98	547,083.33
Jalisco	4	1,720.00	50,720.00
México	3	n.d.	85,076.92
Yucatán	3	838.89	721,133.33
Nacional	98		
Producción Bruta Total	11,237.6	Total remuneraciones	949.4

Fuente: INEGI. Censos Económicos 2014

²¹ Op. cit. SIACON 2016.

²² Diez hortalizas son las más importantes: jitomate, tomate de cáscara, papa, zanahoria, chile verde, sandía, cebolla, pepino y fresa.

²³ SAGARPA, Oficinas regionales.

²⁴ INEGI. Censos económicos 2014.

Las empresas congeladoras contratan a 17 mil 876 obreros y las deshidratadoras a 3 mil 511, la mayoría mujeres. Los salarios no son mejores que los destinados a las y los jornaleros que cortan el fruto, pues la media es de \$4,720.00 mensuales, principalmente por destajo²⁵, el total de remuneraciones apenas representan el 8% del valor de la producción de frutas y verduras congeladas. El mercado de hortalizas para procesamiento y exportación no es muy amplio, pero juega un papel muy importante en el valor de la producción. Se congela brócoli, coliflor, elote, ejote, espárragos, zanahoria, fresas, entre otros, productos locales o procedentes de otras zonas de producción, algunas veces es la misma empresa productora la que procesa los frutos.

Los productos de exportación en orden de importancia son: tomate rojo, chiles y pimientos verdes, sandías, pepinos, aguacates, limones y limas, plátanos, mangos y fresas. Cerca del 50% de producción nacional de pepinos y aguacates son de exportación, 45% de tomate rojo, alrededor del 30% de limones, mangos y chiles²⁶. En el caso de la fresa, en 1990 se exportaba 13% y para 2016 ascendió al 28% de la producción nacional.

Entre los productores de hortalizas existen quienes controlan mercado interno y mercado internacional. El comercio de productos agrícolas entre los Estados Unidos y México es vasto. México es un exportador importante de productos alimenticios a los EE. UU., que ofrece a los consumidores estadounidenses productos agrícolas frescos todo el año. México suministra un porcentaje significativo de jitomates, aguacates, chiles, berries, pepinos, limones que se disfrutan en la Unión Americana.

Por otra parte, desde ahí se exporta una cantidad significativa de manzanas, peras, uvas, cebollas, fresas, papas y duraznos a nuestro país. En 2017, México exportó más de \$11 mil millones de dólares en productos agrícolas frescos a los EE. UU. y, los EE. UU. exportaron más de \$660 millones de dólares a México²⁷. Aun si venden a intermediarios o a grandes cadenas comerciales como Walmart y Carrefour, los márgenes de ganancia son enormes. La empresa identificada con mayor presencia en el mercado de las berries es Driscoll's, originaria de Watsonville, California, donde también controla la producción y venta de fresa. En México esta empresa se encuentra en Jalisco, Michoacán y Baja California, y es posible que tenga fuerte influencia en BerryMex, también empresa transnacional.

Driscoll's es la comercializadora estadounidense más grande y conocida en el Valle de San Quintín, Baja California. Fue fundada como una pequeña empresa familiar a finales de 1800. Durante los años ha crecido progresivamente y ahora es una compañía transnacional, líder mundial del mercado de las bayas frescas. Driscoll's ha logrado ventajas competitivas muy fuertes con respecto a otras comercializadoras, gracias a las plantas patentadas y su estrategia de expansión territorial a través de una red de productores. Driscoll's ha invertido de forma privada en un departamento de genética que desarrolla variedades más resistentes a las enfermedades, adaptables a los cambios climáticos, con características estéticas preferidas por el mercado, que alcanzan temporadas muy largas de cose-

²⁵ Pago por kilo de fruto picado. Una joven que cortaba coliflor para congelar en Actopan, Hidalgo, señalaba que trabajaba de 12 a 15 horas y tenía las manos con muchos cortes por la velocidad con que cortaba la coliflor.

²⁶ FAO. Faostat 2013. Producción y comercio. Se puede consultar en: <http://www.fao.org/economic/ess/ess-trade/en/>

²⁷ "Alianza para la inocuidad de los productos agrícolas frescos y mínimamente procesados entre la COFEPRIS, el SENASICA, y la FDA una alianza dinámica en acción", México y Estados Unidos, junio de 2018, pág. 2.

cha, con mejores rendimientos y consecuentemente mayores ganancias²⁸.

Driscoll's, a través de BerryMex, ocupa tres tipos principales de esquema legal en la relación con los productores locales: 1. Compran la fruta desde empresas agrícolas independientes, 2. Involucran a los productores en una sociedad, 3. Crean una asociación en participación, o sea un contrato por el cual una empresa (agrícola) concede a la otra (BerryMex), que le aporta bienes o servicios, una participación variable en las ganancias. Driscoll's y BerryMex cobran a los productores las plantas patentadas y otras operaciones a lo largo de toda la cadena productiva y comercial. La mayor parte de los productores que entregan a Driscoll's son pequeños y necesitan que BerryMex les facilite casi todos los insumos productivos, que alimenta una deuda, una dependencia financiera y un control de todo el proceso productivo. En definitiva, el desarrollo de variedades patentadas, junto a una gestión muy estricta de los acuerdos con los agricultores locales, permite a Driscoll's tener un control profundo sobre el proceso productivo, sin tener responsabilidades directas en la gestión de la producción y el trabajo²⁹.

En este sentido, el cultivo de hortalizas y frutas concentra a las y los jornaleros migrantes temporales y asentados, que se aglutinan en unas cuantas entidades: a) Sinaloa, como primer productor de tomate rojo y tomate verde, y segundo, chile verde y papa; b) Chihuahua, primer productor de chile verde y cebolla; c) Sonora, primer productor de papa y espárrago; d) Guanajuato, primer productor de brócoli, segundo de espárragos y sexto de cebolla; e) Michoacán, primer productor de fresa y zarzamora; y f) Baja California, tercer lugar en cebolla, tomate y espárrago, segundo lugar en fresa, con la salvedad de que el rendimiento medio por hectárea supera con un gran margen otras

entidades. Esta concentración de jornaleros y jornaleras conforma verdaderos mercados de trabajo, su presencia en entidades con predominio de cultivos intensivos los vuelve visibles.

Si suponemos que cada cultivo requiere de 180 días al año³⁰, sólo para 15 cultivos se demanda 1.5 millones de jornaleros/as, la mayoría migrantes, asentados/as o temporales, es decir el 50% de las y los jornaleros registrados en el país por la ENOE (Ver Cuadro 4).

En algunas entidades predominan jornaleros hombres, como el caso de Veracruz y Tabasco, en donde después del maíz, los cultivos dominantes son el cacao, la caña de azúcar y la copra, todos cuyo requerimiento de mano de obra es masculina. La presencia de mujeres con familia en el trabajo jornalero migrante, evidencia aún más la falta de servicios básicos de subsistencia y salud en los campamentos donde llegan a vivir.

Todavía es mayoritaria la población jornalera que migra de manera pendular o golondrina (60%); esto es, que regresan a sus comunidades de origen después de periodos de seis u ocho meses de trabajo en una o varias zonas agrícolas³¹; sin embargo, los periodos de estancia se han prolongado e

²⁸ "Driscoll's, 2018", citado por Colectivo de Investigación y Acción Solidaria en *Cadena productiva y comercial de berries. El caso Driscoll's*, México, 2018, pág. 2.

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Días trabajados y jornadas de trabajo por cultivo (de la siembra a la cosecha) son estimados de registros de SAGARPA, SIAP y SIACON, diferentes referencias y Zuloaga, Alberto, "Efectos de la reforma jurídica y económica sobre el empleo en el sector agropecuario", STPS, Cuadernos de Trabajo N° 7, 1994. Estos días son escalonados, y se intensifican en la temporada de cosecha.

³¹ Rojas Rangel, Teresa J., "Migración rural jornalera en México: la circularidad de la pobreza", Iberoforum. Revista de Ciencias Sociales de la Universidad Iberoamericana, vol. XII, núm. 23, enero-junio, Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, 2017.

incluso, un mayor número de familias se han asentado en las zonas agrícolas, sin regresar temporalmente a sus lugares de origen³².

CUADRO 4 SUPERFICIE COSECHADA Y JORNADAS DE TRABAJO POR HECTÁREA DE LOS PRINCIPALES CULTIVOS INTENSIVOS EN MANO DE OBRA				
CULTIVO	SUPERFICIE COSECHADA*	JORNADAS POR HA.**	JORNADAS DE TRABAJO	DEMANDA ANUAL DE JORNALEROS POR CULTIVO
Caña de azúcar	781,054	100.34	78,370,992	435,394
Café cereza	645,638	124	80,059,074	444,773
Naranja	314,588	100.99	31,770,229	176,501
Limón	161,916	132	21,372,861	118,738
Aguacate	180,536	57.59	10,397,093	57,762
Mango	184,892	56.98	10,535,155	58,529
Chile verde	97,099	93	9,030,247	50,168
Elote	70,283	27.39	1,925,053	10,695
Papa	64,342	54.64	3,515,650	19,531
Cebolla	51,504	55.23	2,844,592	15,803
Tomate rojo (jitomate)	51,299	199	10,208,529	56,714
Tomate verde	42,076	199	8,373,210	46,518
Brócoli	31,767	43	1,365,965	7,589
Fresas	11,091	480	5,323,680	29,576
Zarzamora y Arándano	21,938	125	2,742,250	15,235
	2,703,024		277,834,578	1,543,525

Fuente: * SAGARPA, SIACON 2016

** Barrón, A. "Empleo en la agricultura de exportación". UNAM, Juan Pablos Editor. 1997.

Por un lado, el aumento de la superficie de cultivos intensivos y las mejoras tecnológicas que incrementan la productividad en los cultivos ha detonado demanda de mano de obra, pero en menor medida a la oferta; por otro, el aumento de la pobreza y la reducción de apoyos al campo ha aumentado la necesidad de buscar fuera de la comunidad los ingresos necesarios para la subsistencia. Este fenómeno ha provocado un aumento de la explotación de las y los jornaleros agrícolas, la Ley Federal del Trabajo (LFT) les ubica en la categoría de "trabajadores del campo" y como tal, en algunas ocasiones son violentados sus derechos laborales ante situaciones de explotación laboral, largas jornadas de trabajo, nulas prestaciones, sin acceso a la salud y vivienda digna, y, en algunos casos situaciones de trata laboral.

³² Ortiz, C. y Revilla, U., "Presentación migración. Vulnerabilidad, precariedad", Revista de Ciencias Sociales y Humanidades, UAM Iztapalapa, junio, 2013.

2.1 PERFIL DE LOS ESTADOS EXPULSORES Y DE ATRACCIÓN DE MANO DE OBRA JORNALERA EN MÉXICO

De acuerdo con las características de la fuerza de trabajo y del mercado laboral en México, existe una segmentación territorial, es decir, que el territorio nacional se encuentra dividido en tres espacios geográficos y cada uno presenta desiguales niveles de desarrollo agrícola, que a su vez están directamente vinculados a los desplazamientos o procesos migratorios de la población rural e indígena, como se muestra en el Cuadro 5:

CUADRO 5 ESPACIOS GEOGRÁFICOS Y NIVELES DE DESARROLLO AGRÍCOLA POR REGIÓN EN MÉXICO		
REGIÓN	CARACTERÍSTICAS	PRODUCTORES
Norte y noroeste	Se concentran los grandes centros de producción agrícola, cuenta con un clima y relieve propicio para la agricultura.	Presentan una compleja infraestructura hidráulica y sistemas de riego, un alto uso de tecnología y un gran dinamismo productivo que le permite a las grandes empresas integrarse y competir en el mercado internacional.
Centro	Las unidades de explotación agrícola son de superficies limitadas (comparativamente con las superficies de la zona noroeste).	Predominan los pequeños productores y se ubica un número reducido de empresas vinculadas al comercio internacional, la mayor proporción de los productos agrícolas se distribuyen para el abasto nacional y para los grandes centros de comercialización regional.
Sur y sureste	Subsiste una arraigada tradición agrícola (particularmente en los territorios mayoritariamente indígenas), hay una orografía y relieve variable poco favorable para la gran mayoría de los cultivos.	Son zonas que requieren de una fuerte inversión productiva, y donde se ubican las regiones más pobres del país, con alta concentración de agricultura de subsistencia y cuya producción se orienta, en mayor cantidad hacia el autoconsumo y el mercado local.

Fuente: Elaboración propia con base en Rojas Rangel, Teresa J., “Migración rural jornalera en México: la circularidad de la pobreza”, *Iberofórum. Revista de Ciencias Sociales de la Universidad Iberoamericana*, vol. XII, núm. 23, enero-junio, 2017, Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, México, págs. 6-7.

De acuerdo con estos espacios territoriales y sus características agroproductivas, han ido estableciendo, de manera natural, zonas que presentan particularidades propias dentro del mapa migratorio, y que a su vez revela la movilidad de las familias jornaleras y sus distintos procesos migratorios de acuerdo con los estados de atracción de mano de obra migrante, así como de los estados expulsores (Ver Cuadro 6):

CUADRO 6 REGIONES DE EXPULSIÓN O DE ATRACCIÓN DE MANO DE OBRA JORNALERA MIGRANTE EN MÉXICO		
REGIÓN	CARACTERÍSTICAS	ESTADOS
Norte, particularmente la región noroeste	Se ubican las principales zonas de atracción o receptoras de migrantes, con una alta demanda de mano de obra temporal, sea local, regional o interregional, y la producción agrícola abastece al mercado nacional e internacional. Se caracterizan por contar con un sector agropecuario moderno y exportador que requiere trabajadores/as temporales durante períodos variables, que van de los cuatro a los seis meses, particularmente en la temporada de cosecha.	Los estados más representativos de atracción de fuerza de trabajo temporal son: Sinaloa, Sonora, Baja California y Baja California Sur. Sin embargo, también Coahuila, Chihuahua y Nuevo León están cobrando relevancia.
Centro	Se ubican las principales zonas intermedias o mixtas de migrantes, donde se registra tanto demanda como oferta de trabajo migrante estacional, y una mayor participación de la mano de obra local e interregional.	Son zonas que cuentan con mercados de trabajo regionales donde confluyen las lógicas tanto de atracción como de expulsión de fuerza de trabajo migrante temporal, como Puebla e Hidalgo, y otras entidades federativas como el Estado de México, Morelos y San Luis Potosí, que tradicionalmente habían sido consideradas como intermedias, pero que en las últimas dos décadas han registrado fuertes tendencias de atracción de trabajadores/as temporales incorporados/as a los encadenamientos migratorios circulares vinculados a la agricultura intensiva y el capital global. A esta lista se han sumado estados como Nayarit, Colima, Jalisco, Zacatecas, Michoacán, Guanajuato, Aguascalientes y Querétaro.
Sur y sureste	Se ubican las principales zonas expulsoras o de origen de la población que tiene la necesidad de salir en busca de trabajo y de subsistencia a diversas entidades federativas del país.	Son representativos de estas zonas, los estados más pobres del país como Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Veracruz, cuyo sector agropecuario tradicional es de subsistencia y el principal proveedor de mano de obra jornalera migrante para todos los destinos del país

Fuente: Elaboración propia tomando como base la información de Rojas Rangel, Teresa J., "Migración rural jornalera en México: la circularidad de la pobreza", Iberofórum. Revista de Ciencias Sociales de la Universidad Iberoamericana, vol. XII, núm. 23, enero-junio, 2017, Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, México, págs. 7-8.

Las características de las diferentes zonas o regiones de atracción migratoria de nuestro país, explica la alta o baja demanda de mano de obra jornalera migrante, las cuales dependen, entre otros factores: 1) de los diversos niveles de acceso y destino de los productos agrícolas al mercado local, regional, nacional e internacional, 2) de la diversificación de las actividades productivas, los recursos ecológicos y naturales de la región, 3) de la superficie total cosechada y el volumen de la producción, y 4) la introducción de nuevas tecnologías y las formas de organización de la fuerza de trabajo³³.

Esta demanda de mano de obra se resuelve mediante la contratación diferenciada de jornaleros/as locales, regionales e interregionales. La mano de obra es local, cuando la producción agrícola resuelve sus necesidades con trabajadores/as que residen en la misma zona de cultivo. Este tipo de trabajadores/as generalmente cuenta con mejores condiciones laborales dentro de la división técnica y social del mercado laboral agrícola. Es regional, cuando la demanda de mano de obra no se satisface con los/as trabajadores/as locales, y se requiere de la contratación de trabajadores/as migrantes de zonas aledañas por períodos más o menos regulares. La fuerza de trabajo es interregional, cuando la producción agrícola por su alto volumen atrae grandes cantidades de trabajadores/as de diferentes estados del país, además de absorber la mano de obra regional y local (Ver Cuadro 7)³⁴.

CUADRO 7 CARACTERÍSTICAS DE LAS ZONAS MIGRATORIAS EN MÉXICO	
TIPOLOGÍA POR ESTADOS	CARACTERÍSTICAS
De atracción	Se han formado importantes enclaves de producción agrícola que disponen de lo necesario para la agricultura comercial y se caracterizan por ser demandantes de mano de obra local o migrante. Los campos agrícolas y sus cultivos se convierten en empresas altamente rentables, gracias a: las condiciones climáticas y topográficas, la infraestructura de riego, la concentración de la propiedad del suelo, la inversión rentable de capitales para mejorar la tecnología y el acceso a importantes mercados nacionales o extranjeros, entre otros factores.
Intermedios	Se desarrolla una agricultura comercial cuya producción tiene como destino principal el mercado nacional, aunque también exportan sus productos a los Estados Unidos. El tipo de productor agrícola que se encuentra en ellos es mediano, es decir, siembra de 8 a 20 hectáreas en promedio, mismas que requieren para su producción, la contratación eventual de mano de obra para cubrir tareas determinadas por el tipo de cultivo de que se trate. Sin embargo, actualmente varios de estos productores han establecido vínculos o son prestanombres o representantes de los grandes enclaves productivos principalmente del noroeste del país.

³³ Cartón de Grammont y Lara, 2000; Lara, 200; citado por Rojas Rangel, Teresa J., "Migración rural jornalera en México: la circularidad de la pobreza", *Iberofórum. Revista de Ciencias Sociales de la Universidad Iberoamericana*, vol. XII, núm. 23, enero-junio, 2017, Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, México, pág. 9.

³⁴ *Ibid.*

CUADRO 7
CARACTERÍSTICAS DE LAS ZONAS MIGRATORIAS EN MÉXICO

TIPOLOGÍA POR ESTADOS	CARACTERÍSTICAS
Expulsores	Las economías campesinas se caracterizan por ser minifundistas con suelos muy erosionados y por carecer de insumos e infraestructura, lo cual implica una producción agrícola deficitaria, que en la mayoría de los casos es de subsistencia. Su población presenta una alta composición indígena, niveles mínimos de bienestar y poca o nula diversificación económica, por lo que sus habitantes han encontrado en la migración y el trabajo asalariado una, si no es que la única, forma de subsistencia.

Fuente: Elaboración propia retomando la información de Sánchez Muñozhiero (2006: 37), citado por Rojas Rangel, Teresa J., "Migración rural jornalera en México: la circularidad de la pobreza", Iberofórum. Revista de Ciencias Sociales de la Universidad Iberoamericana, vol. XII, núm. 23, enero-junio, 2017, Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, México, págs. 8-9.

México es un país con características demográficas migratorias que se ha ido formando de acuerdo con la heterogeneidad geográfica y productiva que ha presentado en las últimas tres décadas. A pesar de que se han establecido zonas o regiones productivas y de demanda de mano de obra jornalera migrante, es indiscutible la importancia que cada entidad federativa ha ido cobrando a nivel de su producción, distribución y exportación de sus productos, así como la movilidad humana que han ido incentivando de acuerdo con su oferta y demanda de mano de obra para las actividades agrícolas. Procesos migratorios que han impactado drásticamente no solo a los estados de origen de miles de familias del medio rural e indígena, sino en la conformación de nuevos asentamientos de población jornalera que es atraída por la producción agrícola de las zonas o regiones agrícolas.

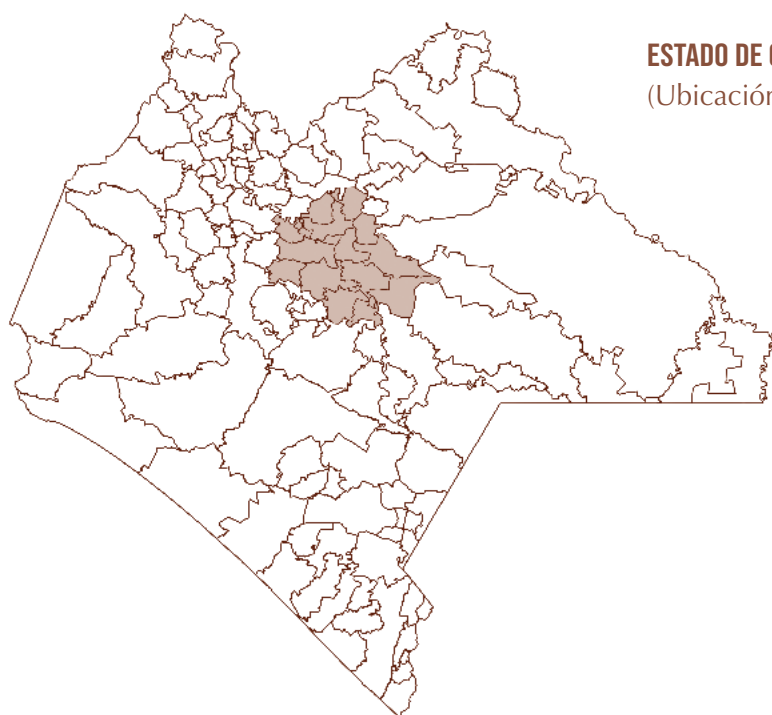
2.2 EL PERFIL DE LAS ENTIDADES DE MAYOR EXPULSIÓN DE MANO DE OBRA, Y ENTIDADES MIXTAS QUE EXPULSAN Y ATRAEN POBLACIÓN JORNALERA

Este apartado describe principalmente algunas características de los tres estados que la Red Nacional de Jornaleros y Jornaleras Agrícolas ha identificado por presentar los índices más elevados de migración interna de expulsión de población: Chiapas, Guerrero y Oaxaca, en donde los flujos migratorios se distinguen por estar compuestos en su mayoría por familias campesinas e indígenas que siguen los diferentes ciclos agrícolas en el país, para emplearse en calidad de trabajadores y trabajadoras agrícolas.

De igual manera, se describen dos entidades como San Luis Potosí y Guanajuato, que se ubican en la región Centro o Bajío (entidades mixtas) que están cobrando relevancia desde el 2013 por presentar un incremento y variabilidades en sus flujos

migratorios, así como la extensión de las tierras cultivadas y la amplia variedad de productos que se siembran y cosechan para su distribución nacional e internacional. Es importante mencionar, que los procesos migratorios que presentan estos estados han sido ampliamente documentados a partir del trabajo y acciones que realizan algunas organizaciones de la Red que se ubican en estos territorios.

Chiapas



ESTADO DE CHIAPAS

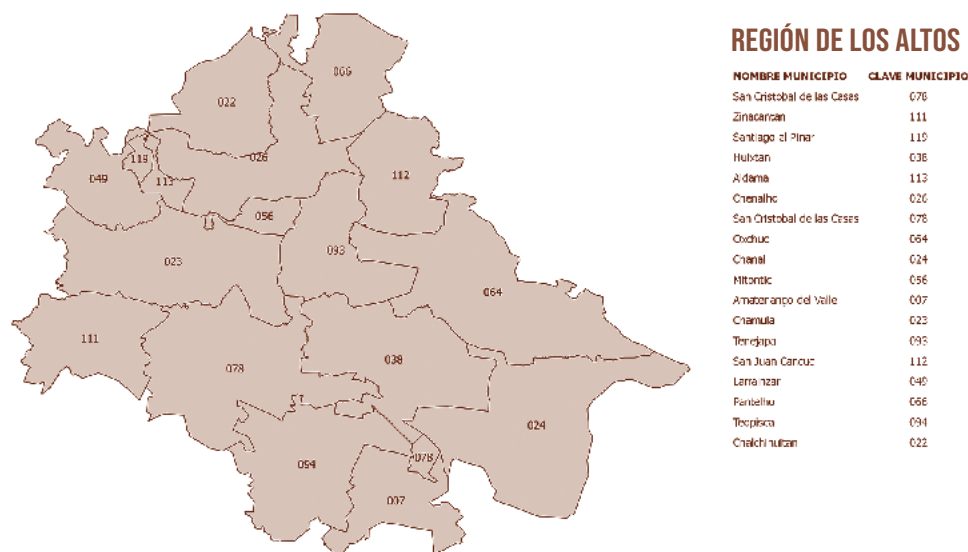
(Ubicación de la región de los Altos)

La región de los Altos es la principal expulsora de población; se conforma de 17 municipios³⁵ situados al centro del estado de Chiapas, cuya población es predominantemente indígena perteneciente a los pueblos mayas tsotsil y tseltal. La economía en las zonas rurales de esos municipios es principalmente de subsistencia, e incluye la producción milpera (maíz, frijol), hortícola (hortalizas, frutales, flores), y la cría de animales de traspatio (gallinas, guajolotes, patos, puercos y ovejas).

A través de estas actividades las familias obtienen alimentos para el autoconsumo o bien, ingresos monetarios comercializando el excedente en el mercado local. Otros ingresos monetarios provienen del empleo como peones, del pequeño comercio (venta de abarrotes o artesanías) y la producción de café³⁶. Las estructuras de la propiedad varían en función de la densidad de población, y se encuentran fuertemente influenciadas por el sistema hereditario

³⁵ Aldama, Amatenango del Valle, Chalchihuitán, Chamula, Chanal, Chenalhó, Huixtán, San Andrés Larráinzar, Mitontic, Oxchuc, Pantelhó, San Cristóbal de las Casas, San Juan Cancuc, Santiago El Pinar, Tenejapa, Teopisca y Zinacantán.

³⁶ Se calcula que los ingresos mensuales en la región oscilan entre los mil 800 y tres mil pesos para familias entre cinco y 10 miembros.



patrilineal de la tierra, el cual excluye de manera automática a las mujeres. La presión de la población sobre la propiedad detona procesos de minifundización y concentración agraria que impactan en el incremento del contingente de campesinos jóvenes sin tierra: 70% es propietario o poseedor de sus parcelas, 15% renta para sembrar y otro 15% carece por completo de tierra.

A este proceso se suman las condiciones orográficas y climatológicas que dificultan la siembra, como lo accidentado del terreno (con pendientes y elevaciones pronunciadas), la pérdida de suelo, y las inclemencias locales del cambio climático: lluvias, heladas, sequías y plagas. En 2015, por ejemplo, se calcula que la roya (es un hongo fitoparásito obligado del café) acabó con el 60% de la producción.

Las cifras oficiales de cobertura de servicios básicos señalan que 90% cuenta con agua potable, 60% con drenaje, 100% tiene energía eléctrica, aunque no existe alumbrado público y 70% de los caminos son de terracería.

Existen clínicas comunitarias en las que la atención médica es gratuita, aunque irregular, y los medicamentos corren a cargo de los pacientes. En cuanto a

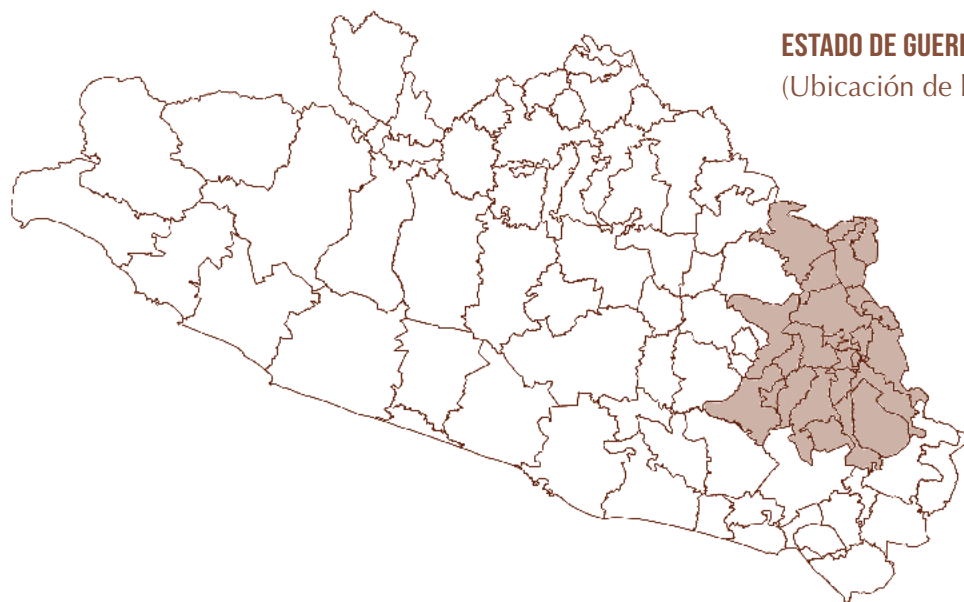
la educación, la mayoría de las localidades cuenta con primaria, algunas con secundaria y en promedio existen dos escuelas de nivel medio superior por municipio.

Sólo una persona de cada cien logra acceder a la educación superior³⁷.

En síntesis, la escasez agraria, los bajos rendimientos y la fluctuación de los precios de los productos limitan los ingresos necesarios para cubrir las necesidades mínimas de alimentación y subsistencia, y explican que las principales fuentes de ingresos monetarios sean los subsidios de programas sociales mediante transferencias directas, el trabajo asalariado en cabeceras municipales de la región y el envío de remesas desde lugares cada vez más lejanos en el país y Estados Unidos.

³⁷ Consejo Nacional de Población (CONAPO), “Índice de marginación por entidad federativa y municipio 2015”, Recuperado el 27 de agosto de 2018 de: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/159051/00_Preliminares.pdf

Guerrero



ESTADO DE GUERRERO

(Ubicación de la región La Montaña)

El estado de Guerrero ocupa el quinto lugar de migración al extranjero y el primero a nivel nacional de migrantes internos. De acuerdo con los datos del Consulado General Mexicano, el 11.5% de los mexicanos en Estados Unidos son de Guerrero, concentrados principalmente en la ciudad de Chicago.

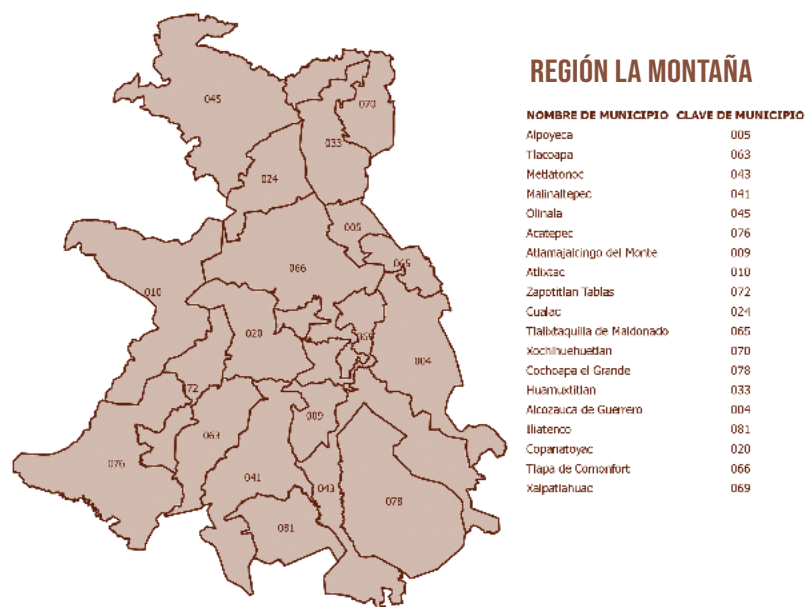
Con relación al ingreso por producto del trabajo asalariado de la población indígena estatal de 15 años en adelante, se tienen registrados 53,041 trabajadores que no tienen ningún ingreso y conforman el 45.7%; 27,964 forman parte de la población indígena que percibe menos de un salario mínimo mensual (24.1%) lo que provoca altos niveles de migración a estados como Sinaloa, Sonora, Baja California, Morelos, Guanajuato y San Luis Potosí en donde trabajan como jornaleros/as agrícolas. El 54.94% de las familias tienen ingresos de hasta dos salarios mínimos³⁸.

Además de las carencias en infraestructura, la situación de pobreza obliga a los niños y niñas a trabajar para contribuir a la economía familiar, de manera que 31.6% de la población mayor de 15 años no terminó la educación primaria, 15.3% no ha asistido a la escuela y 18% es analfabeta (de este total, 60% son mujeres). Cerca del 15% de la población del estado forma parte de los pueblos nahuas, ñuu savi y me'phaa, tres de los cuatro pueblos indígenas del estado, de los cuales 50.5% son analfabetas y 29.5% monolingües³⁹.

La región Montaña es conocida por sus continuas condiciones de marginación y la exclusión social. De los 19 municipios

³⁸ Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) 2010; "Grado de Rezago Social por Estado. Principales resultados, Guerrero". Recuperado el 27 de agosto de 2018 de <http://www.sipaz.org/guerrero-en-datos/>

³⁹ Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) 2010, "Indicadores por entidad federativa". Recuperado el 27 de agosto de 2018 de <http://www.sipaz.org/guerrero-en-datos/>



que la integran⁴⁰, cinco mantienen porcentajes de pobreza extrema mayores al 70% (Cochoapa el Grande 87.7%, Metlatónoc 76.7%, Atlamajalcingo del Monte 71.5%, Alcozauca de Guerrero 69.6% y Acatepec 68.9%)⁴¹.

La economía local se apoya en la agricultura de autosubsistencia basada en la milpa (maíz, frijol, calabaza), el trabajo asalariado y la siembra de cultivos ilícitos, entre ellos la marihuana y el opio.

La articulación de la producción de autoconsumo y los enervantes permitió a muchas familias mantenerse en la comunidad sin necesidad de migrar. Sin embargo, las disputas entre cárteles por el control de la siembra y comercialización y precio de goma de opio han profundizado las condiciones de marginación e inseguridad, detonando desplazamientos de

comunidades enteras, como en Chilapa de Álvarez⁴².

La presencia de las Fuerzas Armadas en la vida pública y particularmente en el ámbito de la seguridad ha sido una constante desde los movimientos guerrilleros del siglo XX. Actualmente, justifican su despliegue como parte de la “Guerra contra el narcotráfico”, aunque su función sea la contención social, como ha sido una constante histórica en la entidad.

⁴⁰ Acatepec, Alcozauca, Atlamajalcingo del Monte, Atlixac, Cochoapa el Grande, Copanatoyac, Cualác, Huamuxtitlán, Iliatenco, Malinaltepec, Metlatónoc, Olinalá, Xalpatláhuac, Tlapa de Comonfort, Tlacoapa, Alpoyeca, Tlalixtaquilla de Maldonado, Xochihuehuetlán y Zapotitlán Tablas.

⁴¹ Op. cit. CONEVAL 2010.

⁴² De los 25 desplazamientos forzados registrados oficialmente a nivel nacional durante 2017, siete se realizaron en el estado de Guerrero: “Episodios de Desplazamiento Interno Forzado Masivo en México. Informe 2017”. Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos. Se puede consultar en: <http://www.cmdpdh.org/publicaciones-pdf/cmdpdh-informe-de-desplazamiento-interno-masivo-en-mexico-2017.pdf>

Oaxaca



El estado de Oaxaca ocupa el primer lugar del país en cuanto a población indígena: de 3,405,990 habitantes en la entidad, 34.2% pertenece a alguno de los 16 pueblos originarios presentes en la entidad. En orden numérico se encuentran los zapotecos (31.1%), mixtecos (21.9%), mazatecos (14.5%), mixes (9.8%) y chinantecos (9.1%)⁴³. Desde 1995, el Congreso del estado reconoció la elección de autoridades municipales de acuerdo con los usos y costumbres de los pueblos indígenas (Ley de instituciones y procedimientos electorales del estado de Oaxaca⁴⁴).

Los pueblos campesinos de la región enfrentan una arraigada crisis en la economía tradicional, agravada por la degradación de las tierras de cultivo, que les depara bajos rendimientos en la producción agrícola y artesanal, insuficientes para el autoconsumo. Conflictos sociales y políticos locales causados por la

represión de caciques locales relacionados con los grupos de poder a través de instancias gubernamentales.

El 34.2% de la población activa trabaja en el sector primario; 18.8%, en el sector secundario; y 46.8%, en el terciario. La economía de autoconsumo es mayor en las comunidades indígenas, en las que domina el modelo de agricultura de subsistencia. Las remesas constituyen la tercera fuente de ingresos en el estado, después del turismo y el café. A pesar de todos los esfuerzos, se considera que el 16.3% de la población vive en condiciones de alta marginación y 28.1% en muy alta marginación; 28.3% de la población ocupada no recibe ningún ingreso y 40% hasta 2 salarios mínimos⁴⁵.

⁴³ *Op. cit.* INEGI 2010.

⁴⁴ Se puede consultar en: <http://www.ieepco.org.mx/archivos/documentos/2017/LIPEEO%20Versio%CC%81n%20final.pdf>

⁴⁵ *Op. cit.* CONEVAL 2010.

En estas circunstancias, el trabajo de cada uno de los integrantes resulta indispensable para la sobrevivencia familiar, integrando a los niños y las niñas, que suelen alternar las responsabilidades domésticas con las escolares o bien, abandonar completamente los estudios. Además, no son pocas las comunidades que no cuentan con la infraestructura adecuada para facilitar la educación, de manera que, entre la población de 15 años y más, 13.8% no tiene escolaridad alguna, 33.8% no terminó la primaria y 16% es analfabeta⁴⁶; el grado promedio de escolaridad es de 6.9 años, equivalente al primer año de secundaria. A esto se agrega que 16.1% de la población indígena de más de 5 años es monolingüe, y no cuenta con educación en su propia lengua⁴⁷.

A nivel estatal, sólo el 22.4% de los hombres y 22.9% de mujeres son derechohabientes. A esto se suma la carencia en infraestructura, la lejanía de los hospitales, y la carencia tanto de personal capacitado para su atención, como de medicamentos. Se calcula 1,3 médicos por cada 1000 habitantes⁴⁸.

Aproximadamente 150,000 oaxaqueños emigran por año al norte de México o Estados Unidos, ocupando el lugar 10 en el índice de intensidad migratoria a nivel internacional⁴⁹, y el séptimo en migración interna⁵⁰. La región de la Mixteca, conformada por 155 municipios presenta los índices más altos de movimiento poblacional en el estado, con un incremento ininterrumpido desde 1940. Es también el segundo estado, después de Guerrero, con el mayor número de niños/as migrantes⁵¹.

Las cifras oficiales del CONEVAL posicionan 42 municipios de la región mixteca en pobreza alimentaria, y se encuentran también catalogados con bajos ín-

dices de desarrollo humano y de ingresos por persona menores a un salario mínimo al día. Entre éstos se encuentra Santos Reyes Yucuna, Coicoyán de las Flores, San Martín Itunyoso, San Simón Zahuatlán, San Martín Peras, San Sebastián Nicananduta, San Juan Ñum y, San Martín Zacatepec. En las comunidades, el 80% de las familias no cuentan con los recursos para cubrir sus necesidades prioritarias, como lo son: alimentación, salud, vivienda, educación y agua potable⁵².

San Luis Potosí

El estado ocupa el sexto lugar nacional en migración hacia Estados Unidos, manteniéndose en índice alto desde hace varias décadas. Se divide en cuatro regiones geográficas: Altiplano, Huasteca, Media y Centro. Su población es de 2,918,009 habitantes, de los cuales 141,326 son nahuas (55.5%); 99,464 huasteco/téenek (38.8%) y 11,412 pames (4.4%). De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) los indicadores de carencia social en el estado en el 2015⁵³ son los siguientes: rezago educativo 17.8%; servicios de salud 9.8%; calidad y espacios en la vivienda 14.1%; alimentación 16.9%; seguridad social 56.2% y servicios básicos en la vivienda 29.9%.

Esta misma fuente señala en el Informe de evaluación de Política de Desarrollo Social que el porcentaje de población en pobreza en el estado de San Luis Potosí para 2016

⁴⁶ Oaxaca ocupa el tercer lugar nacional en índice de analfabetismo.

⁴⁷ *Op. cit.* INEGI 2010.

⁴⁸ *Op. cit.* CONEVAL 2010.

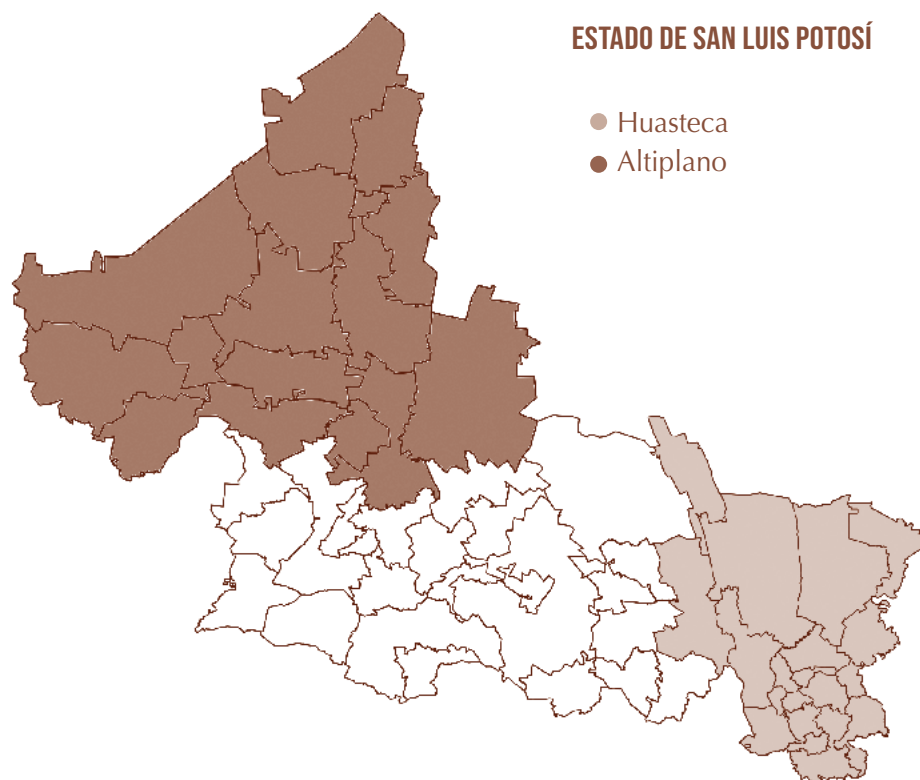
⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ *Op. cit.* INEGI 2010.

⁵¹ *Op. cit.* CONEVAL 2010.

⁵² *Ibid.*

⁵³ Se puede consultar en: <https://www.coneval.org.mx/coordinacion/entidades/SanLuisPotosi/Paginas/carencias-sociales20102015.aspx>



es de 45.5%; 37.8% está en pobreza moderada y 7.7% en pobreza extrema.

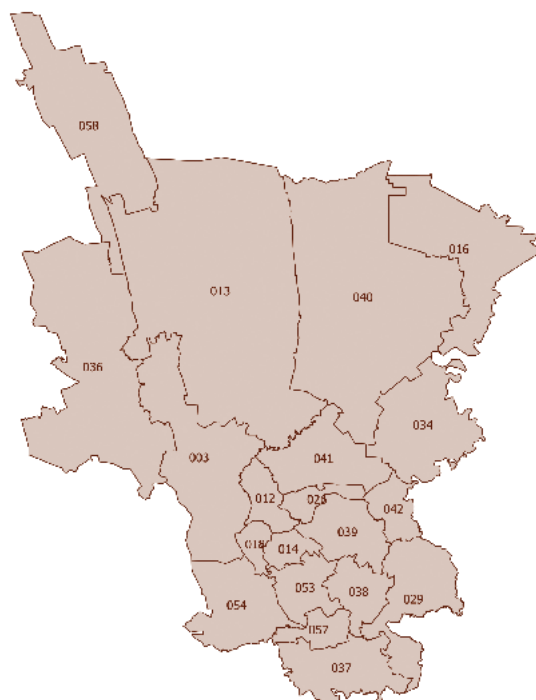
Los municipios con más alto nivel de marginación y pobreza de la zona huasteca y media son: Aquismón, Santa Catarina, Lagunillas, Huehuetlán, Coxcatlán, Tanlajás, Xilitla, San Antonio, Axtla de Terrazas y Tamazunchale. El grado de escolaridad entre personas de 15 años y más es de 8.3 años (es decir, no alcanzan a concluir la secundaria) y 7.9% es analfabeta⁵⁴.

La agroindustria y producción avícola del estado se concentra en las regiones: media huasteca y altiplano. En la huasteca la actividad económica se concentra en el trabajo agrícola de autoconsumo (maíz, frijol, café), los servicios turísticos, el empleo informal en pequeños comercios, la construcción, el trabajo doméstico

principalmente en mujeres para trabajar en la misma zona, y también se opta por migrar hacia otros estados como Monterrey, Nuevo León, Guadalajara, Jalisco y Ciudad de México. En el sector agrícola, el trabajo se desarrolla en circuitos migratorios local e interestatal en la producción y corte de la caña, naranja, café, chile, pepino y tomate.

En condiciones laborales limitadas, precarizadas e insuficientes para mantener condiciones de vida digna, la población de las zonas indígenas nahua y téenek y también rurales de Xilitla, Aquismón, Tamazunchale, Matlapa, Coxcatlán, Tancanhuitz, Tanlajás y Axtla de Terrazas se integran a los circuitos migratorios nacionales e internacionales para el trabajo agrícola.

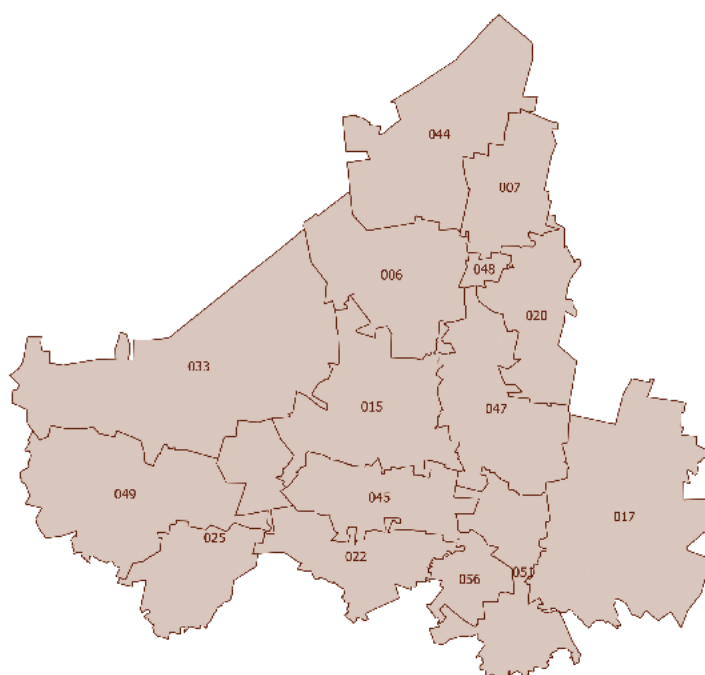
⁵⁴ *Op. cit.* INEGI 2010.



REGIÓN HUASTECA

NOMBRE MUNICIPIO CLAVE MUNICIPIO

Tamzacán	038
San Vicente Tancuayalco	034
Xilitla	054
Tancanhuitz	012
Matlape	057
Tanquián de Escobedo	042
Ciudad Valles	013
Tamulín	040
Tamlaías	041
Tamasopo	036
El Naranjo	058
San Antonio	026
Tamásamo en Corona	039
Abasco	016
Tamazunchale	037
Huahuatlán	018
Coxcatlán	014
San Martín Chichiquila	079
Aquismon	003
Asota de Tamasas	053



REGIÓN ALTIPLANO

NOMBRE MUNICIPIO CLAVE MUNICIPIO

Matichuala	020
Guadalupe	017
Santo Domingo	033
Catorce	006
Moctezuma	022
Salinas	025
Villa de la Paz	048
Villa de Ramos	049
Villa de Guadalupe	047
Villa de Arista	056
Cedral	007
Veracruz	044
Chetumal	015
Veradero	045
Villa Hidalgo	051

En la región del Altiplano a través del trabajo de campo se han identificado jornaleros y jornaleras de los estados de Hidalgo (principalmente de Huejutla, Calnali, Molango de Escamilla), Guerrero (Cochoapa el Grande y Tlacoachistlahuaca), Veracruz (Ixhuatlán de Madero, Tantoyuca, El Higo, Tempoal), San Luis Potosí (Aquismón, Xilitla, Axtla, Tampacán, Tamazunchale, Matlapa y Tancanhuitz, entre otros de la zona Huasteca) y del estado de Puebla (de las localidades de Ozomatlán y Tepetzintla de Galeana del municipio de Huauchinango)⁵⁵.

Esta zona, el Altiplano, es de las más grandes del estado, cuenta con 26 municipios que se caracterizan por sus condiciones climáticas difíciles y adversas para la agricultura, sobre todo de temporal, así como por sus altos índices de migración y pobreza. Además, los pequeños productores agrícolas han debido enfrentar el proceso de transformación que ha sufrido este sector sin contar con los medios y herramientas necesarias para tales efectos, además de que las condiciones laborales, de acceso al crédito y a tecnologías no son las mejores según la información recabada. El municipio de Villa de Arista fue uno de los primeros en desarrollar esta actividad principalmente en el cultivo, cosecha y empaque de jitomate. De ahí se ha ido extendiendo a otros municipios de la región.⁵⁶

Es importante señalar a la zona media del estado, la cual ha tenido un reciente incremento de la agroindustria, principalmente en los municipios de Rioverde, Ciudad Fernández, Villa Juárez y Ciudad del Maíz, para el cultivo de chile, aquí llegan a trabajar personas de Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Veracruz y personas locales de los municipios cercanos a estos.

Guanajuato

Guanajuato es una entidad mixta, expulsa población y atrae migrantes para la agricultura intensiva, hortalizas, principalmente brócoli, lechuga, cebolla y chile verde, pese a que la superficie cosechada de espárrago no es muy grande, 3,464 has.⁵⁷ es el segundo productor de esta hortaliza, después de Sonora cuyo mercado es principalmente para la exportación.

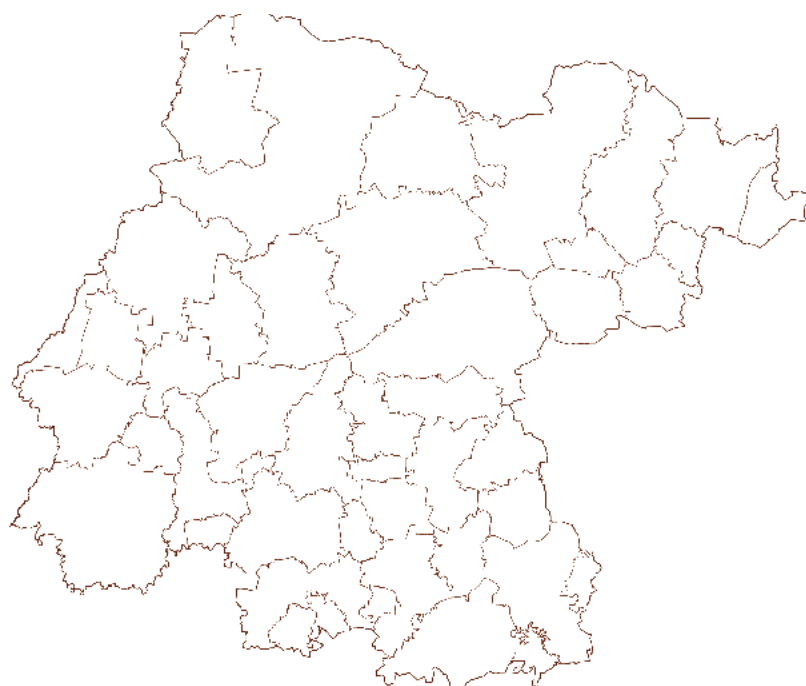
A partir de la documentación e investigación realizada por el Centro de Desarrollo Indígena Loyola (CDIL) y la Universidad Iberoamericana, desde el 2011, en Guanajuato se identificaron ocho municipios como receptores de mano de obra jornalera. Son familias indígenas jornaleras procedentes de la región Montaña del estado de Guerrero. Principalmente es población na' savi (mixtecos), que en ese periodo sumaron un total de 600 personas, para el 2013 el CDIL documentó la presencia de más de 2 mil indígenas na' savi.

Estas familias jornaleras son contratadas para la cosecha de hortalizas en los municipios de León, Silao, San Francisco del Rincón, Manuel Doblado, Purísima y Romita. Sin embargo, el trabajo agrícola de corte se amplió a otras hortalizas como el pepino y tomate, además de una variedad de chiles. En el año 2014 se registró un aumento en el arribo de familias jornaleras debido a las tormentas tropicales "Manuel" e "Ingrid", esto se pudo constatar mediante una aproximación realizada con datos del propio CDIL, donde se encontraron aproximadamente 3 mil indígenas, principalmente na' savi. Esta población ha ido

⁵⁵ Información obtenida a partir del trabajo de campo de organizaciones en San Luis Potosí, en el primer semestre del 2018.

⁵⁶ Informe "Migración interna (Jornaleros internos)", Respuesta Alternativa, Catholic Relief Services, San Luis Potosí, S.L.P., septiembre de 2014. Se puede consultar en: <https://redtdt.org.mx/wp-content/uploads/2014/08/INFORME-JORNALEROS-MIGRANTES.pdf>

⁵⁷ SIACON NG 2016.

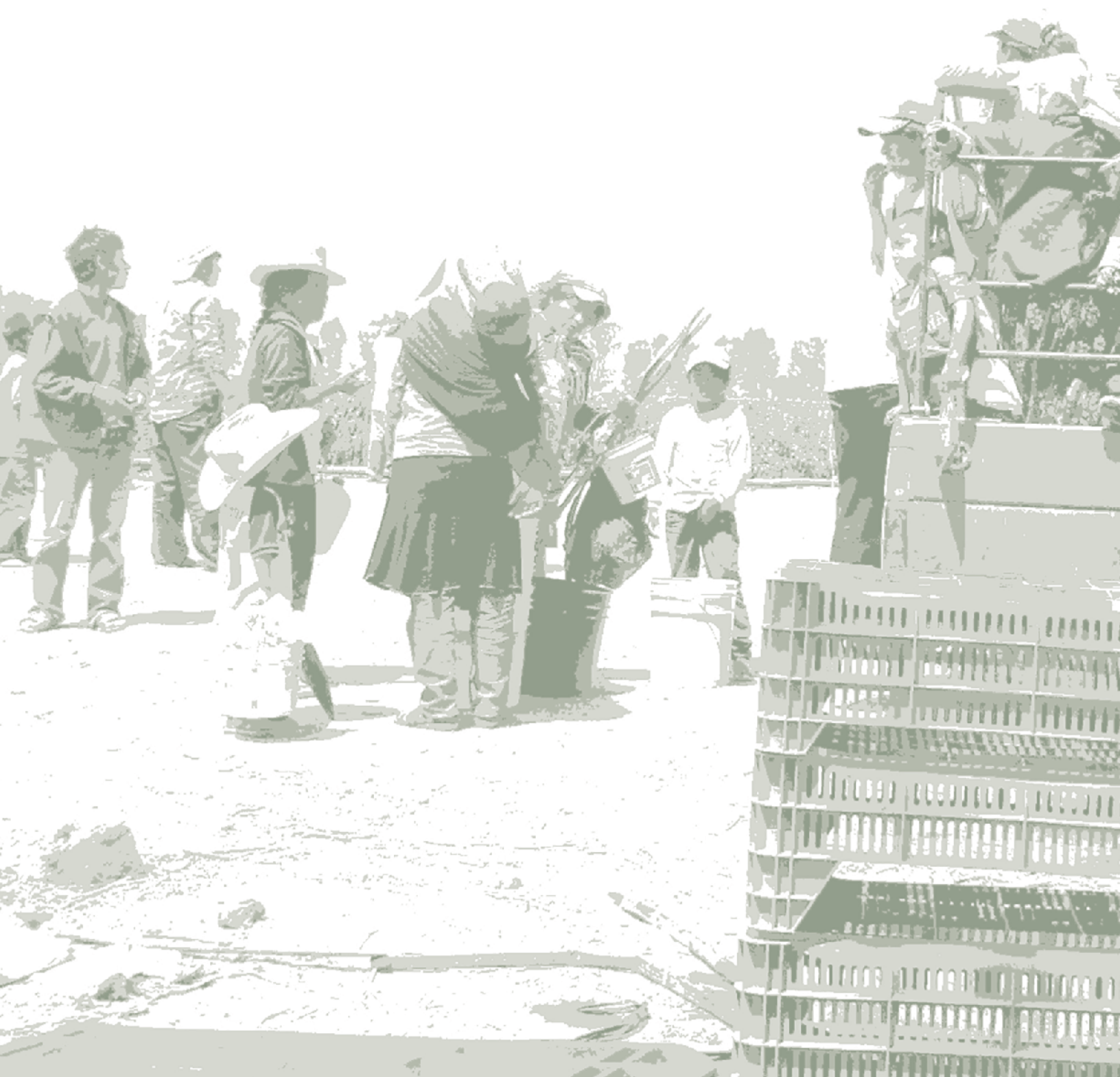
**ESTADO DE GUANAJUATO**

aumentando considerablemente, según datos de la propia autoridad, rebasa las 3 mil personas en todo el estado.

Las familias jornaleras arriban a Guanajuato a finales del mes de abril o principios de mayo, y la cosecha concluye en el mes de agosto, aunque se han ido presentando variaciones en los ciclos de cultivo. Algunos grupos se trasladan al municipio de Dolores Hidalgo, en la parte centro-norte de Guanajuato, y el resto se dirige a los estados de San Luis Potosí y Jalisco. Se ha documentado que el grueso de las familias jornaleras provienen de comunidades indígenas na' savi de los municipios de Metlatónoc y Cochoapa el Grande, además de Atlixac, Tlalixtaquilla y José Joaquín de Herrera.

Los campos en los que laboran no tienen albergues, los/as jornaleros/as viven en cuartos o casas que son de alquiler principalmente, subarrendados a ejidatarios del lugar o a propietarios privados. Los primeros cortes de chile son trasladados al norte del

país, por lo que se presume que pueden ser de exportación, mientras que los últimos cortes se distribuyen en las centrales de abasto de Guanajuato o a otros estados como Puebla, Guadalajara y la Ciudad de México. El pago en el corte de chile oscila entre los 20 y 25 pesos por arpilla, que pesa aproximadamente 30 kilos. Se calcula que los/as jornaleros/as ganan entre 100 y 200 pesos diarios.



CAPÍTULO III



CONTRATACIÓN, RECLUTAMIENTO Y ENGANCHE: PRINCIPALES PROBLEMÁTICAS DETECTADAS QUE ENFRENTAN LAS PERSONAS JORNALERAS MIGRANTES EN SU MOVILIDAD LABORAL AGRÍCOLA INTERNA EN MÉXICO

CAPÍTULO III

La Ley Federal del Trabajo (LFT) en su Capítulo VIII - Trabajadores del Campo, artículo 279, establece que:

*Los trabajadores estacionales del campo o jornaleros son aquellas personas físicas que son **contratadas para laborar** en explotaciones agrícolas, ganaderas, forestales, acuícolas o mixtas, únicamente en determinadas épocas del año, para realizar actividades relacionadas o que van desde la preparación de la tierra, hasta la preparación de los productos para su primera enajenación, ya sea que sean producidos a cielo abierto, en invernadero o de alguna otra manera protegidos, sin que se afecte su estado natural; así como otras de análoga naturaleza agrícola, ganadera, forestal, acuícola o mixta. Puede **ser contratada por uno o más patrones** durante un año, por períodos que en ningún caso podrán ser superiores a veintisiete semanas por cada patrón⁵⁸.*

Como podemos ver, en la cita anterior se resalta la idea de contrato y patrón, es decir únicamente el término de contratación es la figura que podría representar la “relación laboral”, sin embargo, en el caso mexicano es común el proceso de contratación de personas trabajadoras migrantes jornaleras agrícolas que no deriva en una relación laboral, debido a que la relación trabajador del campo-jornalero o jornalera con el patrón, productor agrícola, ranchero, empresario agrícola o empleador es indirecta (informal), dado que se ejerce a través de intermediarios, identificados con el nombre de “contratistas”, “enganchadores”, “reclutadores”, “jefes de cuadrilla”, “mayordomos”, “cabos”, “caporales”, entre otras denominaciones.

En su mayoría son personas indígenas y rurales de la misma comunidad de origen, del mismo estado o de otros cercanos, y son quienes establecen y ofrecen una oferta de trabajo para actividades de cultivo o cosecha de algún producto agrícola, siendo ésta unilateral y sin supervisiones, en gran parte de los casos el acuerdo laboral (contrato) es verbal. Al no haber una fiscalización sobre estos procesos de reclutamiento-enganche-contratación por parte de las autoridades laborales, la mayoría de las veces su intervención en el proceso no representa ningún beneficio concreto para

⁵⁸ Ley Federal de Trabajo Actualizada. Se puede consultar en: http://www.stps.gob.mx/bp/secciones/junta_federal/secciones/consultas/ley_federal.html

las personas trabajadoras jornaleras y sus familias, ya que los acuerdos no se establecen mediante un contrato de trabajo como lo señalan los artículos 24 y 25 de la LFT⁵⁹, sino de manera verbal.

“Nosotros no firmamos contrato, el contrato es de palabra. Me dieron de enganche \$700, nos prometieron \$1000. Nos dijeron que el pago es de 170 pesos por día, esto no lo sabremos, pues pagan al finalizar la temporada”⁶⁰.

En el acuerdo verbal se mencionan las condiciones en que harán el viaje a los campos agrícolas, es decir, los lugares donde van a vivir, trabajar y los servicios que brindará el patrón: el pago de salario, pago por hora extra, días de descanso, retiro, temporalidad del trabajo, así como el pago de los autobuses, servicios médicos, y educación para cuando viajan familias completas, para los hijos e hijas de las personas trabajadoras. Aunque las condiciones acordadas sean las ideales, al no existir un contrato establecido conforme lo marca la ley, no se garantiza el cumplimiento, ni satisface los mínimos obligatorios de conformidad con la LFT.

El enganche no debe confundirse con una contratación formal pues a menudo se considera que, por el hecho

de llegar a la zona de trabajo a través de algún representante del empresario agrícola, las y los jornaleros cuentan con un contrato que garantiza las prestaciones que por ley corresponden, pero en la práctica no sucede así. Asimismo, es posible que en algunos campos agrícolas las y los jornaleros se incorporen en los esquemas diseñados por los contratos colectivos de protección que imponen los sindicatos corporativos que operan en la zona. No obstante, los jornaleros y jornaleras desconocen su contenido y no cuentan con un sindicato que en los hechos efectivamente vele por sus intereses.

En una investigación realizada en el 2001 se identificaron cinco mecanismos de reclutamiento de jornaleros/as para los campos agrícolas en México: 1) el que realizan personas contratadas por las empresas como enganchadores, 2) el enganche de parte de agentes independientes o caciques locales, 3) el que efectúan los mayordomos o capataces, 4) el de autoridades locales, y 5) el que realizan representantes de sindicatos agrícolas⁶¹. De acuerdo con estudios más recientes, actualmente es más común que los reclutadores estén vinculados a algún sindicato de jornaleros/as, y que cobren la cuota sindical por cada trabajador/a⁶².

En algunos lugares, el perfil de los “agentes independientes” que les enganchan o re-

⁵⁹ Artículo 24.- Las condiciones de trabajo deben hacerse constar por escrito cuando no existan contratos colectivos aplicables. Se harán dos ejemplares, por lo menos, de los cuales quedará uno en poder de cada parte. Artículo 25.- El escrito en que consten las condiciones de trabajo deberá contener: I. Nombre, nacionalidad, edad, sexo, estado civil, Clave Única de Registro de Población, Registro Federal de Contribuyentes y domicilio del trabajador y del patrón; II. Si la relación de trabajo es para obra o tiempo determinado, por temporada, de capacitación inicial o por tiempo indeterminado y, en su caso, si está sujeta a un periodo de prueba; III. El servicio o servicios que deban prestarse, los que se determinarán con la mayor precisión posible; IV. El lugar o los lugares donde deba prestarse el trabajo; V. La duración de la jornada; VI. La forma y el monto del salario; VII. El día y el lugar de pago del salario; VIII. La indicación de que el trabajador será capacitado o adiestrado en los términos de los planes y programas establecidos o que se establezcan en la empresa, conforme a lo dispuesto en esta Ley; y IX. Otras condiciones de trabajo, tales como días de descanso, vacaciones y demás que convengan el trabajador y el patrón.

⁶⁰ Cruz (seudónimo) 23 años, originario de Veracruz. Trabajo de campo, abril 2018.

⁶¹ Arroyo, Ramiro, 2001, citado por Rojas Rangel, Teresa J., “Migración y ocupación de la fuerza de trabajo infantil en las regiones agroexportadoras”, Revista Rayuela, Revista Iberoamericana sobre niñez y juventud en lucha por sus derechos, 2009, pág. 64. Se puede consultar en: <http://revistarayuela.ednica.org.mx/sites/default/files/Art.%20Teresa%20Rojas%20Rangel.pdf>

⁶² Ortiz C. y Revilla U., “Presentación migración. Vulnerabilidad, precariedad”, Revista de Ciencias Sociales y Humanidades, UAM Iztapalapa, junio, 2013, pág. 70.

clutan está cambiando; por ejemplo, los “caporales”, “mayordomos” o “jefes de cuadrilla” que trasladan a las familias jornaleras indígenas principalmente del estado de Guerrero a trabajar a diferentes campos agrícolas de Guanajuato, Jalisco, San Luis Potosí, Nayarit, Colima, Sinaloa, Sonora, Baja California, Chihuahua, por mencionar algunos, son parte de la misma comunidad y la gran mayoría los unen los lazos de parentesco, compadrazgo, étnicos y comunitarios.

Estos códigos comunitarios, étnicos, de parentesco, compadrazgo y/o de vecindad conforman un vínculo estrecho que forjan las familias indígenas jornaleras con estos agentes, porque al final del día son el único vínculo “formal” que se establece como “relación laboral” entre ellos/as como trabajadores/as agrícolas y el agricultor (empleador, patrón). Que no debe confundirse con los vínculos o acuerdos que establecen (u ofrecen) los contratistas, reclutadores o enganchadores que suelen ser de la región o bien, que provienen de otros estados periféricos.

3.1 OFERTAS DE EMPLEO, MECANISMOS DE CONTRATACIÓN Y/O ENGANCHE

La era del enganche de México hacia los Estados Unidos data de 1900 a 1920; fue un sistema semi-forzado de contratación de mano de obra basado en el endeudamiento. Perfil: Hombres solos, luego familias. Sectores de actividad laboral: agricultura, ferrocarril, industria⁶³. Resulta importante que en ese periodo los enganchadores “recibían pago por cada trabajador, ofrecían “altos salarios”, además préstamo de dinero para viajar a EE. UU., éste y los intereses se deducían del salario”⁶⁴.

Cien años después no existe una supervisión y vigilancia efectiva en los procesos de contratación de movilidad laboral agrícola nacional, mucho menos de movimientos migratorios internos, por tanto, algunas prácticas del enganche siguen presentes en comunidades de origen, principalmente indígenas y rurales, con algunas variaciones por región geográfica.

“Nos dijo que nos iban a contratar para ir a trabajar a un campo en Hermosillo, que podíamos llevar a nuestra familia, esposa y nuestros hijos pequeños porque ahí había guardería, que nos darían un cuarto limpio, con luz y agua, también nos darían alimentos y transporte para llegar a la empresa y retornar a nuestro lugar de origen, así como salario y prestaciones de ley [...]. Salimos de Ocosingo, Chiapas. En el viaje vimos el primer engaño, porque no nos dieron alimentos y además tuvimos que cooperar con el chofer del autobús para el combustible, ya que nos dijo que no contaba con dinero para comprarlo. Cuando llegamos al campo nos dijeron que la empresa no recibía niños, que no había quien les cuidara y que por lo tanto tendríamos que marcharnos del campo sin ningún pago para poder regresar. Nosotros reclamamos que no deberían de prometer cosas que no son ciertas, pero no nos hicieron caso y al poco tiempo seguridad privada nos sacó por la fuerza [...] Hay muchas promesas al principio, que hay buena paga, que hay vivienda con camas, luz, agua y baños limpios. Nos prometen que habrá alimentos sin costo y que el viaje lo cubren ellos. Al final vemos que nos mienten porque

⁶³ Durand, J., “Procesos y patrones migratorios. Migración México-Estados Unidos”, Universidad de Guadalajara, 2015. Se puede consultar en: <https://vimeo.com/123679734>

⁶⁴ Massey, Douglas S., Jorge Durand y Nolan J. Malone, “Ensamblaje de la maquinaria: una historia de la migración México-Estados Unidos”, en *Detrás de la trama. Políticas migratorias entre México y Estados Unidos*, Miguel Ángel Porrúa, Universidad Autónoma de Zacatecas, México, 2009, pp. 34 y 35.

*nada de eso es cierto cuando nos reclutan en las comunidades*⁶⁵.

Hasta el momento se tiene identificado en algunas regiones que el concepto de “enganche” entendido este como la cantidad de dinero en calidad de préstamo o anticipo que reciben por parte del reclutador o bien del cabo, cuyo monto oscila entre 500 y 1500 pesos. Algunas ocasiones lo reciben días antes de partir, y otras antes de subirse al transporte en el que viajan a los campos agrícolas. Este adelanto -enganche- se deja como apoyo para los familiares que se quedan, o bien, lo usan para los gastos de comida durante el camino. Además, están los préstamos que realizan y anotan los cabos durante su estancia en el lugar de destino.

*“El grupo en el que vengo estamos aquí desde julio, el contrato (verbal) es por 90 días, nos dieron de enganche \$1000, aquí nos pagan por semana, menos por quincena, la verdad es que nos pagan hasta el final del contrato, o sea hasta octubre. Nos dan adelantos “préstamos semanales” de \$100 hasta \$200, eso depende del gasto de cada quien. Aquí nos dan dos comidas al día: a las 11:00 am comemos en el rancho, a las 4:30 pm comemos aquí en el albergue. La verdad es que el adelanto lo usamos para comprar pan, leche, jabón, entre otras cositas que luego usamos, el pan lo comemos en la mañana antes de irnos con café y leche para aguantar”*⁶⁶.

En Guerrero, por ejemplo, los contratistas de la región ofrecen casas, alimentación, guardería, buen sueldo y días de descanso. También suelen colocar pancartas en zonas estratégicas como las Unidades de Servicios Integrales (USI) dependientes de la Secretaría de Desarrollo Social, anunciando las ofertas de empleo. Por otra parte, algunas familias deciden emigrar sin

contratista, viajando a los estados donde saben o creen que hay trabajo y van prácticamente campo por campo hasta encontrar quien los contrate.

En municipios como Cochoapa el Grande y Tlapa se han incorporado mujeres indígenas y mestizas a este esquema, como enganchadoras o reclutadoras; su participación responde también a la capacidad de liderazgo que han asumido y a los lazos de confianza y redes que han establecido con las familias jornaleras. Por lo general, las denominan “contratistas” pero desempeñan la misma función que los “responsables de grupo o mayordomos”, establecen un vínculo directo con las familias jornaleras, realizan acuerdos verbales con los productores y se emplean como asalariadas en los campos de cultivo.

De la misma forma que los varones, este liderazgo femenino se fue construyendo a partir de la pertenencia étnica, de la lengua, del paisanaje, del parentesco, de las relaciones de compadrazgo y de la cultura; estos son fuertes elementos que vinculan a estas mujeres con las familias indígenas de las comunidades. Estas contratistas, al igual que las caporalas de Sinaloa, su liderazgo está forjado en la confianza de los (as) migrantes⁶⁷.

En general en la zona de las tres huastecas (Veracruz, San Luis Potosí, Hidalgo) las ofertas de empleo las reciben por anuncios en radiodifusoras y por los mismos contratistas que van a algunas comunida-

⁶⁵ Persona jornalera de Chiapas, Tsotsil, entrevista realizada por Voces Mesoamericanas, 2016.

⁶⁶ María (seudónimo) de 49 años, indígena Totonaca, originaria de Puebla. Trabajo de campo, agosto 2018.

⁶⁷ Muñoz Coronado Amparo, “Los jornaleros agrícolas de San Salvador, El Seco. Puebla. Las voces de las mujeres contratistas”. En el libro Coordinadoras. Barrón A, Cabezas D. y Sifuentes E. *Mujer y crisis en México. Una perspectiva socioeconómica*, 2018, En dictamen.

des, en el caso de Veracruz sobresalen: Ixhuatlán de Madero, Tempoal de Sánchez, Tantoyuca, entre otros municipios.

En San Luis Potosí se ha identificado que algunos de los contratistas llegan a las comunidades de los municipios de Axtla de Terrazas, Aquismón, Xilitla, Coxcatlán, Tampacán, Tamazunchale, y a las personas jornaleras interesadas les anotan “apartando su lugar” y reciben el “enganche”. La “mejor oferta salarial” les atrae y aceptan ir a trabajar a los “enganches”⁶⁸.

“Escuché el anuncio en la radio de la huasteca, ofrecían un contrato por 90 días, la paga era de 180 pesos [...]. Cuando nos íbamos a ir a trabajar nos dieron el “enganche” de 1000 pesos, yo se los di a mi mamá. El pasaje no te lo cobran, nos vamos de la comunidad en camioneta hasta el Xolol, llegando allá te suben en un camión que paga el contratista, de ahí varios éramos de la huasteca, todos nos fuimos al corte de tomate a Torreón, Coahuila. De aquí de la comunidad, nos fuimos 6, algunos de 18, 20, 21, 25 y 30 años [...]. Mientras estás trabajando te dan préstamos por semana, luego te los descuentan cuando termina el contrato, no cobran intereses, lo que te queda te lo pagan al finalizar el trabajo, ya cuando te vas a regresar. Yo lo más que pedí fue de 200 pesos”⁶⁹.

Se pactan de manera verbal las condiciones de alojamiento en los lugares en donde van a trabajar, en ocasiones les prometen albergues o campamentos aptos para que puedan vivir los meses que van a trabajar en esos campos agrícolas, lo mismo en la prestación de servicios, salarios y pago de horas extras.

“Nos prometieron todo y nos dan atole con el dedo, dormimos en una base de cama, sobre el tubo pues no tenemos colchón. Dijeron que tendríamos agua para tomar, pero no tenemos aquí, la tenemos que comprar. No nos pagan horas extras, nos dicen que no las hicimos o que el cabo no las apuntó, según”⁷⁰.

El empleo temporal agrícola de las y los jornaleros depende, por lo regular, de un enganchador o equivalente, pues su contratación rara vez se da de manera directa con el productor. “Los cabos”, en la zafra azucarera, fueron las figuras más conocidas. Hoy en día, además de la caña, en los cultivos que tienen como común denominador el trabajo intensivo manual, han surgido otras figuras similares que cumplen tareas logísticas diversas, desde enganchar en los pueblos y contratar los autobuses que transportarán a las y los jornaleros hasta fiscalizar el trabajo en los surcos⁷¹.

“Del pueblo venimos de tres comunidades completando un camión con 35. Nos trae un contratista y el camión lo proporciona el patrón, nosotros no pagamos y luego nos regresan a nuestra comunidad y luego hablamos con otro contratista para otra empresa y nos llevan y regresamos. [Según lo que reportan, la mayoría no firma ningún contrato ni recibe ningún comprobante de pago por su trabajo]”⁷².

⁶⁸ Algunas personas de la huasteca potosina hacen referencia al trabajo agrícola por medio de la expresión: “va a trabajar a los enganches”.

⁶⁹ José (seudónimo) 18 años, tének de San Luis Potosí. Trabajo de campo, 2018.

⁷⁰ Francisco (seudónimo) 17 años, originario de Veracruz. Trabajo de campo, abril 2018.

⁷¹ Sánchez Saldaña, Kim, “Contratistas y enganchadores: viejas y nuevas formas de intermediación”, en *La Jornada del campo*, 18 de julio de 2015, Número 94.

⁷² Antonio (seudónimo) originario de Veracruz. Trabajo de campo, abril, 2018.

En los grandes polos de atracción de jornaleros (y jornaleras) -como Sinaloa, Sonora o Jalisco- estos intermediarios laborales forman complejas estructuras piramidales: en la cúspide está el contratista y en la base sus ayudantes que reclutan a los (las) trabajadores (ras), cada uno de ellos obteniendo un ingreso que se extrae del salario del jornalero (o la jornalera). Esta organización permite a las empresas solucionar fluctuantes necesidades en la demanda de trabajo, pero también que la relación laboral sea poco transparente y que los empresarios eluden sus responsabilidades. Los reclamos de los (las) trabajadores (ras), cuando los hay, se concentran no en los patrones, sino en los intermediarios, pues cumplen su función como “amortiguadores” de esas demandas. No obstante, a la vez, contratistas y mayordomos son quienes ejercen las medidas coercitivas dentro y fuera de los surcos; más aún, no es raro que algunos de ellos engañen a los (las) trabajadores (ras) para lograr sus objetivos⁷³.

“Cuando nos vamos con contratistas a veces vienen y nos dicen que van a pagar 200 pesos y al final nos pagaron 150. Tengo sueños a mis 40 años, pero en México no sé cómo hacerlos, he andado recorriendo de aquí y allá y muy apenas la hago para mal comer”⁷⁴.

⁷³ Ibid.

⁷⁴ Rufino (seudónimo), indígena téenek de San Luis Potosí. Trabajo de campo, noviembre 2017.

3.2 PROBLEMÁTICAS QUE ENFRENTAN DURANTE EL TRÁNSITO LAS PERSONAS JORNALERAS AGRÍCOLAS

Los principales mecanismos de traslado de las personas jornaleras son: 1) los agroempresarios envían autobuses a sus lugares de origen para trasladarlos/as a sus empresas; 2) por medio de líneas de autobuses de particulares y; 3) camionetas propias. No obstante, por cualquiera de los tres medios, las condiciones de traslado son inadecuadas, debido a que los autobuses están en mal estado mecánicamente, o el número de personas que trasladan rebasa la capacidad.

Asimismo, durante sus traslados son víctimas de extorsiones o multas de tránsito que en muchas de las ocasiones injustificadas o bajo argumentos como el uso de vidrios polarizados, las series de las placas foráneas, el exceso de cargamento (maletas, botes de plástico o sus herramientas de trabajo, utensilios de cocina, televisores, costales con pertenencias personales, etc.), o por desplazarse de un estado del sur a los del centro o noroeste del país. Estas extorsiones o multas son efectuadas por la Policía Federal de caminos, personal del Instituto Nacional de Migración (al confundirlos con migrantes centroamericanos) o cualquier otra autoridad municipal o estatal, en ocasiones también han sufrido alguna afectación durante las revisiones en retenes militares, por la falta de documentos de identidad o hablar su lengua materna o su procedencia.

Los traslados suelen ser muy prolongados dependiendo del estado al que migran, algunos son de más de 40 horas, y a esto se le suman las malas condiciones de los

autobuses que trasladan a las familias jornaleras. Las fallas mecánicas, la falta de mantenimiento, el uso de modelos de más de 20 años, así como la ausencia de seguros de viaje, chequeos médicos a los operadores, y la vigilancia y regularización de las líneas de transportes, son factores claves cuando ocurren accidentes -algunos de ellos de graves consecuencias- durante sus trayectos.

Para dar un ejemplo, organizaciones como Respuesta Alternativa A.C., el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan A.C., la Pastoral Social de Matehuala, en articulación con abogados del Centro de Derechos Humanos Samuel Ruíz y la Universidad Autónoma de San Luis Potosí documentaron y llevaron a juicio el caso suscitado el 3 de julio del 2014, ocurrido en San Luis Potosí⁷⁵:

“Por la tarde del 3 de julio, alrededor de las 17:30 horas se registró la volcadura de una camioneta Nissan color rojo (adquirida en el estado de Sinaloa), que trasladaba a 38 personas, entre hombres, mujeres, niñas y niños. El accidente ocurrió en el kilómetro 123 de la carretera 57 México-Piedras Negras, a la altura del Ejido de San Francisco, municipio de Villa de Guadalupe en el estado de San Luis Potosí. Según los reportes del accidente, éste se debió al sobrepeso en el vehículo, lo que provocó la ponchadura de una llanta y luego su volcadura. En la parte de la cabina, iban el chofer y su esposa, ambos originarios del estado de Guerrero. Los accidentados, jornaleros agrícolas, eran originarios de las comunidades de Yozondacua el Nuevo, Ocotepec, Cochoapa el Grande, Santa Cruz Yucucani y Tlacoachistlahuaca también en el estado de Guerrero. En el lugar fallecieron dos menores de 6 y 8 años y posteriormente en el hospital falleció

un adulto sumando tres defunciones. Todos ellos trabajaban en el rancho denominado El Ebanito, perteneciente al municipio de Matehuala, cuyo propietario se presume es un señor de nombre Jesús Zárate Vázquez. El accidente ocurrió cuando se trasladaban del rancho al lugar donde rentaban unos cuartos en la comunidad de Norias del Refugio, perteneciente al municipio de Guadalcázar”⁷⁶.

Para efectos de informar cuál ha sido la experiencia de algunas de las organizaciones que integramos la Red, nos resulta importante describir en este apartado parte del proceso que implicó dicho accidente, la articulación y los resultados del acompañamiento:

- a. Los/as lesionados/as habían sido trasladados/as a distintos hospitales, aunque la mayoría se localizaban en el Hospital Central “Dr. Ignacio Morones Prieto”, de San Luis Potosí capital. Ahí la jefa de Trabajo Social del nosocomio mencionó que el Gobierno del estado se haría cargo de los gastos médicos, hospitalización de los/as jornaleros/as y el hospedaje de sus familias mientras estuvieran en el hospital y posteriormente de su traslado a sus localidades de origen. El Centro de Atención a Víctimas del Delito (CAVID) sería la instancia responsable de dar seguimiento a dichas disposiciones y la Delegación de la SEDESOL se ocuparía del traslado.

⁷⁵ Álvarez, Xóchitl, “Mueren 3 niños jornaleros en volcadura en SLP”, en *El Universal*, 04 de julio de 2014, sección Estados. Se puede consultar en: <http://archivo.eluniversal.com.mx/estados/2014/jornaleros-accidente-san-luis-potosi-1021108.html>

⁷⁶ Se puede consultar en: <https://redtdt.org.mx/wp-content/uploads/2014/08/INFORME-JORNALEROS-MIGRANTES.pdf>

- b. Desde el primer momento, la cuestión del idioma era fundamental, ya que, si bien uno de los miembros de la familia hablaba un poco de español, no garantizaba la comprensión ni la comunicación entre ellos/as y los integrantes de las organizaciones. Debido a esto y considerando su lugar de origen, se contactó al Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan A.C. (Guerrero), para subsanar la comunicación e intervención en el caso. Durante las siguientes cuatro semanas, se estuvo acompañando constantemente sobre todo a dos de estas familias, porque las otras dos, regresaron casi inmediatamente a sus comunidades de origen.
- c. El acompañamiento brindado a las familias permitió tener un contacto más cercano con ellas, en Norias del Refugio, en el albergue del DIF municipal de Matehuala y en el albergue del Hospital Central; lo mismo sucedió con la familia del chofer, quien estuvo grave durante las dos primeras semanas y en calidad de detenido hasta su alta y traslado al penal de Guadalcázar.
- d. Cabe señalar que además de los miembros de estas familias que estaban hospitalizados, otros/as habían sido dados de alta, pero se encontraban en recuperación de las heridas, por lo que requerían de curaciones y seguimiento en la atención. En una de las visitas que se hizo a Norias del Refugio, nos percatamos de que algunos de los miembros de la familia presentaban signos de infección en las lesiones, por lo que se acudió inmediatamente con CAVID quien se comprometió a enviar urgentemente una brigada médica, la cual no llegó, por lo que se solicitó apoyo al DIF municipal de Matehuala, quienes acudieron y trasladaron a la familia a un espacio denominado Casa de Salud, el cual tenía mejores condiciones higiénicas.
- e. Por otro lado, además del acompañamiento de las familias mencionadas, se solicitó entrevistas con distintas instancias como la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la delegación de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la SEDESOL y el

Instituto Mexicano del Seguro Social, para articular acciones con otras ONG potosinas: Centro de Derechos Humanos Samuel Ruiz y la Clínica Jurídica de la Unidad de Posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, para iniciar las demandas laborales por parte de las familias afectadas.

- f. Dichas demandas siguen en proceso hasta la fecha. Para el caso del chofer de la camioneta, contactamos con el Instituto de Desarrollo Humano y Social de los Pueblos y Comunidades Indígenas (INDEPI) del estado, para canalizar su caso y finalmente se logró que pudiera quedar en libertad y regresar a su comunidad de origen.

Pero cuando los agroempresarios mandan autobuses a los lugares de origen de las personas jornaleras para trasladarlas a sus empresas, generalmente los contratistas les prometen que la ida y la vuelta serán cubiertas por el empleador, que hay tiempos para comer durante el viaje y que los camiones tienen buenas condiciones para hacer un trayecto que dura entre tres y cinco días, recorriendo casi tres mil kilómetros. Lo cierto es que por lo común son traslados en viejos autobuses que recogen a las personas en sus comunidades o en puntos estratégicos de embarque, en ocasiones los choferes u operadores no realizan paradas para que las personas puedan comer o pasar a los sanitarios de las gasolineras, como lo reporta Voces Mesoamericanas A.C.:

“Durante el traslado de Yabteclum al campo, no compre alimentos, ya que el chofer sólo se paraba en algunas gasolineras y sólo nos daba un tiempo para ir al baño, decía que tenía que ser

rápido porque ya nos esperaban en el campo, pero nadie decía nada porque sólo el chofer tenía comunicación con el contratista, además de ser el único que sabía a dónde se iba a llegar”⁷⁷.

El Estado mexicano es invisible en cuanto a la regularización y fiscalización de las líneas de transportes turísticos que existen en nuestro país, muchos de ellos contratados por los agricultores para el traslado de las familias jornaleras. No se tiene ningún control, supervisión, registro y autoridad sobre estas líneas de transporte. Existen cientos de testimonios, pero nunca proceden legalmente porque las autoridades no hacen nada al respecto ya que no existen inspecciones en carreteras, ni en el origen, mucho menos en el destino a donde llegan las personas jornaleras, además de la ausencia de una ley que controle las actividades o servicios que prestan estas compañías, salvo el deslinde de la responsabilidad adjudicada a los choferes u operadores que conducen estas unidades.

Esta situación se agudiza cuando se trata de accidentes ocasionados a camionetas particulares, que en su mayoría son propiedad del que va como “representante del grupo” de trabajadores/as agrícolas, y que hace uso de esta bajo la promesa que le hizo previamente el agricultor o patrón de cubrirle la gasolina, con la finalidad de no tener que pagar el costo de los autobuses.

A pesar de que existen oficinas regionales del Servicio Nacional del Empleo (SNE) en todos los estados de la República mexicana, su función es realizar los convenios para enviar o recibir trabajadores/as agrícolas, pero no regular, ni sancionar los abusos que cometen los choferes de los autobuses, así como de la supervisión de los medios de transporte en que son trasladadas las familias jornaleras desde sus lugares de origen hasta los de destino.

Las prioridades de los empresarios agrícolas se centran en que tienen que trasladar a las personas de forma rápida y económica. Durante el traslado de las y los jornaleros a las agroempresas más prósperas del país, no hay tiempo para descansar ni para comer, apenas hay tiempo para ir al baño. Los responsables de los traslados no se preocupan si los y las trabajadores/as sufren por sed, hambre, por malestares de salud o inconformidad, como se comparte en el siguiente testimonio:

“Al poco tiempo de salir de la comunidad el contratista les recogió credencial de elector y acta de nacimiento, Manuela Díaz se asustó y pidió al chofer que la bajara en el siguiente cruce aún en su municipio. Su intención fue regresar a su comunidad, pero ni el chofer, ni el contratista le hicieron caso y ella no pudo regresar”⁷⁸.

A parte de los riesgos por las condiciones de los autobuses y las prácticas violentas de choferes y contratistas, hay otros riesgos que enfrentan las familias jornaleras indígenas que hablan poco o nada de español, estos riesgos son la política de detención y deportación del Gobierno mexicano que no sólo afecta a las personas migrantes centroamericanas, sino que afecta también a muchas jornaleras y jornaleros indígenas mexicanos que son confundidos con centroamericanos.

El Instituto Nacional de Migración (INM) ha instalado diversos puntos de revisión en zonas estratégicas del territorio nacional, de manera discrecional señalan personas en los autobuses y les piden documentos

⁷⁷ Migrante tsotsil, septiembre de 2017, Chiapas, México.

⁷⁸ Documentación de caso, Voces Mesoamericanas, noviembre 2016.

de acreditación mexicana, se han reportado casos en los que mexicanos son detenidos por la misma política racista y discriminatoria como el de: Juan Alfredo Vázquez Morales, indígena tseltal de Ocosingo, Chiapas, tenía 18 años cuando ocurrieron los hechos. Él junto con sus hermanas y su cuñado fueron detenidos/as el 03 de septiembre de 2015 en Querétaro, cuando se trasladaban a Guaymas, Sonora, para emplearse como jornaleros/as agrícolas. Los agentes del INM bajaron a Juan Alfredo y a sus hermanas con el argumento que sus documentos de acreditación mexicana eran falsos y asumiendo que su procedencia era de El Salvador o Guatemala. Durante el proceso las autoridades del INM minimizaron el hecho de que Juan Alfredo y sus hermanas hablaban tseltal:

“Tomamos el camión con destino a Guaymas, Sonora, para ir a trabajar en los campos agrícolas. Cuando viajé me di cuenta de que los retenes de migración y de los militares nos bajaban a cada rato del camión, nos pedían credencial, pero muchos eran menores de edad y por eso no llevaban credencial, además de no hablar el español y por eso no se podían comunicar. Nos detuvieron unas personas del Instituto Nacional de Migración, paran el camión y me bajan, junto con mis hermanas, después bajó mi cuñado a preguntar qué pasaba y le dijeron si él nos había vendido los documentos, que estaban mal llenados, él dijo que no, que no nos vendió nada, que nosotros somos de Ocosingo, Chiapas, pero no le creyeron. Llevábamos nuestros documentos como el acta de nacimiento, pero no credencial con fotografía, mi hermana llevaba su acta de nacimiento y su CURP, mi otra hermana tenía su credencial y acta de nacimiento, todas las actas de nacimiento eran reales, pero los agentes decían que no eran verdaderas porque estaban mal llenadas. Como los agentes no nos creyeron, nos subieron a mis hermanas y a mí a un carro, uno de los oficiales dijo ‘sus papeles son falsos’ luego anotó en una libreta los datos de todos,

diciendo que dijéramos la verdad, que, si éramos de El Salvador o Guatemala, respondimos en tseltal que somos de Ocosingo, y mi cuñado Fermín nos traducía porque era el único que hablaba español, pero no nos hicieron caso. Yo no entendía qué estaba pasando”.

De esta manera, los agentes detuvieron a cuatro personas de origen mexicano que no hablaban español y fueron llevados e interrogados con prácticas de tortura. A parte de insultos y amenazas, hubo choques eléctricos para que Juan admitiera que era de Guatemala, ya que los agentes no creían que era de Chiapas. Al final, por el maltrato él se vio obligado a firmar que era de Guatemala, como lo narra:

“Al parecer eso hizo feliz a los agentes, diciendo que esas son las tres verdades, que soy de Guatemala, no sé dónde queda Chiapas, ni sé cuáles son sus lenguas, diciendo que al día siguiente saldría libre, solo que primero nos mandaron a Guatemala; estos agentes me obligaron a que yo hablara en español, pero no sé hablar, lo que también les enojaba. Al llegar a la estación de migración en Querétaro, los agentes bajaron nuestras cosas y uno por uno nos iban bajando, a mí me jalaron del cinturón y me llevaron a dentro a empujones. Estando solo con los agentes me daban toques eléctricos para que aceptara ser guatemalteco, pero no es así, como ya tenía mucho miedo termine diciendo ‘soy de Guatemala, no sé dónde es Chiapas y no sé qué lengua hablan’. Después el agente que estaba sentado me pateó en mi pierna derecha, me dieron una

hoja de papel y un lapicero para que escribiera mi nombre y de donde soy, les volví a decir que, de Chiapas, pero no me creyeron, me dijeron que pusiera Guatemala, en San Marcos, y yo lo hice por miedo. Estos agentes me obligaron que yo hablara en español, pero no sé hablar, lo que también les enojaba”.

El único familiar que hablaba español pudo buscar ayuda con organizaciones en Querétaro que vinculadas con otras de la Ciudad de México y Chiapas acompañaron el caso para la defensa y litigio de esta situación. La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación con número 2189/2015, radicado en el Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Querétaro, asimismo se interpuso el recurso de revisión en contra de la resolución.

Es importante señalar que la Ley de Migración indica que se deberá proporcionar intérprete cuando la persona migrante, independientemente de su situación migratoria, no hable o no entienda el idioma español, se le nombrará de oficio un traductor o intérprete que tenga conocimiento de su lengua para facilitar la comunicación⁷⁹.

Por su parte, a través de un procedimiento no jurisdiccional, el Instituto para las Mujeres en la Migración A.C. (IMUMI), dio seguimiento al caso con la queja correspondiente ante la CNDH, generándose la recomendación número 58/2015⁸⁰. Además, promovió una acción urgente y diferentes mecanismos de difusión del caso, sin embargo, no fueron tomadas en cuenta por el Juez Cuarto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el estado de Querétaro.

Conjuntamente la organización civil Voces Mesoamericanas Acción con Pueblos Migrantes A.C. llevó un procedimiento psicosocial con Juan Alfredo y sus padres, generando un informe con fecha 24 de junio de 2017, en el que se señala que:

Fueron graves las consecuencias psicosociales de esta detención: El compañero torturado tiene miedo a la interacción con personas fuera de su familia, habla menos, es más retraído; en los primeros meses sufrió pesadillas nocturnas, no podía dormir, sufría recurrentemente de dolores de cabeza, no quería salir del cuarto donde dormía por temor a que le descubriera Migración. Una de las mujeres detenidas expresó: nosotros no imaginábamos que eso nos pasaría, nosotros somos mexicanos y no pensamos que eso nos pasaría, los de migración nos pararon por ser morenos, por ser indígenas.

La CNDH retomó el Informe sobre el estado psicosocial de Juan Alfredo Vázquez Morales, concluyendo lo siguiente:

El tipo de manifestaciones que presenta Alfredo en el curso de la visita, así como lo que refiere la familia de las consecuencias y afectaciones psicológicas después de lo vivido, concuerdan con la vivencia de un hecho traumático de naturaleza fuertemente impactante. En la familia se han identificado un conjunto de impactos psicosociales en los niveles psicológicos, familiar, espiritual y comunitario, que evidencian las fuertes repercusiones de los hechos en los distintos ámbitos.

⁷⁹ Informe Final. “Personas en detención migratoria en México. Misión de Monitoreo de Estaciones Migratorias y Estancias Provisionales del Instituto Nacional de Migración”, Consejo Ciudadano del Instituto Nacional de Migración México, julio de 2017, pág. 78.

⁸⁰ Se puede consultar en: http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Recomendaciones/2015/Rec_2015_058.pdf

Son diversas las situaciones que enfrentan las y los jornaleros agrícolas que, junto con sus familias, se ven agraviados/as desde la ausencia de mecanismos de protección que les garantice una contratación segura y formal, que evite la intermediación, así como condiciones dignas durante sus traslados.

Las autoridades mexicanas, principalmente las laborales tendrían que eficientar protocolos o medidas que garanticen la contratación de mano de obra jornalera de acuerdo con lo establecido en la LFT, ya que de seguir con estas viejas prácticas solo se fomenta aún más la severa violación de los derechos laborales de este sector poblacional. Algunos especialistas han señalado que la modernización del medio rural desplazaría los sistemas de enganche de antaño y sus prácticas informales, hoy en día, el crecimiento de dinámicas regiones agroindustriales, desde donde exportan productos frescos al mercado mundial, ha creado condiciones favorables para que viejas y nuevas formas de intermediación se multipliquen en diversos escenarios del campo mexicano⁸¹.

La falta de contratos formales así como las irregularidades que se presentan durante sus traslados (trayectos) y tránsito a los campos agrícolas, favorecen la situación de vulnerabilidad estructural de las y los jornaleros agrícolas y sus familias, situación que se agrava cuando son migrantes e indígenas y además convergen otros factores de vulnerabilidad, tales como la discriminación con base en el color de la piel, el origen, el idioma, la nacionalidad, la edad, el sexo, la identidad de género o cualquier otra condición, las cuales al presentarse en una persona conllevan a que los y las jornaleras sean víctimas de discriminación intersectorial.

En estas situaciones es indiscutible el nivel de impunidad que suele caracterizar la mayor parte de los delitos y violaciones de los derechos humanos y laborales en contra de las personas jornaleras, lo que evidencia

no sólo su vulnerabilidad sino la desprotección en la que se encuentran por parte del sistema judicial y de lo establecido en la normatividad nacional e internacional.

⁸¹ *Op. cit.*, Sánchez Saldaña, Kim, "Contratistas y enganchadores: viejas y nuevas formas de intermediación".





CAPÍTULO IV



VIOLACIONES A DERECHOS DE LAS PERSONAS JORNALERAS EN LOS LUGARES DE DESTINO

CAPÍTULO IV

4.1 MUJERES JORNALERAS VS VIOLENCIA DE GÉNERO

La migración interna agrícola en México era en un inicio, fundamentalmente masculina, sin embargo, una de sus principales características es que sus flujos de movilidad se han ido conformando por grupos familiares y comunitarios. Además de que hoy en día, la oferta laboral en las zonas agrícolas permite y genera las condiciones para que se incorporen en estas actividades casi todos los miembros de estas familias migrantes.

Es así, que las mujeres al igual que las niñas y niños, han cobrado importancia en los procesos migratorios, asumiendo un papel más protagónico, empleando su fuerza de trabajo en actividades agrícolas como asalariadas. Sus medios y recursos los distribuyen de una manera organizada para empatar sus actividades como trabajadoras agrícolas, esposas, madres e hijas. Las mujeres que migran realizan un sinnúmero de labores que no les son reconocidas. Son mujeres que han sorteado situaciones que van desde la violencia y olvido por parte del Estado, hasta las que viven en sus hogares, en sus comunidades y en los surcos de los campos donde van a laborar.

Las mujeres jornaleras enfrentan fuertes rezagos sociales, que se expresan en el incumplimiento y goce limitado o nulo de sus derechos humanos y laborales. Esta situación se agrava en el caso de las mujeres indígenas jornaleras, que junto con los varones comparan la desigualdad étnica y de clase, también sufren

mecanismos de exclusión que operan particularmente contra ellas, por ser mujeres⁸².

La desigualdad y la exclusión de género son generalizadas, pero adquieren un sello peculiar en cada contexto cultural. En el caso particular de las mujeres indígenas que trabajan como jornaleras agrícolas, viven la marginación y la extrema pobreza tanto en sus lugares de origen como en los de destino; son las asalariadas más explotadas y desprotegidas del medio rural y están sujetas a un proceso de pauperización paulatina, cuya alta movilidad obstaculiza su propia organización. Ellas por lo general son monolingües, presentan altos índices de analfabetismo y bajos niveles de escolaridad, además de altos niveles de desnutrición, viven en comunidades con los más bajos índices de desarrollo humano y los más altos índices de marginación, y son sujetas a distintas formas de explotación y discriminación dada su condición de género⁸³.

En los campos agrícolas las mujeres jornaleras están expuestas a largas y agotadoras jornadas laborales, con mínimos espacios de esparcimiento. Ellas salen a trabajar al igual que el resto de los hombres antes

⁸² *Op. cit.* "La Montaña de Guerrero: Tierra de Mujeres Migrantes", pág. 35.

⁸³ *Ibid.*, pág. 37.

de que despunte el sol. Cuando están de regreso en sus viviendas, son las responsables de preparar y dar los alimentos a todos los miembros de la familia que hayan salido a trabajar incluyéndose ellas, en los pocos espacios que tienen realizan otro sin fin de actividades.

Para muchas mujeres y niñas, llegar a los campos agrícolas puede cobrar distintos significados como el mejorar su situación económica familiar, tener la posibilidad de pagar deudas contraídas por sus esposos o por ellas, construir o acondicionar su vivienda, generar algún ahorro para comprar animales de traspaso o fertilizante para la milpa; pero para otras, significa escapar de situaciones de pobreza o de violencia que enfrentan en sus lugares de origen; pero algunas de ellas también enfrentan en las zonas de trabajo agrícola diferentes momentos que las exponen a ser víctimas de humillación y vejación por su condición de género, edad, etnia y procedencia.

Aunado a las complejidades de las actividades laborales que ellas realizan, se suman las agresiones institucionales, sexuales, verbales, psicológicas, emocionales, por mencionar algunas. A continuación, señalamos las que tienen mayor recurrencia en estos contextos de migración interna agrícola:

- a. Condicionamiento de presentación de documentos para la atención a la salud, tales como: identificación oficial, acta de nacimiento, Clave Única de Registro de Población (CURP) o Seguro popular cuando algunas de las mujeres, la mayoría adolescentes y algunas jóvenes, no cuentan con ningún documento e inclusive no tienen seguridad en cuanto a su edad o fecha de nacimiento.
- b. Negativa a emitir el certificado de alumbramiento para él o la bebé impidiendo así que puedan registrarse ante el registro civil y negando la posibilidad de tener un acta de nacimiento lo que perpetúa la desigualdad y viola derechos humanos fundamentales como el derecho a un nombre o a una nacionalidad, entre otros. Estas situaciones suelen

ser recurrentes en nosocomios como el Hospital Materno Infantil de algunos estados receptores de mano de obra jornalera.

- c. Discriminación en el sector salud cargada de prejuicios, cuestionando: por qué tienen tantos hijos, por qué no los cuidan, por qué se hacen que no entienden el español, etc.
- d. Falta de intérpretes y/o traductores que puedan acompañarlas en determinadas situaciones como en: la realización de trámites administrativos, canalización de pacientes, situaciones laborales (accidentes, etc.), procesos legales, entre otros.

4.2 ACCESO DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES JORNALEROS AL DERECHO A LA EDUCACIÓN

El derecho a la educación de los niños, niñas y adolescentes jornaleros agrícolas migrantes (NNA) es negado en la gran mayoría de los estados de nuestro país. Un dato que muestra el grave rezago en el que se encuentran los NNA jornaleros es el promedio de años de escolaridad. Mientras a nivel nacional el promedio de años de escolaridad es de 8.1, para los/as jornaleros/as agrícolas es de 5.2 frente a 4.5 años de escolaridad. Es decir, poco más de la mitad de los años de escolaridad⁸⁴.

⁸⁴ Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, "Directrices para mejorar la atención educativa de niñas, niños y adolescentes de familias de jornaleros agrícolas migrantes y adolescentes de familias de jornaleros agrícolas migrantes", México, 2016. Se puede consultar en: <http://publicaciones.inee.edu.mx/busca-dorPub/P1/F103/P1F103.pdf>

El contexto que explica esta situación son los constantes desplazamientos de las familias jornaleras que tienen que realizarlos movidos por la oferta laboral y la necesidad de subsistencia frente a un sistema educativo que no ha generado las alternativas educativas pertinentes que permitan el ejercicio pleno del derecho a la educación. La falta de accesibilidad al servicio educativo regular es el principal obstáculo que enfrentan, es decir, si una familia tiene la intención de inscribir a su hijo o hija en alguna escuela regular al llegar a un nuevo destino laboral, se enfrenta a diversas barreras institucionales:

- a. El primero es la falta de documentación que acrediten la trayectoria educativa.
- b. Otra barrera está relacionada con la temporalidad, esto quiere decir que si no fue inscrito/a al inicio del curso escolar es común que el director o directora aluda a no tener lugar en su institución.
- c. La barrera anterior está relacionada también con los mecanismos de evaluación implementados por la propia Secretaría de Educación Pública (SEP). Si un niño o niña jornalera migrante entra a la escuela regular, se presume rezago, monolingüismo, lo que implica un trabajo mayor para la escuela y el maestro, además de que en la evaluación de la propia institución “perjudica los indicadores de desempeño de la escuela”.

Los NNA jornaleros migrantes sufren la falta de maestros y maestras capacitados/as, pero en ocasiones también son rechazados/as porque llegan cuando ha comenzado el ciclo escolar, como el caso de Fidel de la Cruz (indígena na’ savi del municipio de Cochoapa el Grande, Guerrero), que fue documentado por el Centro de Desarrollo Indígena Loyola (CDIL). Él en compañía de su esposa Rosa, sus dos hijos y una hija, llegaron a rentar un espacio para vivir en la comunidad rural de La Loma en el municipio de Romita, Guanajuato, para incorporarse en las labores agrícolas de esa zona.

Fidel de la Cruz tuvo dificultades para que sus hijos e hija pudieran inscribirse en la escuela para continuar con sus estudios, su interés era que recibieran la educación básica durante su periodo de estancia en el estado de Guanajuato. El director del plantel le negó la inscripción argumentando que “el curso escolar ya había iniciado”. Los hechos fueron denunciados públicamente durante el “Foro de Educación” que se realizó en febrero de 2018 en el estado, organizado por el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) y el CDIL A.C., así como a través de los medios de comunicación. Posteriormente su caso fue atendido por la Dirección de Equidad de la Secretaría de Educación de Guanajuato (SEG). Al final por las presiones de la SEG fueron aceptados los dos niños y la niña en el plantel escolar⁸⁵:

Fidel de la Cruz, de 43 años, originario del municipio de Cochoapa el Grande, Guerrero, hablante de la lengua indígena tu’ún savi, con primaria incompleta, se encontraba laborando como caporal en la comunidad de Corrales Ayala, municipio de Romita, Guanajuato. Su principal actividad era organizar y supervisar una cuadrilla de trabajadores/as agrícolas dedicados a la cosecha de chile. Acudió a esta región en el mes de octubre de 2017, por invitación del patrón, quien le detalló mínimamente las condiciones de trabajo. El acuerdo se pactó por la duración del corte, entre dos y tres meses. Fidel junto con su esposa Rosa buscaron que sus dos niños y una niña

⁸⁵ Caso documentado por Giovanna Battaglia Velázquez (CDIL), Romita, Guanajuato, agosto de 2017.



fueran recibidos en la escuela de la comunidad de Corrales Ayala, ya que su interés era que recibieran la educación básica durante su periodo de estancia en Guanajuato el cual terminaría en el mes de agosto de 2018. Al dirigirse al director se negó a recibirlo argumentando que ‘el curso escolar ya había iniciado’. Su caso se visibilizó durante un foro de educación organizado en febrero de 2018 por el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) y el CDIL. El caso fue atendido por la Dirección de Secretaría de Educación de Guanajuato (SEG). La niña y los niños fueron ingresados a la escuela y el CDIL sigue monitoreando⁸⁶.

Situaciones como esta son recurrentes a pesar de que la LFT señala en su artículo 283 párrafo X, que los patrones tienen la obligación de:

Fomentar la alfabetización entre los trabajadores y sus familiares. El Estado garantizará en todo momento, el acceso a la educación básica de los hijos de los trabajadores estacionales del campo o jornaleros. La Secretaría de Educación Pública, reconocerá los estudios que, en un mismo ciclo escolar, realicen los hijos de los trabajadores estacionales del campo o jornaleros tanto en sus lugares de origen como en sus centros de trabajo.

⁸⁶ Sepuedeconsultar: <http://www.heraldoleon.mx/los-jornaleros-solicitan-apoyo-la-seg/>

Por otro lado, desde el 2013 no existen programas focalizados para atender a los NNA jornaleros migrantes. Si bien existieron programas que acumularon una experiencia como el Programa de Educación Básica para Niños y Niñas de Familias Jornaleras Agrícolas Migrantes (PRONIM), estos fueron fusionados en el Programa para la Inclusión y Equidad Educativa (PIEE) donde se incluye atención a la discapacidad, a indígenas y migrantes, y a las y los alumnos con aptitudes sobresalientes y/o talentos específicos.

Otro problema al que se enfrenta el PIEE, además de no contar con un programa específico para la atención de NNA jornaleros migrantes es la falta de maestros y maestras capacitados/as. Los sueldos para este programa compensatorio son bajos, lo que genera contratación de personal no preparado. El PIEE también enfrenta un grave problema estructural y que está relacionado con los sistemas de información de la propia SEP.

Ana, una niña na' savi (mixteca) de Cochoapa el Grande, Guerrero, llegó junto con su familia al corte del limón en Michoacán. Por cuestiones de trabajo y movilidad y de las barreras antes mencionadas, Ana fue inscrita en el programa PIEE. Ella contaba con la constancia de que estaba estudiando en 5° grado de primaria en la escuela de su comunidad, sin embargo, en el Sistema de Control Escolar de Población Migrante (SINACEM) no estaba registrada⁸⁷.

La situación que enfrentó Ana y su familia muestra la gravedad de que la SEP y los distintos programas impulsados para la atención educativa de las niñas, niños y adolescentes jornaleros migrantes, no cuenten con un sistema unificado de información educativa.

4.3 SALUD. SIN ACCESO A LA SEGURIDAD SOCIAL

Uno de los factores más recurrentes en las condiciones de trabajo es la falta de apoyos en caso de accidentes o fallecimiento del o la jornalera, ausencia de centros de salud y/o obstáculos para el acceso a la atención médica. Lo anterior es resultado de las condiciones de trabajo y de vida precarias. Según registros del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y la ENOE⁸⁸ de los más de 2 millones de jornaleros/as en el país, entre 2010 y 2018 la proporción de los/as trabajadores/as eventuales del campo asegurados/as en México pasaron del 4.9% al 7.5% (Ver Cuadro 8).

CUADRO 8 TRABAJADORES EVENTUALES DEL CAMPO REGISTRADOS EN EL IMSS			
AÑO	ASALARIADOS DEL CAMPO*	TOTAL DE ASEGURADOS EVENTUALES DEL CAMPO**	%
2010	2,430,288	119,141	4.9
2011	2,547,071	124,957	4.9
2012	2,663,898	136,335	5.1
2013	2,664,585	143,484	5.4
2014	2,776,400	159,357	5.7
2015	2,881,009	173,117	6.0
2016	3,011,353	183,888	6.1
2017	2,961,680	200,833	6.8
2018***	2,997,352	225,219	7.5

Fuente: **IMSS para el registro de asalariados eventuales del campo

*INEGI, ENOE, segundo trimestre. Varios años para el total de asalariados del sector agropecuario

*** Registro del quinto mes de estadísticas del IMSS

⁸⁷ Información documentada por la Red Nacional de Jornaleros y Jornaleras Agrícolas en el primer semestre de 2018.

⁸⁸ INEGI. Encuesta a Hogares. ENOE, segundo trimestre de 2017.

Si bien hay un incremento en el número de asegurados/as eventuales del campo, esta proporción es aún insignificante, no obstante, la limitación de que los registros del IMSS son solo para eventuales del campo, estos son dominantes. Entre los seguros que ofrece el IMSS están: Riesgos de Trabajo, Enfermedades y Maternidad, Invalidez y Vida, Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez y Guarderías y Prestaciones Sociales.

Pero un requisito del IMSS es que el trabajador o trabajadora se registre para obtener su número de seguridad social. Deben de llevar en original la copia certificada del acta de nacimiento para su cotejo, identificación oficial vigente, y copia de la Clave Única de Registro de Población (CURP).

El problema no solo es que los patrones se niegan a asegurar a los/as jornaleros/as que contratan, sino que, además, ni la Secretaría del Trabajo, ni la SEDESOL a través del Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas (PAJA), ni el IMSS, han hecho campaña para que todos los/as jornaleros/as tengan los documentos que requiere el IMSS, para promover e informarles acerca de su afiliación y obtener así, el número de seguridad social. Bajo estas circunstancias, los/as jornaleros/as se encuentran totalmente indefensos/as y los casos de negligencia y abandono en casos de necesidad de atención a la salud, se vuelven una constante.

4.4 LOS TESTIMONIOS HABLAN

Bajo estas consideraciones, presentamos algunos testimonios que visibilizan los abusos y arbitrariedades que se cometen en agravio de las personas jornaleras migrantes. No se trata de presentar de forma exhaustiva lo registrado en el camino con los/as jornaleros/as, sino de resaltar situaciones que permitan presentar argumentos para resolver el contexto de deterioro y precarización laboral de los/as jornaleros/as en las regiones agrícolas donde van a trabajar.

Si bien predominan cuestiones de salud, porque son las situaciones más sentidas, existen otras violaciones asociadas a la jornada de trabajo y el salario. Lo registrado aquí no es exclusivo de los testimonios recabados, es un acto que sufren todos los/as jornaleros/as en los lugares donde existe agricultura intensiva. Unos tienen referente y otros no, debido a que los/as jornaleros/as temían que llegara su testimonio a los involucrados y se viera perjudicada su fuente de trabajo:

TESTIMONIO 1

MARÍA GUADALUPE FLORES HERNÁNDEZ

3 meses

Originaria de la comunidad na' savi de Yozondacua el Nuevo, municipio de Cochoapa el Grande, Guerrero

LUGAR DE LOS HECHOS: Hospital Básico de San Francisco del Rincón y en el Hospital Pediátrico de León, Guanajuato

Información documentada por el Centro de Desarrollo Indígena Loyola A.C. y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan A.C.

El 10 de junio de 2017, la señora Catarina empezó a notar que su bebé María Guadalupe de 3 meses estaba enferma, la llevaron al Hospital Básico de San Francisco del Rincón, para que recibiera atención médica. Los médicos informaron a los padres que su enfermedad era delicada, sin embargo, estuvo unos días en observación.

La mamá de la bebé comentó que mientras estaba hospitalizada la niña, ella se quedó a cuidarla porque su esposo se fue a trabajar al campo agrícola donde tenía unas semanas que habían llegado; mencionó que a la bebé la tenían sujeta de sus brazos para que no se quitara el respirador que le habían colocado, en muy pocas ocasiones fueron a verla para verificar su estado de salud; ella no podía ir al baño porque no habla el español (su lengua materna es el tu'un savi).

No le entendía a las enfermeras; otra persona que estaba con otro paciente se acercó a ella para preguntarle si la podía apoyar, pero no se entendieron.

Finalmente la canalizaron al Hospital Pediátrico de León, Guanajuato, en las primeras horas de hospitalización la niña comenzó a reaccionar, a moverse por sí misma (la mamá refiere que comenzó a llorar como buscando pecho, pero los médicos no permitieron que la amamantara). En los siguientes días, la mamá veía que los médicos le aplicaban medicamentos, no era visible alguna mejoría en la bebé, se percató que su salud empeoraba. Llegó un momento en que ya no reaccionó y en consecuencia falleció el día 14 de junio de 2017.

Los médicos informaron que el fallecimiento de la bebé fue por problemas de neumonía. Sin embargo, personal del hospital difundió información a los medios de comunicación acerca de las causas reales de la muerte de la bebé, sin el consentimiento de los padres ni la autorización del hospital, lo que generó que se emitiera una alerta de preocupación de las personas que estaban en torno a la familia por estar contagiados de tuberculosis.

Ante el fallecimiento, el hospital los canalizó con una funeraria para iniciar con el embalsamamiento del cuerpo, sus padres recibieron el acompañamiento del Centro de Desarrollo Indígena Loyola (León, Guanajuato), intervinieron para que las autoridades del estado de Guanajuato les apoyaran con el traslado del cuerpo de su hija, en representación del Gobernador Miguel Márquez Márquez, acudió un Diputado para atender el caso.

TESTIMONIO 1

...

Los padres de la bebé, en presencia del funcionario manifestaron su malestar por la mala atención médica que recibió su hija en el hospital, así como el esclarecimiento de las causas de la muerte. El funcionario al escuchar el descontento de los padres prefirió retirarse del lugar, sin asumir en ese momento la responsabilidad de apoyarlos para el traslado del cuerpo o de brindarles cualquier información al respecto.

El Centro Loyola les apoyó para la contratación de los servicios de la funeraria para el traslado del cuerpo de la bebé hacia su comunidad de origen, cobrando por el servicio la cantidad de \$27,840.00, en ese instante la familia no contaba con el dinero, la funeraria se ofreció a realizar el traslado, mientras el Centro Loyola firmó un pagaré por el costo del traslado. Finalmente, el gobierno del estado de Guanajuato y el DIF estatal cubrieron los gastos del traslado.

El papá de la bebé decidió no iniciar una denuncia ante el ministerio público para evitar que al cuerpo de su hija le practicarán la necropsia de ley, debido a que sus familias en la comunidad de origen decidieron que por cuestiones culturales era mejor tener el cuerpo sin ninguna manipulación. Fue sepultada de acuerdo con los usos y costumbres de la comunidad.

Ante los hechos ocurridos y después del sepelio de la bebé, en el Hospital Pediátrico se llevó a cabo una reunión donde acudieron autoridades del sector salud, representantes de la Secretaría de Gobierno del estado, los directivos del nosocomio, así como una intérprete (que hablaba una variante distinta a la de los padres de Ma. Guadalupe), e integrantes del Centro Loyola.

Se expusieron los detalles de los hechos, los padres externaron sus dudas y preocupación, se asumieron compromisos, entre ellos el de garantizar la presencia de traductores e intérpretes para la atención de la población jornalera que es atendida por el sector salud de la entidad.

La familia interpuso una queja ante la Procuraduría de Derechos Humanos del estado de Guanajuato, la cual se hizo con el apoyo de una intérprete que habla la variante lingüística de su lugar de origen de la familia de la bebé. La queja es por las irregularidades que se presentaron durante la atención médica. La queja sigue en proceso.

TESTIMONIO 2

MARÍA DE LAS NIEVES VILLANUEVA

34 años

Originaria de la comunidad me'phaa de Francisco I.

Madero, municipio de Metlatónoc, Guerrero

LUGAR DE LOS HECHOS: Islas del Bosque, municipio de Escuinapa, Sinaloa.

Información documentada por el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan A.C.

El 29 de diciembre de 2017, María de las Nieves acudió al Hospital General de Mazatlán, Sinaloa, para recibir atención médica, porque había iniciado con labor de parto, los doctores le informaron a su esposo Cristino García Félix, que sería parto natural. Al día siguiente, le informaron que el parto se había complicado, le comentaron que debía de firmar unos documentos porque a su esposa le iban a practicar una cesárea. Posteriormente le comunicaron que su bebé había fallecido al igual que su esposa, pero sin darle mayor información de las causas de ambos fallecimientos.

De acuerdo con el testimonio de Cristino García, la Trabajadora Social del Hospital lejos de apoyarle lo presionó y obligó a contratar de inmediato a una funeraria para que se llevara los cuerpos del hospital, manifestándole que de lo contrario *la policía actuaría para expulsarlos del hospital*. Ante tal presión, la familia se vio obligada a contratar los servicios de la funeraria La Paz, que realizaría el embalsamamiento y los trámites del traslado de los cuerpos a su lugar de origen. Para esto, la funeraria les requirió la cantidad de \$39,000.00 por el traslado, cantidad que no disponían en ese momento.

El director del Centro Tlachinollan se comunicó con el secretario general del Gobierno del estado de Guerrero, quien instruyó al Lic. Juan José Castro Justo, titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural y responsable de la Comisión Intersecretarial para la Atención y Apoyo a los Jornaleros Agrícolas Migrantes y sus Familias, para que se encargara de entregar el apoyo económico por la cantidad de \$30,000.00, para cubrir el traslado de los cuerpos de Mazatlán (Sinaloa) hasta su comunidad de origen.

El esposo de María de las Nieves no presentó una denuncia o queja por los hechos ocurridos.

TESTIMONIO 3

ABEL RÍOS ÁVILA*10 años**Originario de la comunidad me' phaa de Santa Ma. Tonaya, municipio de Tlapa de Comonfort, Guerrero***LUGAR DE LOS HECHOS:** Hospital Básico de Villa Unión y el Hospital General de Mazatlán, Sinaloa

Información documentada por el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan A.C.

18 al 25 de marzo de 2017

El sábado 18 de marzo de 2017, el niño Abel Ríos Ávila, se encontraba en el patio de la vivienda donde rentaban (lugar cercano a los campos agrícolas donde estaban laborando), en un descuido sufrió una caída y se lastimó con una varilla, se le enterró en la parte superior de la nalga. Sus padres lavaron la herida con agua oxigenada, el niño Abel caminó normalmente durante los siguientes dos días, pero el martes 21 de marzo les comentó a sus padres que empezó a sentir comezón en la herida, ese mismo día su papá Sebastián Ríos Bravo lo llevo al Hospital Básico de Villa Unión, Sinaloa.

El médico revisó la herida, tenía una tonalidad oscura y estaba reseca, indicó al papá que era necesario aplicarle la vacuna contra el tétano, pero no la tenía, sugirió que regresaran al siguiente día; regresaron, pero aún no contaban con la vacuna.

El niño Abel empezó a tener problemas para respirar, como a las dos de la tarde del 23 de marzo, el Hospital Básico de Villa Unión lo canalizó al Hospital General de Mazatlán. Estuvo internado toda la tarde del jueves 23 y viernes 24 de marzo. El sábado 25, el señor Sebastián se percató que cuando su hijo quería moverse o levantarse, inmediatamente las enfermeras le aplicaban medicamento y nuevamente se volvía a dormir.

Ese día como a las 6:30 de la tarde las enfermeras les informaron que el niño había fallecido, al ingresar a verlo, ya estaba sin signos vitales. Sus padres se percataron que el niño no contaba con un diente superior, exigieron una explicación, pero el personal médico no mencionó nada al respecto.

El padre del niño refirió que desde el momento de su ingreso al Hospital General de Mazatlán hubo una mala atención, fueron tratados con prepotencia y discriminación por parte del personal médico. Le hicieron firmar un documento sin darle una explicación a detalle del proceso médico al que iban a someter a su hijo.

El padre argumentó que las enfermeras lo enviaron a comprar algunos medicamentos, recorrió algunas farmacias céntricas, pero no los encontró. En una farmacia le comentaron que esos medicamentos recetados sólo los tiene el sector salud (centros de salud y hospitales públicos).

Durante todo el tiempo que su hijo permaneció en el Hospital General, nunca conocieron personalmente al Dr. Mecua (se desconocen sus apellidos), quien tenía bajo su responsabilidad la supervisión médica del niño. Tampoco el apoyo de un intérprete en su lengua materna.



TESTIMONIO 3

...

Los padres señalan que recibieron un trato inadecuado por parte de la Trabajadora Social del Hospital General de Mazatlán, quien lejos de apoyar a la familia para la realización de los trámites para el traslado del cuerpo del niño hasta su comunidad de origen, terminó obligándolos a contratar una funeraria para que se llevaran al niño del lugar (fueron forzados a acelerar el proceso para el traslado del cuerpo a su lugar de origen)

Con toda esa presión, los padres contactaron a la Funeraria San Miguel para el traslado del cuerpo de Mazatlán a Tlapa, pagando por el servicio la cantidad de \$28,000.00, tuvieron que conseguir por su cuenta los recursos económicos.

Los papás del niño no interpusieron una denuncia o queja por los hechos ocurridos.

TESTIMONIO 4

RIGOBERTO GARCÍA ANASTASIO*No se registra edad**Originario de la comunidad me' phaa de Juanacatlán, municipio de Metlatónoc, Guerrero
Indígena me' phaa-ba' thaa***LUGAR DE LOS HECHOS:** En la carretera entre Santa Rita y el Fraile, en los límites de Yurécuaro y La Piedad, estado de Michoacán*Información documentada por el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan A.C.*

14 al 18 de mayo de 2017

El niño Rigoberto García Anastasio, salió de su comunidad de origen el día 2 de abril del 2017 en compañía de sus abuelos maternos, para dirigirse a Yurécuaro, Michoacán, en busca de trabajo en los campos agrícolas donde acuden cada temporada, para trabajar en el corte de jitomate.

El domingo 14 de mayo, alrededor de las siete de la mañana, Rigoberto García se dirigía con su abuelo a trabajar, al cruzar la carretera, fue atropellado por un taxi, dejándolo gravemente herido con fracturas en la pierna, tobillo derecho y en la clavícula derecha. El conductor del taxi se dio a la fuga.

Los familiares por sus propios medios lo trasladaron al Hospital General de La Piedad, Michoacán, para recibir atención médica. El paciente llevaba tres días internado, aun los médicos estaban valorando si lo sometían a una cirugía o lo enyesaban. Sus familiares no veían la atención médica inmediata que requería, ante esta situación se vieron obligados a solicitar su alta voluntaria.

El miércoles 17 de mayo salió del hospital, los familiares buscaron la manera de contratar una ambulancia, pero les cobraba 28 mil pesos de La Piedad a Tlapa (Guerrero). Finalmente lo trasladaron en un vehículo particular propiedad del jornalero Delfino García, quien cobró \$15,000.00.

Llegaron a Tlapa el jueves 18 de mayo a las seis de la mañana, el niño fue ingresado y atendido en el Hospital General de Tlapa. Semanas después Rigoberto García fue dado de alta.

Nadie pagó los gastos del traslado, los abuelos tuvieron que conseguir prestado ese dinero porque desconocían a qué instancia podían acudir para solicitar algún apoyo. No interpusieron la denuncia por los hechos ocurridos.

TESTIMONIO 5

JORNALERO (ANÓNIMO)*No se registra edad**Originario de la comunidad me' phaa de Francisco I. Madero, municipio de Metlatónoc, Guerrero***LUGAR DE LOS HECHOS:** Hospital de El Parral, Chihuahua*Información documentada por el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan A.C.*

El jornalero se enfermó, se agravó su salud por falta de una atención médica oportuna, falleció el 01 de septiembre de 2016, cuando se encontraba recibiendo atención médica en un hospital de El Parral, Chihuahua.

La respuesta de los médicos es que no tuvo solución debido a su estado de salud. Uno de sus hijos estaba con él mientras ocurrieron los hechos. Él tuvo que costear los gastos para el sepelio de su padre, así como asumir los cuidados necesarios para su mamá.

La familia no interpuso la denuncia o queja por los hechos ocurridos.

A pesar de la intervención del Centro Tlachinollan, en el hospital no brindaron información sobre la causa de la muerte.

TESTIMONIO 6

JORNALERO (ANÓNIMO)

No se registra edad

*Originario de Ocosingo,
Chiapas*

Indígena tzeltal

LUGAR DE LOS HECHOS:
Valle de Hermosillo,
Sonora

Información documentada
por Pedro Gómez (Mixteco
Yosonuvico de Sonora
Cerro Nublado A.C.)

El jornalero comentó que: “[el contratista] Nos dijo que nos iban a contratar para ir a trabajar a un campo en Hermosillo, que podíamos llevar a nuestra familia, esposa y nuestros hijos pequeños porque ahí había guardería, que nos darían un cuarto limpio, con luz y agua, también nos darían alimentos y transporte para llegar a la empresa y retornar a nuestro lugar de origen, así como salario y prestaciones de ley”.

Salieron de Ocosingo, Chiapas, pero no les cubrieron los alimentos y además tuvieron que cooperar para el pago del combustible, el chofer les mencionó que “no contaba con dinero para comprarlo”.

Cuando llegaron al campo agrícola, personal de la empresa les dijo que “no recibían niños (as), que no había quien les cuidara y que por lo tanto tendríamos que marcharnos del campo”. Las familias no contaban con los recursos económicos suficientes para poder regresarse, y la empresa no les quiso cubrir el traslado.

Las familias jornaleras reclamaron y argumentaron “que no deberían de prometer cosas que no son ciertas, pero no nos hicieron caso y al poco tiempo seguridad privada nos sacó por la fuerza”.

“Hay muchas promesas al principio, que hay buena paga, que hay vivienda con camas, luz, agua y baños limpios. Nos prometen que habrá alimentos sin costo y que el viaje lo cubren ellos. Al final vemos que nos mienten porque nada de eso es cierto cuando nos reclutan en las comunidades”.

4.5 SOBRE LAS CONDICIONES DE VIDA DE LAS Y LOS JORNALEROS AGRÍCOLAS Y SUS FAMILIAS EN LOS ALBERGUES SUBROGADOS POR LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL⁸⁹

En relación con las condiciones de los albergues para las y los jornaleros agrícolas y sus familias, la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) anunció en diciembre de 2015 revisar todos los albergues para que, de manera preventiva, se implementaran las condiciones de seguridad para las familias jornaleras migrantes que pernoctan en esos lugares. Así lo señaló en ese entonces José Antonio Meade Kuribreña, extitular de la SEDESOL en respuesta a la recomendación 37/2015⁹⁰ que emitió la CNDH, por el fallecimiento de una niña ocurrido el 11 de marzo de 2014, en el albergue para jornaleros/as que se ubica en Yurécuaro, Michoacán.

Afirmó que la dependencia cumpliría con todos los puntos de la recomendación, a fin de revisar las condiciones de seguridad y generar así condiciones de vivienda digna para los/as trabajadores/as agrícolas, garantizando una mejor atención a las familias jornaleras migrantes que llegan a los albergues administrados por la autoridad federal.

En esa ocasión el funcionario mencionó que a nivel nacional existen 118 albergues que son administrados a nivel federal por la SEDESOL, y 850 que se administran de manera mixta y en los que hay una participación importante de productores del sector agropecuario y los propios jornaleros (as). En este sentido, la SEDESOL destinó en 2015 recursos por 307 millones de pesos al Programa de Atención a Jornaleros

Agrícolas (PAJA) para cubrir las necesidades de alimentación, becas escolares y apoyos al arribo de trabajadores (as) del campo de 16 años o más, y que encuentran refugio temporal para ellos y sus familias. El programa a nivel nacional brinda la posibilidad de dos alimentos diarios por un monto máximo de 480 pesos mensuales por niño o niña de 14 años; además de 178 pesos de apoyo para estudiantes de preescolar, 178 a 356 pesos para primaria y de 551 a 669 pesos para hombres en secundaria⁹¹.

Respecto al estado de Michoacán -derivado de la recomendación de la CNDH- la SEDESOL destinó 5 millones de pesos a sus albergues, entregando así mil 497 becas, mil 61 apoyos al arribo y 17 acciones de infraestructura. De manera particular para el municipio de Yurécuaro, se entregaron 115 apoyos al arribo y dos acciones de infraestructura por más de 939 mil pesos, mientras que para el albergue comunitario de Yurécuaro se autorizaron 20 proyectos con una inversión histórica de 10 millones 348 mil 806 pesos, de los cuales el 9.1% (939 mil 875 pesos) se destinaron a su rehabilitación. Como parte de estos trabajos, se renovó un segundo módulo de vivienda con 40 dormitorios en un anexo del albergue⁹².

Sin embargo, la Red Nacional de Jornaleros y Jornaleras Agrícolas ha documentado durante el 2018 diversos casos que evidencian la falta de rehabilitación, mantenimiento y condiciones dignas de algunos albergues destinados para las familias

⁸⁹ En diciembre de 2018 asumió la presidencia Andrés Manuel López Obrador, con la nueva administración se hicieron diversos cambios a algunas de las secretarías a nivel federal, entre ellas a la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) que actualmente es la Secretaría de Bienestar.

⁹⁰ Se puede consultar en: http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Recomendaciones/2015/Rec_2015_037.pdf

⁹¹ Cfr. "Sedesol revisará todos los albergues para jornaleros agrícolas", El Financiero, Sección Nacional, 08 de diciembre de 2015. Se puede consultar en: <http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/sedesol-revisara-todos-los-albergues-para-jornaleros-agricolas>

⁹² *Ibid.*

jornaleras que arriban a los campos agrícolas que se ubican en los estados donde se han presentado las denuncias de manera anónima. A continuación, se mencionan algunos de los hechos documentados en los estados de Sinaloa, San Luis Potosí, Guanajuato y Michoacán, este último registrado por la Red Solidaria de Derechos Humanos⁹³.

Sinaloa

En enero de 2018, después de varias denuncias ciudadanas respecto a las malas condiciones del albergue de la SEDESOL que se ubica en la sindicatura de Isla del Bosque, municipio de Escuinapa, Sinaloa, la regidora María Marilyn Orozco Mata del Partido Sinaloense, hizo un recorrido por el lugar, constatando grandes cúmulos de basura, aguas negras y aulas que no son habilitadas para brindar algún servicio a las niñas y niños, hijos de los/as trabajadores/as agrícolas⁹⁴.

Posteriormente, en febrero, la Red Nacional de Jornaleros y Jornaleras Agrícolas realizó un recorrido por el albergue después de haber recibido denuncias anónimas a través del portal de facebook del colectivo. El albergue es un espacio destinado desde hace más de 30 años para las personas jornaleras que arriban a la zona para los ciclos agrícolas. Durante el recorrido por el lugar junto con algunas familias que ahí habitan, quienes compartieron sus testimonios (hombres, mujeres, niñas, niños y un adulto mayor) pero todos de manera anónima, encontramos lo siguiente:

- a. Olores fétidos, alrededor de 10 concentraciones de aguas negras en coladeras que están cubiertas de agua y basura, todas están destapadas (siendo un riesgo para los/as niños y niñas): se ubican

cercanas a las coladeras de las regaderas, en las tomas de agua, en las áreas de juego de las niñas y niños, en el preescolar, en las áreas cercanas a las viviendas-sanitarios-regaderas.

- b. A las familias (independientemente del número de sus integrantes) que habitan tres viviendas se les asigna un sanitario y una regadera para su uso. Cada puerta está numerada con los dígitos de los cuartos. Se ubicó un sanitario que es utilizado por los integrantes de cuatro cuartos, su sanitario regresa el agua después de que se jala la palanca.
- c. De las 24 regaderas registradas, todas estaban sin alumbrado, les faltaban tomas de apagado-encendido, focos, la base de las regaderas, algunas les faltaban las llaves o presentaban inundaciones porque las coladeras estaban tapadas, los espacios de las regaderas presentaban humedad, moho, puertas oxidadas y algunas estaban desprendidas o sujetadas con cuerdas.
- d. Algunos sanitarios o regaderas estaban cerrados con candados, medida que han tomado quienes las ocupan debido a las pésimas condiciones del drenaje, para así evitar el uso desproporcionado de las mismas.
- e. La guardería en ese momento atendía aproximadamente a 40 niños/as, pero algunos manifestaron recibir una atención violenta por parte de la responsable. En ocasiones se quedaban dormidos/as solos/as en los cuartos de la guardería sin la vigilancia de alguna de las niñeras, aunque manifestó una de ellas que ha sido por indicaciones de la responsable de la guardería.

⁹³ Portal de facebook: <https://es-la.facebook.com/redsolidariadh/>

⁹⁴ Cfr. Ibarra, María, "Denuncian abandono del albergue en Isla del Bosque. La presidenta del DIF de Escuinapa reconoce el mal estado en que se encuentra el lugar y se compromete a rehabilitarlo", Debate, sección Mazatlán, 12 de enero de 2018. Se puede consultar en: <https://www.debate.com.mx/mazatlan/Denuncian-abandono-del-albergue-en-Isla-del-Bosque-20180112-0078.html>

- f. El albergue cuenta con un preescolar y primaria, ésta última es atendida de manera regular por CONAFE.
- g. Cada semana (sábados) tienen que pagar una cuota de 100 pesos a una mujer jornalera que habita en el albergue y es responsable de la guardería, por indicaciones del encargado del lugar. De julio a octubre de 2017, cuando el trabajo es escaso en la zona, se les cobraba 70 pesos, aunque las familias no estuvieran trabajando o estuvieran en otro estado laborando, sólo por dejar sus pertenencias tenían que depositar el monto de dinero en una tienda “Oxxo”. El pago de esas cuotas no se ve reflejado en el mantenimiento de las áreas.
- h. Los niños y niñas pagan una cuota por sus alimentos, sin embargo, si alguno llega después de la hora de la comida, reciben un trato violento por parte de la responsable del lugar. Algunos niños/as prefieren no pedir los alimentos a pesar de que sus padres pagaron las cuotas: 50 pesos diarios por cada niño o niña (3 niños/as en total); 20 pesos diarios por 1 niño/a; y 5 pesos diarios por cada niño/a que se quedan en los cuartos y que van a la guardería por sus alimentos⁹⁵.

La Presidenta Municipal de Escuinapa, Fernanda Ocegüera, junto con el delegado Federal de la SEDESOL, Jorge Alberto Salas Beltrán, anunciaron en junio, la rehabilitación general del albergue de Isla del Bosque, donde se invertirían 4 millones de pesos, y se preveía que los trabajos iniciarán durante los primeros días de julio⁹⁶.

⁹⁵ Comunicado de prensa, “Red Nacional Jornaleros Agrícolas | Denuncian abandono de Albergue”, Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todos y Todas” (Red TDT), 21 de febrero de 2018. Se puede consultar en: <https://redtdt.org.mx/?p=10364>

⁹⁶ Cfr. “Invertirán en albergues en Teacapan e Isla del Bosque. Jorge Salas Beltrán, delegado Federal de Sedesol, informó que se contemplan 14 millones de pesos para el nuevo albergue en Teacapan, mientras que para Isla del Bosque se destinarán 4 millones en rehabilitación”, Sección Sinaloa, 14 de junio de 2018. Se puede consultar en: <https://www.debate.com.mx/sinaloa/teacapan-albergues-inversion-escuinapa-isla-del-bosque-fernanda-oceguera-20180614-0171.html>

Como Red presentamos una queja a la CNDH sobre las condiciones del albergue de Isla del Bosque con fecha 16 de febrero del 2018. La comisión ha manifestado que el análisis y estudio de los hechos se encuentran relacionadas con las que se investigan en la queja interpuesta por el Sr. Sergio Hernández Ramírez CNDH/6/2017/3639/Q,

San Luis Potosí

Organizaciones integrantes de la Red, como Respuesta Alternativa y la Pastoral Social de Matehuala han realizado trabajo de campo, en donde han visitado algunos albergues en la región Altiplano: dos en Villa de Arista, uno en Cedral y otro en Vanegas, en los cuales, las condiciones de vida para las y los jornaleros son deplorables. Se trata de construcciones con habitaciones, área para preparar alimentos y baños para albergar a un determinado número de jornaleros/as con sus familias.

Sin embargo, no cuentan con los servicios básicos, como agua potable, los baños no están en un correcto funcionamiento, no disponen de camas, (duermen sobre cartones que se compran ellos mismos), los colchones están apilados en un cuarto cerrado con llave porque tienen chinches; los techos son de lámina y tienen goteras. En un cuarto se quedan más personas de las que se tiene capacidad.

Respecto a la alimentación, solamente en el albergue de Vanegas se proporciona alimento. En el albergue de Villa de Arista sólo existen fogones para que las personas cocinen, sin embargo, tienen que comprar leña porque no hay gas. En lo que se refiere

a educación, en algunos albergues hay un espacio para preescolar, pero no funciona como tal, ya que alguien de las personas del grupo se queda cuidando a los niños y niñas más pequeños mientras los demás se van a trabajar. En ningún albergue de los mencionados, se cuenta con servicio médico ni medicamentos ni con botiquín.

En la zona media, al menos en Rioverde y Ciudad Fernández se tuvo conocimiento que las personas jornaleras rentan casas habitación. En el caso de Ciudad del Maíz existe un rancho, en el cual hay albergue instalado por parte de la empresa en el mismo centro de trabajo, ubicado en el ejido Palomas del mismo municipio. A través de una nota periodística⁹⁷ se tuvo conocimiento de un proceso de denuncia por la inconformidad respecto a la calidad e higiene de los alimentos y por situaciones de trata con fines laborales.

Guanajuato

Los empleadores, autoridades municipales y estatales, así como el Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas (PAJA) de la SEDESOL, no han asegurado el acceso a condiciones de vivienda digna para las familias jornaleras migrantes. En todo el estado solo existe un albergue en la comunidad del Maguey, municipio de San Francisco del Rincón, construido en el 2015 con fondos de la SEDESOL, de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI)⁹⁸ y del municipio.

El albergue fue construido a pie de un río de aguas negras. Cuenta con los siguientes espacios: nueve viviendas familiares, dos galeras con una capacidad de 20 personas por galera, baños de hombres y mujeres, un área común y espacios de

oficina. En el 2016, año de su apertura, se recibieron cerca de 60 personas las cuáles no tuvieron agua potable, luz eléctrica, gas y ningún servicio de atención en las áreas de salud y educación, en el grupo iban tres mujeres naï savi embarazadas que no recibieron atención médica en el lugar, porque no cuenta con consultorio. En 2018, la población aumentó a cerca de 100 personas. Aunque ya se instaló la luz, solo se dejó una toma de agua del que se provee todo el albergue, y no se instaló el consultorio médico. Tampoco se contó con ningún tipo de seguridad y vigilancia. En ningún momento ha habido corresponsabilidad patronal. Las familias jornaleras indígenas que han habitado el albergue, han decidido no interponer una queja ante las autoridades correspondientes por el temor de que ya no se preste el espacio físico cuando arriben en las siguientes temporadas agrícolas⁹⁹.

Michoacán

Entre 2016 y 2018 la Red Solidaria de Derechos Humanos ha brindado acompañamiento para que personas jornaleras agrícolas migrantes denuncien las constantes amenazas y hostigamientos de los que han sido objeto, así como graves irregularidades en la administración del albergue comunitario en el municipio de Tanhuato, Michoacán. A pesar de las continuas denuncias, las autoridades han fallado en to-

⁹⁷ Se puede consultar en: <http://diariozm.com/principal/articulos/primera/NzUyMDQ=.php>

⁹⁸ Con el cambio de gobierno en diciembre de 2018, la CDI pasó a ser el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI).

⁹⁹ Información documentada por Giovanna Battaglia (Centro de Desarrollo Indígena Loyola A.C.), agosto de 2017.

mar acciones concretas en favor de esta población, lo que además de mantener vigentes las problemáticas referidas, ha propiciado el incremento exponencial de la falta de condiciones de seguridad, impidiendo el trabajo presencial que realizan las integrantes de la Red Solidaria de Derechos Humanos en el municipio; a la vez que genera una situación de franca vulnerabilidad para las personas jornaleras que buscan ejercer y defender sus derechos.

Al iniciar el proceso de denuncia, se señaló que las autoridades a cargo del albergue incurrieron en acciones que transgredieron los derechos humanos de la comunidad jornalera, además de administrar de manera ineficiente un servicio público destinado particularmente a un sector de alta vulnerabilidad, como se ejemplifica, precisamente, con la amenaza de cerrar injustificadamente el albergue, dejando a las personas en situación de calle.

Lejos de remediarse esta situación, a inicios de la temporada agrícola de 2018, se alzaron diversas voces de la comunidad jornalera señalando la falta de regulación del cobro de cuotas y de transparencia en el manejo de: 1) los recursos recaudados por la administración a la población jornalera y 2) de los recursos públicos asignados expresamente para la operación del albergue por el gobierno federal. Tales manifestaciones de inconformidad derivaron en la actuación ilegal de fuerzas policiales en el albergue, utilizadas como mecanismo intimidatorio para forzar a la población jornalera al pago de dichas cuotas.

Las personas jornaleras migrantes que arribaron al inicio de la temporada agrícola de este año denunciaron que, sin justificación legal alguna, la administración del albergue les impuso un cobro por concepto de depósito y renta de \$420.00 semanales, por familia. Aquellas personas jornaleras que llegaron sin los recursos económicos suficientes se les negó el ingreso al albergue, dejándolas en situación de calle o, en numerosos casos, orilladas a vivir en hacinamiento junto a alguna familia que aceptó darles refugio durante el tiempo que tardaran en reunir el dinero

suficiente para cubrir el costo de un cuarto para sus propias familias.

Así, sólo hasta que aquellas personas jornaleras que tuvieron que hacinarse con otra familia, y lograron reunir el dinero para el cuarto de su propia familia, más los respectivos costos del pasaje del autobús y alimentos, por cada integrante, han podido mandar llamar por sus familiares que no pudieron hacer el viaje, y que en gran cantidad de casos resultan ser las hijas e hijos menores de edad. Tal situación provoca la separación de las familias jornaleras migrantes, las que, de facto, quedan desintegradas, pues las cabezas de familia deben abandonar el hogar en busca de condiciones económicas que permitan la subsistencia del núcleo familiar, dejando en desamparo a las y los menores de edad de esas familias jornaleras, durante el lapso en que se logre reunir la cantidad de dinero suficiente que permita el reencuentro familiar.

Adicionalmente, debe considerarse que en cada cuarto existen dos juegos de literas, una litera por familia, dos familias por cuarto o cuatro personas adultas como máximo; sin embargo, en cada cuarto habitan tres familias, las que se integran, en promedio, de 5 a 7 integrantes –niños y niñas incluidas-. Lo anterior implica que en cada cuarto habitan, aproximadamente, de 10 a 12 personas hacinadas. Cabe reiterar que, al ingresar al albergue, cada familia debe pagar, por concepto de depósito y renta \$420.00; en otras palabras, en los cuartos habitados por 3 familias, cada una de éstas habrá pagado los 420 pesos indicados. En lo subsecuente, cada familia deberá pagar \$210 por semana, por la habitación en la que vive hacinada.

La Red Solidaria de Derechos Humanos ha señalado la falta de sustento legal en el cobro de dichas “rentas” o cuotas, pues el albergue es un espacio público cuya responsabilidad administrativa recae en la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) y el gobierno municipal. En este sentido, las reglas operativas del Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas (PAJA), no estipulan el cobro por el uso de las instalaciones, por ello, las cuotas impuestas en el albergue de Tanhuato resultan en una grave violación a los derechos humanos de la población jornalera, debido a su situación de precariedad social histórica reconocida expresamente por el Estado mexicano.

A lo largo de los tres años del proceso de denuncia, se han hecho señalamientos urgentes: los cobros irregulares, la falta de acceso a servicios de salud, alimentación, vivienda y educación, dignos y suficientes; la inexistencia de un instrumento regulatorio que sea respetuoso de los derechos humanos y establezca con claridad los derechos y obligaciones de las personas usuarias del albergue; así como el riesgo que conlleva para las familias encontrarse en un espacio francamente hostil, en el que las amenazas, los actos de hostigamiento y las intimidaciones son práctica cotidiana.

En 2017 la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) marcó pauta de lo que, en lo subsecuente, sería la postura de los órganos desconcentrados encargados de velar por los derechos humanos, así como de las autoridades de los distintos niveles. Haciendo caso omiso de las denuncias hechas por las personas jornaleras y la Red Solidaria de Derechos Humanos, esta instancia emitió un boletín de prensa, en el que señalaba que las autoridades federales y municipales realizaron adecuaciones al albergue, por un costo total de un millón setecientos cuarenta y tres mil pesos; lo que el comunicado no señaló es que las obras estaban inconclusas por lo que su funcionamiento, desde un principio, estaba condenado a ser deficiente.

El mensaje de la CEDH a la opinión pública también falló en señalar que, más allá de las remodelaciones

deficientes mencionadas, se reinstaló en funciones a la administradora del albergue, a quien desde un inicio se señaló como la responsable material del contexto denunciado; lo que contravino los acuerdos de la conciliación que poco antes habían celebrado de manera formal la comunidad jornalera y el entonces representante legal del ayuntamiento de Tanhuato.

Es central recordar que la entonces administradora del albergue, está señalada como responsable directa de la transgresión a los derechos de las personas jornaleras, así como de varios incidentes de seguridad relacionados con la labor de la Red Solidaria de Derechos Humanos.

El comunicado de prensa referido en líneas anteriores reivindicaba la labor de las autoridades encargadas del albergue, aun cuando éstas habían quebrantado el compromiso adquirido ante la propia CEDH de remover a la administradora del cargo, situación que marcó la pauta de lo que serían diversos e infructíferos intentos por conseguir que las diferentes autoridades cumplieran con su deber. Dicha funcionaria pública estuvo a cargo de la administración del albergue hasta el cambio de autoridades municipales en septiembre de 2018; sin embargo, los graves incidentes de seguridad que se presentaron durante ese año, en su administración, ocasionaron que se interrumpiera el acompañamiento presencial, el acompañamiento del proceso legal y de documentación del caso.

Previo a lo anterior, la Red Solidaria de Derechos Humanos propuso a la comunidad jornalera la promoción de un juicio de amparo, el cual se presentó en el mes de agosto; conforme fue avanzando el proceso, el juez fue ordenando diversas medidas

con el propósito de detener la situación de violación de derechos humanos en el albergue jornalero, dando la razón a las familias migrantes, lo que provocó que éstas se convirtieran en objeto de amenazas y hostigamientos por parte de las diversas autoridades responsables que habían sido denunciadas en dicho juicio y entre las cuales está la propia policía del mando único de Michoacán, adscrita al municipio.

Ante el incremento de las conductas violentas desplegadas en contra de la comunidad jornalera, la Red Solidaria propuso hacer del conocimiento del Juez de Distrito la insistente agresión por parte de las autoridades responsables, respecto de lo cual existe constancia de que todas las situaciones aquí relatadas han sido informadas a las autoridades encargadas de asegurar el respeto a los derechos de un sector de la población en extrema vulnerabilidad.

Muchos de los problemas en el manejo y operación del albergue persisten, entre éstos resultan particularmente preocupante la falta de garantías para cumplir y hacer valer los derechos de las niñas y niños que ahí habitan, así como la ausencia de los mínimos vitales que el Estado está obligado a proporcionar a la población. Es importante señalar que las diversas acciones jurídicas implementadas fueron los últimos recursos plausibles para exigir que las deficiencias en la administración y operación del albergue se subsanaran. Lejos de conseguir este objetivo, la inacción de autoridades federales, estatales y municipales resultó en amenazas a la vida de las personas jornaleras que decidieron denunciar su situación, así como de integrantes de la Red Solidaria; lo que ha obligado a detener el acompañamiento directo, dificultando seriamente la labor de defensa de los derechos de la población jornalera agrícola migrante.

La situación que se vive en el albergue de Tanhuato hace eco de circunstancias que se repiten a nivel nacional, como lo atestiguan las tres recomendaciones emitidas por la CNDH relacionadas con la violación de los derechos humanos y laborales de las y los jornaleros agrícolas y sus familias:

- 37/2015, sobre el caso del albergue de los/as jornaleros/as agrícolas en Yurécuaro, Michoacán, emitida en octubre de 2015.
- 70/2016, sobre el caso de las violaciones a los derechos al libre desarrollo de la personalidad, al trato digno y al interés superior de la niñez, al derecho al trabajo, a la seguridad jurídica y a la procuración de justicia, en agravio de jornaleros agrícolas indígenas localizados en una finca en Villa Juárez, San Luis Potosí, emitida en diciembre de 2016.
- 2/2017, sobre la violación a diversos derechos humanos en agravio de personas jornaleras agrícolas del Valle de San Quintín, Ensenada, Baja California, emitida en enero de 2017.

Si bien el Gobierno mexicano a partir de estas recomendaciones ha derivado acciones que han ido progresivamente adoptando medidas con relación a las y los jornaleros que han sido víctimas de delitos y violaciones de sus derechos humanos y laborales, todavía no se han aplicado medidas eficaces para hacer justiciables los derechos de las personas jornaleras y sus familias en México, debido a que las autoridades no han documentado y analizado de forma integral las diversas problemáticas que enfrentan las familias jornaleras, lo cual constituye el principal obstáculo de cara a la respuesta integral que el Estado debe darle a la situación en general de la migración interna agrícola presente en nuestro país.

4.6 SOBRE LAS CONDICIONES DE VIDA DE LOS/AS JORNALEROS/AS MIGRANTES Y SUS FAMILIAS EN LAS COMUNIDADES EN LAS QUE SE HOSPEDAN (PARTICULARES O QUE RENTAN)

San Luis Potosí

En San Luis Potosí, en mayo de 2018, se encontró en el municipio de Villa de Arista, una casa que, según lo dicho por los/as jornaleros/as entrevistados/as, es propiedad del contratista del rancho donde trabajan, de nombre Santa Yolanda:

Es una casa de dos plantas, con cinco habitaciones y tres baños, de los cuales dos no tienen techo ni puertas, por lo que les ponen tela o plástico para cubrirlos. Ahí habitan aproximadamente 90 jornaleros y jornaleras. Las condiciones que observamos fueron: que no se contaba con camas, mucho menos colchones, las personas dormían con cartones y cobijas, paredes rayadas con graffiti, húmedas, sólo piso firme, sin ventanas, con varios espacios sin ventilación ni iluminación. Además, de la falta de servicios, no hay condiciones de higiene y hacinamiento, ya que llegan a haber hasta cuatro familias en un mismo espacio. Ninguna de las personas que habitaba en este lugar contaba con contrato de trabajo.

La alimentación está a cargo del “cabo”, quien paga a dos mujeres para que hagan la comida, una de ellas es su esposa.

Mencionaron que generalmente comen dos veces al día, una alimentación basada en frijol, sopa, arroz y tortilla. La cocina se encuentra entre los dos espacios destinados a los baños, los cuales no tienen ninguna contención de olores y son una gran fuente de infección.

Con el préstamo semanal de 200 pesos que se les proporciona tienen que surtir la despensa y cocinar sus alimentos, tanto la comida en casa, como el lonche necesario para llevar al trabajo. En lo que se refiere a la salud, al no haber servicio médico ni seguridad social en el rancho, los gastos médicos corren por su cuenta; las enfermedades más frecuentes son infecciones del estómago, diarrea, y del sistema respiratorio debido a las malas condiciones de sus viviendas. En el caso de Villa de Arista, el servicio médico en la clínica comunitaria tiene un costo de entre 200 y 250 pesos.

Las condiciones de vivienda varían en los distintos campos, pero los problemas que más destacan son el hacinamiento y la falta de higiene y saneamiento, ya que no hay agua limpia y en ocasiones ni potable, ni sanitarios suficientes, y las galeras se encuentran en pésimas condiciones donde duermen muchas más personas de la capacidad que tiene el lugar.

Guanajuato

Es importante señalar que las familias jornaleras agrícolas que no tienen acceso a los albergues, recurren a rentar o habilitar espacios los cuáles generalmente presentan condiciones físicas deficientes. Casas semiconstruidas, bodegas, o algunos recurren a materiales de construcción frágil o de desecho, además de que no cuentan con servicios básicos como drenaje, agua entubada, sanitarios, entre otros. El hacinamiento es una constante y la falta de servicios públicos agrava la situación de salud de las y los jornaleros, y en particular la de las niñas y niños.

Estas situaciones son tan recurrentes a pesar de que la LFT en su Capítulo VIII Trabajadores del campo, señala en su artículo 283, párrafos II, III y IV la obligación especial que tienen los patrones de:

Suministrar gratuitamente a los trabajadores habitaciones adecuadas e higiénicas. Mantener las habitaciones en buen estado, haciendo en su caso las reparaciones necesarias y convenientes. Proporcionar a los trabajadores agua potable y servicios sanitarios durante la jornada de trabajo.

Los campos agrícolas donde laboran carecen de infraestructura, como estancias infantiles y guarderías para el resguardo de niñas y niños, así como expendios de agua y sanitarios. La LFT en su artículo 283, párrafo XIII enuncia la obligación especial que tienen los patrones de:

Brindar servicios de guardería a los hijos de los trabajadores.

Los traslados que realizan desde las viviendas que rentan a los campos donde laboran, se efectúan en las camionetas (de redilas, doble cabina o pick up, entre otras) de los propios cuadrilleros, mayordomos o cabos. Estas unidades no tienen la capacidad ni están habilitadas para trasladar a los grupos de trabajadores/as agrícolas, en ocasiones estos recorridos son por caminos de terracería, en malas condiciones y a distancias de más de una hora. Se han implementado estos medios de transporte ante la falta de garantía de los agricultores o empleadores de proveérselos como lo señala el artículo 283 párrafo XI de la LFT:

Proporcionar a los trabajadores en forma gratuita, transporte cómodo y seguro de las zonas habitacionales a los lugares de trabajo y viceversa. El patrón podrá emplear sus propios medios o pagar el servicio para que el trabajador haga uso de un transporte público adecuado.





CAPÍTULO V

POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA ATENCIÓN DE LAS PERSONAS JORNALERAS Y SUS FAMILIAS EN MÉXICO: REESTRUCTURACIÓN DE LOS PROGRAMAS, REDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO, LIMITADA COBERTURA DE LA POBLACIÓN OBJETIVO Y AUSENCIA DE DERECHOS

CAPÍTULO V

En México la política pública orientada para la atención de las y los jornaleros agrícolas y sus familias, ha sido constante en el quehacer para garantizar los derechos fundamentales de este sector poblacional, considerados por el Gobierno mexicano como vulnerables por sus propias características y condiciones. De ahí que la gran mayoría de estas acciones se encaminen a atender principalmente problemáticas asociadas a las condiciones de marginación, exclusión y rezago en diferentes aspectos.

A partir de los apartados anteriores, se evidencia que la política pública que se ha venido instrumentando por los gobiernos recientes no ha sido la más adecuada, sobre todo con aquellas que se han orientado para el combate a la pobreza, la marginación, la falta de empleos, el rezago y las carencias sociales. Así lo muestra el contexto actual que pone de manifiesto la presencia de mayor desigualdad social y económica, y la sistemática violación de los derechos humanos y laborales de las personas jornaleras y sus familias en nuestro país.

En este sentido, es claro que las políticas que se han impulsado son de corte *asistencial*, porque no poseen un enfoque integral de mediano y largo plazo, así como de una perspectiva de derechos humanos, intercultural, de género y de infancia, de ahí que poco ayuden a contrarrestar las causas estructurales que generan y reproducen la migración interna agrícola en México.

5.1 PROGRAMA DE ATENCIÓN A JORNALEROS AGRÍCOLAS¹⁰⁰

El Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas (PAJA) tiene como objetivo dentro de sus Reglas de Operación (RO) de 2018:

Contribuir a fortalecer el cumplimiento efectivo de los derechos sociales que potencien las capacidades de las personas en situación de pobreza, incidiendo positivamente en la alimentación, la salud y la educación mediante la reducción de las condiciones de precariedad que enfrenta la población jornalera agrícola y los integrantes de sus hogares.

¹⁰⁰ Con la nueva administración al frente de Andrés Manuel López Obrador, se hicieron diversos cambios a los programas sociales que venía operando la Sedesol, actualmente la Secretaría de Bienestar. Entre ellos, está el Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas (PAJA) que desaparece porque se pretende que “el apoyo llegue directo a la gente, que no sea condicionado ni llegue recortado. En el caso de los jornaleros agrícolas no se tiene un padrón de cuántos son, quiénes y de dónde vienen. Este programa obedeció mucho al apoyo de los más ricos. A los que contrataban a los jornaleros. Ahora tenemos que pensar en horarios laborales, en que los niños no trabajen, no estén expuestos a los tóxicos y tengan espacios escolares. Habrá un tipo de atención a jornaleros agrícolas y a migrantes diferente a como se ha hecho en otros gobiernos”. Se puede consultar el enlace en: <https://www.jornada.com.mx/ultimas/2019/01/21/maria-luisa-albores-se-puso-fin-a-programas-sociales-clientelares-8910.html>

El programa está enfocado directamente a jornaleros agrícolas, es decir, hombres y mujeres de 16 años o más y a los integrantes de sus familias.

La SEDESOL es la entidad normativa del PAJA y la encargada de su operación a nivel nacional. El programa pretende mantener un enfoque interdisciplinario, englobando acciones diversas como la entrega de apoyos económicos, apoyos para infraestructura, y otros servicios y acciones para el desarrollo de la población jornalera agrícola. Sin embargo, esto ha quedado en el pasado, hoy prácticamente no existe el programa y sus acciones se reducen al apoyo para el tránsito migratorio y a una cobertura estatal limitada.

En las RO los apoyos consisten en:

- a. Apoyos directos a la población jornalera: estímulos para la asistencia y permanencia escolar, apoyo económico al arribo. Los apoyos en esta modalidad consisten en:
 - Estímulos económicos para la asistencia y permanencia escolar. Los montos varían según el grado escolar (kínder, primaria y secundaria) que este cursando el niño o niña pertenecientes a un hogar jornalero agrícola.
 - Apoyo económico al arribo: \$800.00 por un máximo de tres ocasiones por hogar en el ejercicio fiscal.

Las acciones federales, algunas esporádicas y otras parciales, para el desarrollo de la población jornalera agrícola consisten en:

- Acciones de protección social y participación comunitaria (sesiones de orientación, campañas de orientación social, grupos de crecimiento social, diagnósticos comunitarios participativos, jornadas informativas y talleres de promoción social, acciones para potenciar el desarrollo, apoyos especiales para contingencias, apoyos alimenticios a las niñas y niños, y apoyos para servicios básicos).
- Acciones para potenciar el desarrollo: actividades de acercamiento (ferias de promoción de los servicios institucionales, jornadas de difusión, entre otras).

- Apoyos especiales para contingencias: transportación de regreso a su lugar de origen, pago de servicios médicos y sanitarios, gastos funerarios.
- Apoyos alimentarios para niños y niñas: hasta dos alimentos diarios por un monto máximo de \$15.07 por ración alimenticia por niña o niño.

Los apoyos para servicios básicos:

- Son subsidios para la construcción, rehabilitación, ampliación, acondicionamiento y equipamiento de vivienda para atender a la Población Jornalera Agrícola en las Unidades de Trabajo.
- El tipo de obras se determinan con base en los diagnósticos locales de la problemática, los que sirven para determinar las prioridades de atención del Programa, en función del mayor beneficio a la población jornalera. Los diagnósticos locales deben ser validados por los Grupos de Coordinación Estatal y la Unidad Administrativa Responsable del Programa (URP).

Sin embargo, en lugar de mejorar e incrementar la cobertura del PAJA y cumplir con sus objetivos, el gobierno federal ha rezagado y prácticamente eliminado la actividad en lugares con presencia de población jornalera, denominados Regiones de Atención Jornalera (RAJ), que comprendía en sus RO¹⁰¹.

¹⁰¹ 1. Apoyos Directos a la Población Jornalera Agrícola: comprenden estímulos para la asistencia y permanencia escolar y el apoyo económico al arribo. 2. Acciones para el Desarrollo de la Población Jornalera: servicios de acompañamiento a la PJA; acciones de promoción y participación social; apoyos especiales para contingencias. 3. Estudios e Investigaciones. 4. Acceso a Servicios y Vivienda: apoyos para infraestructura, incluyendo la definición de los tipos y montos de apoyo.

En este tenor, es importante señalar que la población atendida por el programa de 2008 al 2016 disminuyó un 84%. En 2015, solamente se atendieron a 103,140 personas¹⁰². Ello a pesar de que el presupuesto asignado aumentó un 91% en el periodo de 2008 a 2016¹⁰³.

El PAJA dejó de comprometerse con la promoción social en los campos agrícolas orientada hacia la mejora efectiva de las condiciones de vida de las y los jornaleros, para orientarse hacia un esquema donde lo prioritario es la transferencia de recursos monetarios y la certificación de capacidades y competencias laborales de la población jornalera, así como la instauración de estrategias para apoyar los procesos de certificación empresarial, en coordinación con otros programas. Adicionalmente, en un rubro crucial como lo es el de la construcción de infraestructura, SEDESOL ha entregado recursos públicos a particulares sin cerciorarse de que estos se ejerzan con respeto a los derechos de la población jornalera¹⁰⁴.

En México, se adolece de una verdadera política pública integral que permita dignificar las condiciones de vida y trabajo de las personas jornaleras y sus familias. En su ausencia, se instrumentan diversos programas sociales de corte asistencial, cuyos resultados no han podido contrarrestar las condiciones de pobreza, marginación y desigualdad en las que viven, más bien la alimenta.

Las familias indígenas jornaleras no son reconocidas en la práctica como trabajadoras con derechos, lo que se traduce en que las políticas públicas no promuevan un trato equitativo en cuanto a sus condiciones de trabajo y al otorgamiento de prestaciones sociales.

Esto conlleva por un lado la perpetuación de las condiciones de explotación, de exclusión social y de extrema pobreza, y por el otro, al fortalecimiento de los intereses particulares que privan por encima de los derechos de la población jornalera, como lo son los intereses de los productores agrícolas, de algunas autoridades, de los intermediarios, de sindicatos y otras organizaciones con fines de lucro.

5.2 PROGRAMAS PARA LAS PERSONAS JORNALERAS EN EL SECTOR AGRÍCOLA INSTRUMENTADOS POR LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) a través de los servicios de vinculación laboral brinda apoyos a las y los jornaleros agrícolas, a partir de la bolsa de trabajo, de las ferias de empleo que se llevan a cabo en algunas regiones de los estados expulsos, en su portal del empleo, y el reclutamiento que efectúa el Servicio Nacional del Empleo (SNE), así como los Sistemas Estatales de Empleo (SEE). El SNE a través del Programa de Apoyo al Empleo (PAE) promueve la colocación de empleos en aquellos puestos de trabajo o actividades productivas mediante apoyos económicos para la movilidad laboral agrícola.

A continuación, se describen algunos programas y proyectos que ha instrumentado en la última década la STPS, con la finalidad de garantizar mejores condiciones laborales para las y los jornaleros agrícolas en sus centros de trabajo, así como los medios para el respeto de sus derechos laborales.

¹⁰² Es una referencia oficial, no hay suficientes elementos de control de acciones en el PAJA.

¹⁰³ Castañeda, Norma, Cruickshank, Susana, Guerke, Lene y Verduzco, Marisa. "Diagnóstico sobre la situación de las políticas públicas y legislación para personas jornaleras agrícolas migrantes en México", Centro de Estudios en Cooperación Internacional y Gestión Pública, A.C., México, 2016, pp.8.

¹⁰⁴ Op. cit. "La Montaña de Guerrero: Tierra de Mujeres Migrantes", pág. 101.

Movilidad laboral para el Sector Agrícola

El SNE otorga apoyos económicos para la movilidad laboral, que básicamente están destinados para el transporte de las personas que desean vincularse en un puesto de trabajo ubicado en una localidad distinta a la de su residencia a través de dos modalidades:

- Los subprogramas Movilidad Laboral Sector Agrícola, y
- Los subprogramas Movilidad Laboral Sectores Industrial y de Servicios.

Respecto a los subprogramas movilidad laboral vinculados al sector agrícola, la secretaría en su 5º Informe de Labores de 2016-2017, señala que, entre septiembre de 2016 y junio de 2017, en el sector agrícola se apoyó a 60,665 personas, de las cuales se colocó a 42,912, con una tasa de efectividad de 70.7%. Entre enero y junio de 2017, se apoyó la movilidad laboral de 33,021 jornaleros agrícolas, de los cuales 20,327 se colocaron en un empleo por jornal en actividades agropecuarias, con una tasa de colocación de 61.6%¹⁰⁵.

Certificación de Competencias Laborales

La STPS por novena ocasión consecutiva, suscribió con el Instituto Nacional para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural (INCA Rural) las Bases de Colaboración y el Anexo Técnico para la operación del proyecto *Acreditación de habilidades y certificación de competencias laborales de las y los jornaleros agrícolas*. Con este proyecto, en su informe destaca que de septiembre de 2016 a junio de 2017 se logró la certificación de competencias laborales de 931 jornaleros agrícolas de Baja California, Jalisco y Sonora, de los cuales 238 (25.5%) son mujeres y 693 (74.5%) hombres. También reportó que se redujo en

6% la brecha de género en la certificación de competencias en este sector de la economía. Los resultados muestran que se ha certificado a 26,770 jornaleras y jornaleros agrícolas, lo que representa un incremento de 53.5% respecto a la administración pasada. A partir de 2008, año en que se inició este proyecto, y hasta 2012 se habían certificado 17,439 personas jornaleras¹⁰⁶.

Erradicación del Trabajo Infantil Agrícola

Esta dependencia ha impulsado diversas acciones para fomentar las buenas prácticas en los centros de trabajo agrícola, como la entrega del Distintivo Empresa Agrícola Libre de Trabajo Infantil (DEALTI). Así la STPS reconoce a los centros de trabajo agrícola que rechazan el empleo de mano de obra infantil y demuestren la aplicación de una política de cuidado y protección infantil, que contribuya al desarrollo de los hijos e hijas de familias jornaleras.

En su informe, señala que el 13 de diciembre de 2016, la secretaría otorgó reconocimientos del DEALTI a 68 centros de trabajo agrícola de 12 entidades federativas: Baja California, Baja California Sur, Colima, Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Puebla, Querétaro, Sinaloa y Sonora, que demostraron acciones positivas en favor del cuidado y protección de las niñas y niños del campo¹⁰⁷, sin embargo hemos constatado que aun en algunas de estas entidades se encubre el trabajo infantil, en Armería, Colima, los/

¹⁰⁵ "5º Informe de Labores 2016-2017", Secretaría del Trabajo y Previsión Social, México, 01 de septiembre de 2017, pág. 25.

¹⁰⁶ *Ibid.*, pág. 36.

¹⁰⁷ *Ibid.*, pág. 38.

as niños/as cortan limón en las mañanas, en la tarde van a la escuela y reciben apoyo del Programa PROSPERA Programa de Inclusión Social, este es un tema que necesita una reflexión mayor.

Vinculación interinstitucional

En su informe describe la implementación de mecanismos de vinculación y coordinación interinstitucional para favorecer la empleabilidad de las personas en situación de vulnerabilidad, entre ellos se ubica a las personas jornaleras. Menciona que, del 1 de septiembre de 2016 al 30 de abril de 2017, los Grupos de Coordinación Estatal de 27 entidades federativas en los que participan autoridades de los tres órdenes de gobierno, tuvieron 20 reuniones plenarias de trabajo para crear sinergias que incrementen la eficiencia de los programas dirigidos a la población jornalera agrícola¹⁰⁸.

Inspecciones en campos agrícolas

Respecto a los operativos o visitas de inspección en seguridad y salud realizados por la STPS a las empresas agrícolas por ser competencia de la autoridad federal laboral, apunta que de septiembre de 2016 a junio de 2017 se llevaron a cabo 326 inspecciones en campos agrícolas, donde laboraban 27,713 mujeres y 58,230 hombres; se detectó a 62 trabajadores menores de 16 y 18 años, y se dictaron 10,984 medidas técnicas. Hasta junio de 2017 se efectuaron 135 inspecciones en campos agrícolas, donde laboraban 16,937 mujeres y 33,711 hombres; como resultado se dictaron 5,667 medidas técnicas y una por violaciones a la normatividad¹⁰⁹.

Talleres de capacitación sobre derechos laborales de las mujeres jornaleras agrícolas

Dentro de los objetivos de la STPS, está la promoción del acceso de las mujeres al empleo decente, garantizando con ello los derechos laborales de las mujeres jornaleras agrícolas, sus hijos e hijas, incluyendo salario y seguridad social. En su informe de labores reporta que, del 1 de septiembre de 2016 al 30 de junio de 2017, en coordinación con la Procuraduría Agraria, el INMUJERES y la CDI, impartieron 101 talleres de formación sobre derechos humanos, laborales y agrarios con perspectiva de género a 3,819 personas en localidades de alta migración. De éstas, 868 (22.8%) son mujeres y 2,951 (77.2%) hombres, de 78 localidades de 59 municipios en: Baja California, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán¹¹⁰.

A manera de balance, se puede apreciar que a partir de los subprogramas movilidad laboral vinculados al sector agrícola, el objetivo central de la Secretaría del Trabajo es vigilar la aplicación de las disposiciones contenidas en el Artículo 123 de la Carta Magna, y lo relativo en la LFT y sus reglamentos, además también se ocupa de promover acciones que faciliten el acceso de las y los jornaleros agrícolas al mercado de trabajo rural en el país, basados en el marco del respeto de los derechos fundamentales y colectivos de las y los trabajadores agrícolas.

¹⁰⁸ *Ibid.*

¹⁰⁹ *Ibid.*, pág. 47.

¹¹⁰ *Ibid.*, pág. 70.

Sin embargo, retomando los diferentes testimonios o situaciones presentadas en los diferentes apartados de este informe, se evidencia y visibiliza claramente la sistemática violación de los derechos humanos y laborales de las personas jornaleras y sus familias, debido a que carecen de condiciones dignas para el desarrollo de sus actividades, no cuentan con contratos de trabajo y prestaciones, sus jornadas laborales no están reguladas y las realizan en condiciones insalubres, inseguras y sin supervisión por parte de las autoridades del trabajo.

Se ha constatado como empleadores y algunas autoridades pasan por alto las cláusulas de la LFT referidas a los/as trabajadores/as del campo. También ha faltado coordinación interinstitucional entre los tres órdenes de gobierno con la finalidad de generar propuestas y acciones en materia de política pública con un enfoque integral, que cuenten con un presupuesto específico y alternativas reales focalizadas para el desempeño laboral y desarrollo económico de las y los jornaleros agrícolas y sus familias.

El programa de movilidad laboral presenta vacíos en sus reglas de operación, debido a que solamente considera la situación de las grandes regiones agrícolas, pero no contempla su operatividad en aquellas regiones con pequeños productores, que solamente contratan de manera individual a la población jornalera. El programa del SNE tiene una serie de candados que no permite que estos apoyos económicos se otorguen a las familias jornaleras que viajan y se emplean por su cuenta. Estos apoyos se entregan en estas modalidades con la finalidad de garantizar los derechos de la población jornalera, no obstante, algunas organizaciones integrantes de la Red Nacional de Jornaleros y Jornaleras Agrícolas han documentado testimonios en donde empresas agrícolas participantes de estos programas, han violentado los derechos laborales de sus trabajadores/as.

Respecto a las inspecciones laborales, aún falta establecer mejores mecanismos de coordinación y coadyuvancia entre los estados expulsores y de

atracción de mano de obra jornalera, sobre todo aquellas que carecen de inspecciones laborales. Es importante destacar que las inspecciones se realizan con mayor frecuencia en los estados donde se ubican las agroempresas dedicadas a la horticultura de exportación. En aquellas entidades donde la contratación de mano de obra por agricultor es menor a 500 trabajadores, es visible la ausencia de las inspecciones de trabajo, a pesar de que se ha constatado la presencia de menores de edad y de mujeres embarazadas trabajando en los campos de cultivo¹¹¹.

Las inspecciones federales sólo contemplan la supervisión en los espacios confinados a la zona de cultivo, dejando los espacios de vivienda, guarderías, aulas y módulos de salud a la Dirección del Trabajo que hay en cada entidad. Cuando se notifica previamente cualquier inspección, es evidente la complicidad en algunos casos de la autoridad con los propietarios de los campos, o bien, el personal incurre en omisiones claras, y de amenaza sobre los/as trabajadores/as para evitar denunciar cualquier irregularidad en las condiciones de infraestructura y servicios en las zonas laborales o de vivienda¹¹².

Las políticas que ha implementado la Secretaría del Trabajo para certificar a las empresas agrícolas principalmente a las agroexportadoras se basan en procesos de certificación privada, debido a los mecanismos reguladores de competencia del mercado internacional, mientras que a nivel nacional la política con la que operan

¹¹¹ *Op. cit.* "La Montaña de Guerrero: Tierra de Mujeres Migrantes", pp. 81-82.

¹¹² *Ibid.*

estos mecanismos es muy flexible con los medianos o pequeños agricultores que distribuyen sus productos en el mercado nacional, y que han crecido en la última década. Tampoco se disponen de cláusulas que obliguen a estos agricultores a presentar periódicamente informes sobre las condiciones de trabajo que brindan a sus trabajadores/as.

Frente a este escenario la responsabilidad del Estado mexicano se diluye como garante de derechos por la poca capacidad que tiene para sancionar los abusos. Por el contrario, pareciera que el modelo se centra en garantizar la certificación de las empresas agroexportadoras, para que puedan acceder a mayores garantías para la venta de sus productos en el mercado internacional. Para ello, los agricultores requieren de una fuerte inversión de recursos empresariales, de los subsidios del gobierno federal y estatal, limitando por mucho la inversión social en programas que realmente sean efectivos y que beneficien directamente a las personas jornaleras.

Finalmente, es importante precisar que a pesar de los ajustes y cambios a la política laboral y ante la ausencia de un abordaje integral, el Estado mexicano no ha tenido la capacidad de garantizarles, restituirles y hacer justiciables los derechos de las y los jornaleros agrícolas, ni de proponer alternativas para el goce pleno en condiciones de igualdad laboral apegadas a la normatividad nacional y a los estándares internacionales de derechos humanos, bajo esquemas de protección y seguridad de cualquier tipo de discriminación y violencia, con la premisa de contar con el acceso a sus derechos básicos como a la salud, a la alimentación, educación, a una vivienda digna, a un trabajo justo, así como de posibilidades de desarrollo social, productivo y educativo en los lugares donde están trabajando.

Por el contrario, estas acciones derivadas de las políticas laborales para el sector agrícola están ocasionando que las familias jornaleras opten por incorporarse en nichos agrícolas donde carecen aún más de cualquier

seguridad en el trabajo, acrecentando aún más su vulnerabilidad por ser trabajadores y trabajadoras agrícolas, por ser indígenas, y por ser migrantes.

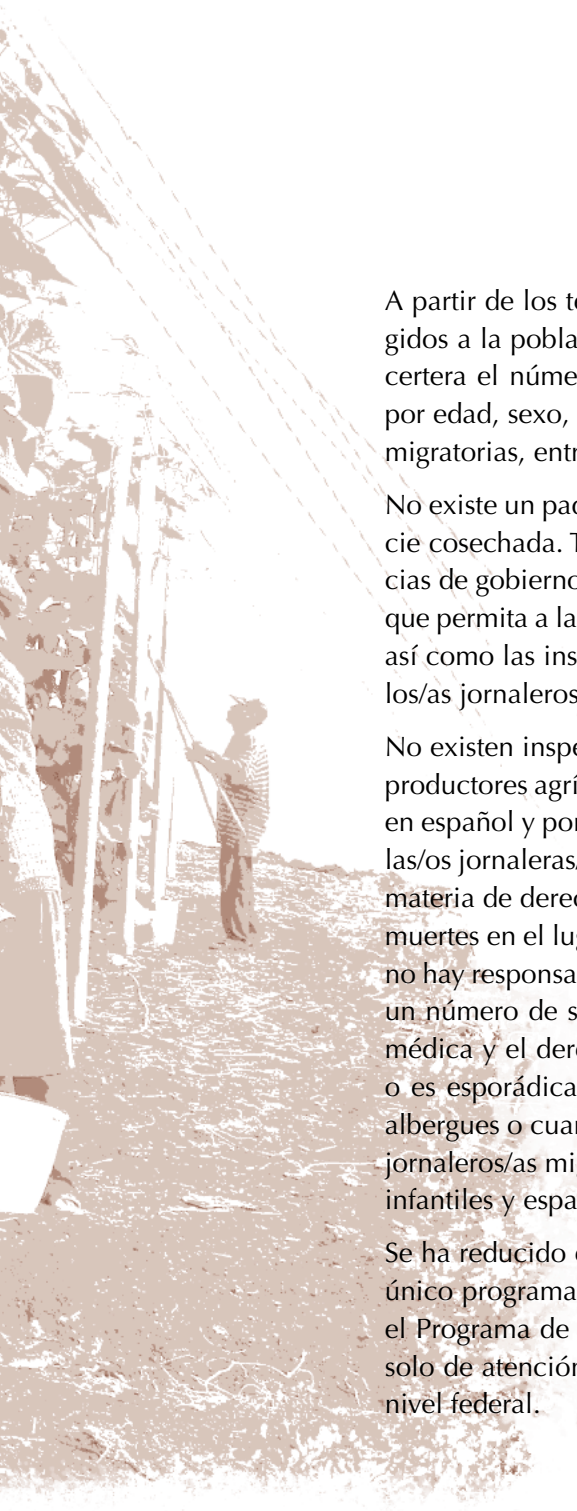


A partir de los testimonios presentados y del balance de los principales programas dirigidos a la población jornalera en México, se puede derivar que no se conoce de forma certera el número de personas migrantes jornaleras agrícolas internas en nuestro país: por edad, sexo, condición migratoria por entidad federativa, origen étnico, flujos y rutas migratorias, entre otras.

No existe un padrón actualizado de productores por entidad federativa, cultivo y superficie cosechada. Tampoco existe información o diagnósticos vigentes por parte de instancias de gobiernos a nivel local, municipal y estatal en los estados de origen y de destino, que permita a las personas jornaleras agrícolas conocer sus derechos humanos laborales, así como las instancias que les defienden y acompañan. Existe una total indefensión de los/as jornaleros/as agrícolas en materia de derechos humanos laborales.

No existen inspecciones y supervisiones sobre las condiciones de trabajo, por tanto, los productores agrícolas infringen la ley, la cual estipula una jornada de trabajo, un contrato en español y por escrito y prestaciones de ley. Las condiciones de trabajo en que laboran las/os jornaleras/os están fuera de la ley y de lo que establece el derecho internacional en materia de derechos humanos laborales. Ejemplos de ellos, son los riesgos, accidentes y muertes en el lugar trabajo que por lo general no se registran como tal, y frecuentemente no hay responsables. El IMSS por su parte no ha realizado ninguna acción para otorgarles un número de seguridad social a los/as jornaleros/as agrícolas. El acceso a la atención médica y el derecho a la salud de los/as trabajadores/as agrícolas y su familia no se da o es esporádica y precaria. Las condiciones de vida de las personas jornaleras en los albergues o cuarterías son un atentado a sus derechos humanos. Los/as hijos/as de los/as jornaleros/as migrantes no cuentan con el acceso a servicios como guarderías, estancias infantiles y espacios educativos, por mencionar algunos.

Se ha reducido el gasto social para la atención de las personas jornaleras en México. El único programa social creado y focalizado para la población jornalera, en este sentido el Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas (PAJA) ha dejado de jugar su papel, no solo de atención a jornaleros/as sino como líder de la coordinación interinstitucional a nivel federal.



RECOMENDACIONES

**RECOMENDACIONES DE POLÍTICA PÚBLICA
CON ENFOQUE DE DERECHOS*****Para la Secretaría de Gobernación***

- a. Generar interlocución con los propios actores para la construcción de la política pública.
- b. La creación de mesas de trabajo con una perspectiva integral e integrada por todas las dependencias involucradas en la atención de las personas jornaleras a nivel estatal y nacional, para la atención de la violación de los derechos humanos de las y los jornaleros.

Para la Secretaría de Desarrollo Social

- a. Que levante un padrón de personas jornaleras migrantes internas con perspectiva de género e interculturalidad.
- b. Que el PAJA se convierta en un programa prioritario para la SEDESOL, con base en un enfoque que respete, promueva y garantice los derechos humanos, con una perspectiva de género, infancia e interculturalidad.
- c. Que el PAJA reintegre en su equipo de trabajo la promoción social.
- d. Que se operen programas de atención focalizados para las mujeres jornaleras.

Para la Secretaría del Trabajo y Previsión Social

- a. Garantizar que sus inspecciones a los centros de trabajo contribuyan a garantizar las condiciones laborales que marca la LFT, y las responsabilidades estipuladas en esta en lo que respecta a las condiciones de vivienda de las personas trabajadoras y sus familias.
- b. Que vigile las ofertas de trabajo y procesos de reclutamiento en la movilidad laboral agrícola interna y se comprometa a vigilar el cumplimiento de la LFT.
- c. Que genere un padrón vigente de empresas agrícolas registradas ante la SHCP.

Para la Secretaría de Salud

- a. Que inspeccione las condiciones de vivienda (con especial atención en albergues y los servicios que estos proporcionan como las guarderías, centros educativos, entre otros).
- b. Atender y prevenir los problemas de salud de la población migrante, en especial, los de la niñez y las mujeres embarazadas.
- c. Que implemente el diseño de diagnósticos que contemplen aspectos como la: prevención, nutrición, enfermedades crónico-degenerativas, efectos y secuelas por el contacto con agroquímicos, riesgos y accidentes de trabajo, entre otras.
- d. Que se garantice el acceso y seguimiento integral de casos urgentes relacionados con embarazos de alto riesgo, enfermedades y accidentes por riesgo de trabajo. Así como de enfermedades gastrointestinales, oftalmológicas o no consideradas como graves.
- e. Que el sector salud garantice el apoyo integral de intérpretes y/o traductores en los centros médicos u hospitalarios, priorizando las zonas que presenten el mayor flujo poblacional de personas jornaleras indígenas.

Para la Secretaría de Educación Pública

- a. A nivel de política pública es importante reconocer un documento rector en materia de política pública emitido por el Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE), “Directrices para mejorar la atención educativa de niños y niñas y adolescentes de familias de jornaleros agrícolas migrantes”, el cual parte de un diagnóstico que recoge algunos de los aspectos antes mencionados. Estas Directrices si bien no tienen carácter vinculatorio, son un referente de construcción de política pública, las cuáles fueron aceptadas por las 32 entidades federativas. Se requiere que los estados traduzcan estas directrices en planes, programas y presupuestos para la atención de NNA jornaleros agrícolas.

Otros retos que hemos documentado son:

- a. *Diagnóstico*
 - Identificar a los NNA indígenas migrantes a través de censos que aporten datos sobre contexto, ruta migratoria y condiciones laborales de sus familias.
 - Generar coordinación entre las direcciones de Desarrollo Rural de los municipios y las delegaciones federales de la SEP, SEDESOL, DIF para levantamiento y procesamiento de información.

b. Formación / Marco teórico

- Tener un conocimiento mucho más profundo sobre el tema de los derechos humanos, por parte de quienes están en la función pública; así como conocer las normas internas e internacionales. Conocer el nuevo paradigma de los Derechos de los NNA.

c. Coordinación y colaboración intersectorial

- Generar acuerdos interestatales de los estados que integran los circuitos migratorios en alianza con los estados expulsores.
- Realizar un trabajo intersecretarial en estados receptores y expulsores que busquen garantizar el ejercicio pleno de los derechos humanos en coordinación con las dependencias estatales, federales y representantes de sociedad civil y academia.
- Destinar un enlace por entidad, a cargo de los procesos de información y seguimiento de las niñas y los niños y adolescentes y su trayectoria educativa.
- Dar seguimiento a los estudiantes y fortalecer la comunicación entre los estados de la ruta migratoria, para tener claridad de los contextos de expulsión y arribo y generar alternativas educativas pertinentes al contexto.

d. Sistema de Control Escolar

- Homologar y/o integrar un Sistema Unificado de Información que permita dar continuidad a las trayectorias educativas de los NNA que transitan entre la educación formal y programas compensatorios.
- Desarrollar mecanismos de orden académico y de orden administrativo, para realizar una trayectoria escolar continua, que contemple un constante intercambio de información útil, sobre todo, para la atención de estas niñas y niños.
- Emitir certificado y/o documentación.

e. Modelo Educativo

- Adaptación de la escuela al contexto migratorio.
- Recuperar metodologías, socializarlas y construir un programa educativo específico para atender a NNA jornaleros agrícolas respondiendo al contexto.
- Contar con apoyo técnico para ir construyendo indicadores, acerca de cómo vamos valorando el proceso de atención en relación a los/as niños/as migrantes.
- Maestros/as que hablen la lengua materna capacitados/as en educación intercultural, para lo cual se puede solicitar el apoyo del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.

f. Acciones afirmativas

- Estímulos para la asistencia a la escuela: Beca PAJA y la generación de programas de apoyo económico para estimular que los NNA jornaleros agrícolas acudan a la escuela.
- Invertir en infraestructura. Convenios con PAJA para Guarderías y Estancias Infantiles.

Para el Sistema de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes

- a. Que en los niveles municipal, estatal y federal supervisen y generen mecanismos de restitución de derechos con la participación de los propios sujetos.

Para el Instituto Mexicano del Seguro Social

- a. Que la Ley del IMSS genere los componentes para el registro de las personas jornaleras, con la finalidad de garantizarles un retiro digno, comenzando por establecer un mecanismo para la asignación de un número de seguridad social.

Para la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos

- a. Que fije un salario profesional digno para las personas jornaleras.

Para la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación

- a. Que levante un padrón de productores por entidad, donde se registre nombre del productor o razón social, superficie cosechada y número de trabajadores. Con una actualización de cada dos años como máximo.

Para la Comisión Nacional de Derechos Humanos, las Comisiones Estatales de Derechos Humanos y las Procuradurías de Derechos Humanos

- a. Que vigilen el trabajo de las autoridades competentes tanto en el origen, tránsito como en el destino de personas migrantes jornaleras agrícolas y den seguimiento a las recomendaciones y resoluciones emitidas.

BIBLIOGRAFÍA

Alianza para la inocuidad de los productos agrícolas frescos y mínimamente procesados entre la COFEPRIS, el SENASICA y la FDA una alianza dinámica en acción, México y Estados Unidos, junio de 2018.

Barrón, Antonieta, “Empleo en la agricultura de exportación en México”, Facultad de Economía, UNAM, Juan Pablos Editor S.A., México, 1997.

Castañeda, Norma, Cruickshank, Susana, Guerke, Lene y Verduzco Marisa. “Diagnóstico sobre la situación de las políticas públicas y legislación para personas jornaleras agrícolas migrantes en México”, Centro de Estudios en Cooperación Internacional y Gestión Pública A.C., México, 2016.

Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, “La Montaña de Guerrero: Tierra de Mujeres Migrantes”, Fundación Ford, Tlapa, Guerrero, México, 2016.

Clériga, Deyanira y Aldo, Ledón, “Caminando en la cuerda floja: jornaleras y jornaleros indígenas migrantes en México, entre la explotación laboral y la trata de personas”, en *Trata de personas. Un acercamiento a la realidad nacional*. CNDH, 2018, (En imprenta).

Colectivo de Investigación y Acción Solidaria, “Cadena productiva y comercial de berries. El caso Driscoll’s”, México, 2018.

Consejo Ciudadano del Instituto Nacional de Migración México. Informe Final, “Personas en detención migratoria en México. Misión de Monitoreo de Estaciones Migratorias y Estancias Provisionales del Instituto Nacional de Migración”, julio de 2017.

Consejo Nacional de Población, México, 2016.

FAO. Faostat 2013.

Gómez Oliver, Luis, “Evolución del empleo y de la productividad en el sector agropecuario en México”. Editado por Naciones Unidas, CEPAL, FIDA, 2016.

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Censo de Población 2010.

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2014.

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Censo Económico 2014.

Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), “Directrices para mejorar la atención educativa de niñas, niños y adolescentes de familias de jornaleros agrícolas migrantes y adolescentes de familias de jornaleros agrícolas migrantes”, México, 2016.

Ley Federal de Trabajo (Versión actualizada).

Massey, Douglas S., Durand, Jorge y Malone, Nolan J., “Ensamblaje de la maquinaria: una historia de la migración México-Estados Unidos”, en *Detrás de la trama. Políticas migratorias entre México y Estados Unidos*, Miguel Ángel Porrúa, Universidad Autónoma de Zacatecas, México, 2009.

Muñoz Coronado, Amparo, “Los jornaleros agrícolas de San Salvador, El Seco. Puebla. Las voces de las mujeres contratistas”. En el libro *Coordinadoras*. Barrón A, Cabezas D. y Sifuentes E. *Mujer y crisis en México. Una perspectiva socioeconómica*, 2018, (en dictamen).

Módulo de Trabajo Infantil (MTI) de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del INEGI 2013.

Ortiz, C. y Revilla, U., “Presentación migración. Vulnerabilidad, precariedad”. Revista de Ciencias Sociales y Humanidades, UAM Iztapalapa, junio, 2013.

Reglas de Operación del Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas 2018.

Respuesta Alternativa A.C., Informe “Migración interna (Jornaleros internos)”, Catholic Relief Services, San Luis Potosí, México, 2014.

Rojas Rangel, Teresa J., “Migración rural jornalera en México: la circularidad de la pobreza”, *Iberoforum*. Revista de Ciencias Sociales de la Universidad Iberoamericana, vol. XII, núm. 23, enero-junio, Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, México, 2017.

Sánchez Saldaña, Kim, “Contratistas y enganchadores: viejas y nuevas formas de intermediación”, en *La Jornada del Campo*, número 94, 18 de julio de 2015.

Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Cuadernos de Trabajo N°. 7, 1994.

Secretaría del Trabajo y Previsión Social, “5º Informe de Labores 2016-2017”, 01 de septiembre de 2017.

SITIOS WEB

Agabo, Berenice, “Jornaleros agrícolas de Tanhuato denuncian amenazas de parte de funcionarios públicos”, *Revolución3.0*, 18 de diciembre de 2016, en: <http://michoacantrespuntocero.com/jornaleros-agricolas-de-tanhuato-denuncian-amenazas-de-parte-de-funcionarios-publicos/>

Comisión Nacional de Derechos Humanos en: http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Recomendaciones/2015/Rec_2015_058.pdf

Comisión Nacional de Derechos Humanos en: http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Recomendaciones/2015/Rec_2015_037.pdf

Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) 2010, “Grado de Rezago Social por Estado. Principales resultados Chiapas”, en: <http://www.sipaz.org/chiapas-en-datos/>

Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) 2010, “Grado de Rezago Social por Estado. Principales resultados Oaxaca”, en: <http://www.sipaz.org/oaxaca-en-datos/>

Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) 2010, “Grado de Rezago Social por Estado. Principales resultados Guerrero”, en: <http://www.sipaz.org/guerrero-en-datos/>

Consejo Nacional de Población (CONAPO) 2016, “Índice de marginación por entidad federativa y municipio 2015”, en: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/159051/00_Preliminares.pdf

Debate, 12 de enero de 2018: <https://www.debate.com.mx/mazatlan/Denuncian-abandono-del-albergue-en-Isla-del-Bosque-20180112-0078.html>

Debate, 14 de junio de 2018: <https://www.debate.com.mx/sinaloa/teacapan-albergues-inversion-escuinapa-isla-del-bosque-fernanda-oceguera-20180614-0171.html>

Durand, J., “Procesos y patrones migratorios. Migración México-Estados Unidos”, Universidad de Guadalajara, 2015, en: <https://vimeo.com/123679734>

El Financiero, 08 de diciembre de 2015: <http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/sedesol-revisara-todos-los-albergues-para-jornaleros-agricolas>

El Herald León: <http://www.heraldoleon.mx/los-jornaleros-solicitan-apoyo-la-seg/>

El Universal, 04 de julio de 2014: <http://archivo.eluniversal.com.mx/estados/2014/jornaleros-accidente-san-luis-potosi-1021108.html>

Excelsior, 10 de agosto de 2018: <https://www.excelsior.com.mx/nacional/acusan-a-policias-de-tanhuato-de-extorsionar-a-jornaleros/1257910>

IDI Media, 14 de agosto de 2018: <https://www.idimedia.com/investigaciones-disruptivas/casi-estamos-en-una-carcel-jornaleros-de-tanhuato/>

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) 2010, “Indicadores por entidad federativa”, en: <http://www.sipaz.org/guerrero-en-datos/>

Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas (PAJA) de marzo del 2016: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/128228/Nota_de_actualizacion_de_las_poblaciones_potencial_y_objetivo_del_PAJA_2016.pdf

RedTDT en: <https://redtdt.org.mx/wp-content/uploads/2014/08/INFORME-JORNALEROS-MIGRANTES.pdf>

Red TDT, 21 de febrero de 2018: <https://redtdt.org.mx/?p=10364>

Revolución3.0, 18 de diciembre de 2016: <http://michoacantrespuntocero.com/jornaleros-agricolas-de-tanhuato-denuncian-amenazas-de-parte-de-funcionarios-publicos/>

Rojas Rangel, Teresa J., “Migración y ocupación de la fuerza de trabajo infantil en las regiones agroexportadoras”. Revista Rayuela. Revista Iberoamericana sobre niñez y juventud en lucha por sus derechos, 2009, en:

<http://revistarayuela.ednica.org.mx/sites/default/files/Art.%20Teresa%20Rojas%20Rangel.pdf>

SDPnoticias.com: <https://www.sdpnoticias.com/nacional/2016/03/26/viven-en-alta-marginacion-163-millones-de-mexicanos>

**VIOLACIÓN
DE DERECHOS
DE LAS Y LOS
JORNALEROS
AGRÍCOLAS
EN MÉXICO**

PRIMER INFORME

Impreso en Diversidad Grafica, S.A. de C.V.
Ciudad de México, México.
Febrero de 2019.
Tiraje 1,000 ejemplares



RED NACIONAL DE JORNALEROS
Y JORNALERAS AGRÍCOLAS



CDIL
CENTRO DE DESARROLLO
INDÍGENA LOYOLA



Camino
Centro de Acompañamiento a Migrantes A.C.



TLACHINOLLAN
CENTRO DE DERECHOS HUMANOS DE LA MONTAÑA



RESPUESTA ALTERNATIVA A.C.
Servicio de Derechos Humanos
y Desarrollo Comunitario



enlace
comunicación y capacitación, a. c.



CECIG
Centro de Estudios en Cooperación Internacional
y Gestión Pública, A.C.



CONSEJO DIRECTIVO
MIXTECO ALTO
SONORA MÉXICO



UNAM
FACULTAD
DE
ECONOMÍA



VOCES
MESOAMERICANAS
ACCIÓN CON PUEBLOS MIGRANTES